



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado

Facultad de Ciencias Sociales

Unidad de Posgrado

**Políticas de estado y sus efectos en los derechos
colectivos de los pueblos indígenas amazónicos, en el
periodo 2001 – 2008**

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Sociología con
mención en Estudios Políticos

AUTOR

Olinda Victoria LEMA TUCKER

ASESOR

Héctor BÉJAR RIVERA

Lima, Perú

2017



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Lema, O. (2017). *Políticas de estado y sus efectos en los derechos colectivos de los pueblos indígenas amazónicos, en el periodo 2001 – 2008*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UNIDAD DE POSGRADO

ACTA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN SOCIOLOGÍA, MENCIÓN EN ESTUDIOS POLÍTICOS

En Lima, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Grados de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a horas 10:00 a.m., bajo la Presidencia del Mg. CÉSAR AUGUSTO ESPINOZA CLAUDIO y con la concurrencia de los demás Miembros del Jurado Examinador, se inició el acto académico invitando a la graduanda **OLINDA VICTORIA LEMA TUCKER**, para que realice la sustentación de su Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Sociología, mención en Estudios Políticos, titulada:

**“POLÍTICAS DE ESTADO Y SUS EFECTOS EN LOS DERECHOS
COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS, EN EL
PERIODO 2001-2008”**

B MUY BUENO-17

Por cuanto, el Jurado, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, acordó recomendar a la Facultad de Ciencias Sociales para que proponga que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgue el Grado Académico de Magíster en Sociología, mención en Estudios Políticos, a la Bachiller **OLINDA VICTORIA LEMA TUCKER**. Siendo las 6:00 p.m. y para constancia dispuso se extendiera la presente Acta y firmaron:

Mg. César Augusto Espinoza Claudio.
PRESIDENTE

Mg. Enrique Marino Jaramillo García.
MIEMBRO

Dr. Julio Víctor Mejía Navarrete.
MIEMBRO

Dr. César Armando Germaná Caverro.
MIEMBRO

Dr. Héctor Bejar Rivera.
ASESOR



OLÁS JAVIER LYNCH GAMERO
DIRECTOR

PABELLÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI – CIUDAD UNIVERSITARIA

Teléfono: 6197000 Anexo 4003, 4004. Lima – Perú.

Correo: upg.sociales@unmsm.edu.pe, upgccss@yahoo.es,

Web: <http://sociales.unmsm.edu.pe/>

A los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y
contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nantis y otros,
afectados por las actividades de hidrocarburos
del proyecto Camisea

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, en particular a los pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial que habitan en la Reserva Territorial Kuguapakori, Nahua, Nanti y otros. A los líderes indígenas, hombres y mujeres, con quienes trabajé cuandome desempeñé como funcionaria del Estado en Palacio de Gobierno.

En especial, deseo dar las gracias al curaca José Dishpopidiwa, líder del pueblo en aislamiento Nahua (Yora), sin cuya experiencia de vida en los remotos bosques amazónicos, hoy en día afectados por la explotación del proyecto Camisea, no hubiera sido posible escribir la presente tesis. Y el agradecimiento también paraAIDSEP, instituciónque meproporcionó el escenario ideal para conocer más de cerca el creciente conflicto socioambiental causado por la explotación de los hidrocarburos en toda la Amazonía.

Mi eterno agradecimiento va también para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en particular a los profesores César Germaná, Sinesio López, Julio Mejía, Tirso Molinari, Cristóbal Aljovín y mis maestros, que no están ya entre nosotros, Carlos Franco y Carlos Iván Degregori, por la valorada formación científica que me brindaron.

Expreso mi profundo reconocimiento a mi asesor de tesis, Dr. Héctor Béjar Rivera, por su paciencia, dedicación, motivación y aliento alpermitirme desarrollar las principales ideas del presente trabajo, recibiendo de él comentarios valiosos, toda vez que su guía ha sido decisiva para la culminación de la presente investigación. La gratitud se hace extensiva al Dr. Rodrigo Montoya, quien aceptó revisar esta tesis aportando irremplazables observaciones al otorgarme valoradas horas para intercambiar puntos de vista, pese a sus numerosos compromisos académicos.

Finalmente, deseo expresar mi profundo amor y agradecimiento a mi familia, por su permanente colaboración y por comprender mis ausencias de orden

académico. Todos ellos facilitaron la elaboración y redacción de la presente investigación con sus pertinentes contribuciones. Por su generoso apoyo, por sus provechosas recomendaciones y su invalorable comprensión, les estaré eternamente agradecida.

ÍNDICE

RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
INTRODUCCIÓN	1
 Capítulo I: Planteamiento de la investigación	
1.1. Problemas y preguntas de la investigación	4
1.2. Justificación	4
1.3. Hipótesis	6
1.4. Objetivos	9
	9
 Capítulo II: Marco teórico	
2.1. Antecedentes de la investigación	11
2.2. Bases teóricas	11
	15
 Capítulo III: Metodología	
3.1. Tipo de Investigación	26
3.2. Nivel de Investigación	26
3.3. Diseño de la Investigación	26
3.4. Universo y muestra	26
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	26
	27
 Capítulo IV: Situación de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana	
4.1. Contexto socioespacial: características de la Amazonía peruana	28
4.2. La conformación legal de los pueblos indígenas en el Perú	28
4.3. El régimen jurídico internacional	34
4.4. El debate sobre el territorio indígena en América Latina y el Perú	41
4.5. Estado, pueblos indígenas y empresas: concepciones e intereses sobre el territorio	44
	49

Capítulo V: Conflictos sociales en territorio amazónico: el caso de Camisea y el levantamiento de los pueblos indígenas	65
5.1. Ubicación del estudio	65
5.2. Los pueblos indígenas de la zona de Camisea	66
5.3. Antecedentes del conflicto	69
5.4. La privatización de Camisea (1999)	73
5.5. El proyecto Camisea: concepciones e intereses (2001-2006)	75
5.6. Los conflictos sociales y el protagonismo indígena en la Amazonía (2006-2008)	89
CONCLUSIONES	95
RECOMENDACIONES	100
BIBLIOGRAFÍA	103
RECURSOS VIRTUALES	113
ANEXOS	115

CUADROS

- Cuadro 1** Población del Bajo Urubamba
- Cuadro 2** Glosario de conceptos
- Cuadro 3** Compañías de petróleo y gas que operan en el Perú
-
- Cuadro 4** Poblaciones indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en la zona del proyecto Camisea.
- Cuadro 5** Informe Caffrey. Resultados deseados para prevenir y Mitigar los negativos impactos sociales y ambientales del proyecto Camisea
- Cuadro 6** Historia de los derrames del ducto de Transportadora de Gas Perú - TGP (2004 - 2007)

MAPAS

- Mapa 1** Familia lingüística en la Amazonía del Perú
- Mapa 2** Concesión de lotes petroleros en la Amazonía peruana.
- Mapa 3** Mapas comparativos de aumento de lotes de hidrocarburos en la Amazonía peruana 2004 – 2009.
- Mapa 4** Reserva del Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori, Nahua, Nanti y otros .
- Mapa 5** Proyecto Camisea y superposición de lotes de hidrocarburos en reservas territoriales para pueblos en aislamiento voluntario, comunidades nativas y áreas naturales protegidas

ACRÓNIMOS Y SIGLAS

AIDSESP	Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
ANP	Áreas Naturales Protegidas
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CECONAMA	Centro de Comunidades Nativas Machiguengas Juan Santos Atahualpa
CEDIA	Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico
CAAAP	Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
COICA	Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
CONAPA	Comisión Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
COMARU	Consejo Machiguenga del Río Urubamba.
CONAM	Consejo Nacional del Ambiente
CONAP	Consejo de Organizaciones Nativas Amazónicas del Perú
DGE	Dirección General de Epidemiología, MINSA
D.S.	Decreto Supremo
DP	Defensoría del Pueblo
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
FECONAYY	Federación de Comunidades Nativas Yine Yami
FMI	Fondo Monetario Internacional
GTCI	Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional
ILV	Instituto Lingüístico de Verano
INDEPA	Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuano
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
MAP	Ministerio del Ambiente del Perú
MINCU	Ministerio de Cultura
MINEM	Ministerio de Energía y Minas
MINSA	Ministerio de Salud
MINAG	Ministerio de Agricultura

ONG	Organización no gubernamental
OSINERGMIN	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OSINERGMIN	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas
PIACI	Pueblos en aislamiento y contacto inicial
PROMUDEH	Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, actualmente Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
PLUSPETROL	Pluspetrol Perú Corporation S.A.
PMA	Plan de Manejo Ambiental
PMAC	Plan de Monitoreo Ambiental-Social Comunitario
RTKNN	Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros
SERVINDI	Servicios en Comunicación Intercultural (Perú)
SNA	Sociedad Nacional Ambiental.
SPDA	Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
TLC	Tratado de Libre Comercio
TGP	Transportadora de Gas del Perú

RESUMEN

La presente tesis ha tenido por objetivo investigar la actuación del Estado peruano, en el periodo 2001-2008, en el proceso de concesión del lote 88 para la explotación de hidrocarburos conocido como proyecto Camisea. La explotación se ha venido haciendo sobre los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros. Esto ha traído consigo un grave conflicto social que pone en evidencia las distintas perspectivas e intereses que se tienen sobre la Amazonía peruana. Sin embargo, los pueblos indígenas se encuentran amparados por un marco jurídico, tanto nacional como internacional, que el Estado paradójicamente ha suscrito pero transgrede.

Esta investigación presenta un recorrido sobre la situación social, política y jurídica de los pueblos amazónicos, así como da cuenta de cómo se producen los conflictos sociales y quiénes son los actores relevantes allí presentes. Describe particularmente el caso del proyecto Camisea, donde el Estado peruano ha avalado, desde sus políticas públicas, la depredación del territorio amazónico violando los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, también se describe el proceso de organización política por parte de los grupos étnicos de la Amazonía para hacer respetar sus derechos y poner en agenda una nueva forma de entender la ciudadanía.

Las reflexiones, tanto académicas como políticas, que nos deja este caso nos permiten pensar en una nueva concepción sobre el Estado-nación que rompe con los viejos esquemas homogeneizantes para construir el reconocimiento de la diversidad cultural y las bases de un Estado plurinacional. El movimiento indígena junto con la sociedad civil tienen la palabra.

ABSTRACT

This thesis aimed to research the performance of the Peruvian Government (period 2001-2008), during the licensing process of plot 88 from the Camisea Project for hydrocarbon exploitation. The exploitation has been taking place on the territories of indigenous people in voluntary isolation from the Reservation of Kugapakoru, Nahua, Nanti, and others. This event has brought along a serious social conflict that puts in evidence the different perspectives and interests over the Peruvian Amazon. However, indigenous people are protected by an international and national legal frame, which the Government has signed and adhere to but paradoxically continues to transgress it.

This research shows the social, political and legal situation of the Amazonian people, as well as the way in which social conflicts start and who are the relevant actors in them. It particularly describes the Camisea Project case, where the Government public policies have endorsed the predation of the territory violating native people rights. However, this research also describes the political organization process of ethnic groups from the Amazon in order to make their rights respected and to put in the agenda a new way to understand citizenship

The academic and political reflections that this case shows lead us to think in a new State-Nation concept; that ends with old homogeneous schemes in order to build the recognition of cultural diversity and the foundations of a plurinational State. The indigenous movement along with civil society have the word now.

INTRODUCCIÓN

En el Perú, una de las expresiones más representativas del fenómeno de la concentración de la tierra es la ocupación por las empresas extractivas de los recursos en la Amazonía que no solo son adversas al medio ambiente, sino que afecta a los pueblos nativos poseedores del territorio desde épocas inmemoriales, los que de acuerdo al actual régimen jurídico nacional son denominados “comunidades nativas” y “pueblos indígenas en aislamiento voluntario y/o contacto inicial”.

La presente tesis busca estudiar un caso ilustrativo de esa modalidad de implantación de las actividades extractivas referida al ámbito del Bajo Urubamba, en la región Cusco, donde se ejecuta el proyecto Camisea, el que suscita un conflicto con las comunidades nativas y los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de la selva sureste del Perú. El estudio intenta dar cuenta de un curso que se ha vuelto habitual en la Amazonía para la extracción de los recursos energéticos: la actuación y permisividad del Estado frente a la depredación del territorio ancestral por parte del sector privado, lo que genera un conflicto social que atenta e impide el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú.

Desde esa perspectiva, en el capítulo I se establece el planteamiento formal de investigación. Se describe como en las últimas décadas se ha ejecutado una política de concesión de los territorios amazónicos que atenta contra la soberanía de los grupos étnicos. De hecho, los derechos sobre el territorio y los derechos que tienen como pueblos indígenas son reconocidos por una normativa jurídica internacional que el Perú ha adoptado y que le otorgan potestad de incidir sobre lo que va a ocurrir en sus territorios. Sin embargo, en la práctica, el Estado transgrede estos derechos, lo que crea un problema de intereses porque las políticas públicas se orientan a alentar la explotación de recursos, por parte del sector privado, que atentan el bienestar de los pueblos amazónicos. Justamente ese es el objetivo de la tesis: investigar la actuación del Estado, particularmente frente al caso del proyecto Camisea.

En el capítulo II se amplía la reflexión, desde el balance académico. En primer lugar, haciendo un recuento de cómo se ha intentado comprender desde las ciencias sociales los conflictos ocurridos en la Amazonía. Se deja anotada la escasa literatura que existe sobre el problema de Camisea, siendo un caso representativo y un antecedente directo de la organización política de los pueblos indígenas que alcanzó su cenit con el levantamiento de Bagua. En segundo lugar, la reflexión teórica nos lleva a pensar en la relación que existe sobre los derechos de los pueblos indígenas (sobre sus territorios y los derechos que tienen particularmente por ser indígenas) con la construcción del Estado-nación. Este paradigma occidental modernizante y homogeneizador entra en crisis frente a una realidad que exige asumir una apertura hacia la diversidad y un reconocimiento hacia las raíces socioculturales que serán germen de un Estado plurinacional que respete el derecho de los pueblos indígenas.

En el capítulo III se traza la metodología que se ha utilizado en esta tesis. La investigación es básica, de carácter explicativo, y tiene como objeto de estudios particularmente los pueblos en aislamiento voluntario de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros y las comunidades matsiguengas, quienes se encuentran afectados por el proyecto Camisea. La recopilación de datos se ha hecho mediante el análisis documentario, pero también en base a entrevistas y a la experiencia que ha tenido la autora de esta tesis, en su contacto con las organizaciones indígenas que se han visto envueltas en el conflicto social.

El capítulo IV describe de manera pormenorizada la situación de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana. Así, se hace un análisis sobre el contexto socioespacial donde viven. Se explica por qué el territorio es algo más que un mero espacio físico y de provecho para los recursos (como sí resulta en la perspectiva del Estado y el sector privado), sino más bien un espacio de convivencia, memoria y relación simbólica. Por otro lado, se detalla cómo se ha ido formando la condición jurídica de los pueblos indígenas, tanto a nivel nacional como internacional. Se presenta el debate político e intelectual que se ha dado en torno a la Amazonía. Y, por último, cuáles son los actores sociales relevantes cuyas perspectivas e intereses sobre el territorio son diferentes, lo que produce inevitablemente los conflictos sociales.

Por último, en el capítulo V se describen los resultados de la investigación referida al proyecto Camisea. Se relata cómo se produce el encuentro entre las empresas corporativas, que el Estado avala, y los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial que soportan una fuerte presión de las empresas petroleras, las que violan los derechos individuales y colectivos reconocidos en el Convenio 169 OIT. De este modo, se suscitan problemas sociales y ambientales al no respetarse los límites de la reserva del Estado a favor de las poblaciones indígenas (la reserva territorial donde se ha trazado el lote 88 debería ser intangible). Esta situación revela falta de voluntad política del Estado en reconocer los derechos indígenas y la necesidad de indagar una reforma dirigida a la construcción de un Estado plural que permita que se reconozcan los derechos indígenas colectivos. Todo ello en busca de demostrar que en la actualidad los conceptos de Estado tradicional y los derechos fundamentales de estos pueblos necesitan ser reinterpretados a fin de brindar soluciones a nuevos requerimientos que demanda la sociedad peruana.

Las lecciones que ha dejado el levantamiento indígena, evidentes desde el llamado “Baguazo” en el 2009, nos permiten avizorar un punto de quiebre en la percepción de la sociedad civil sobre el problema de los pueblos indígenas. Pero también hacen visibles la reorganización de un movimiento social, consciente plenamente de sus derechos y de su capacidad de movilización e incidencia política. Esto nos hace pensar que, en un futuro no muy lejano, se pueden ir poco a poco abriendo espacios para el reconocimiento de los pueblos indígenas –y todos aquellos grupos sociales no reconocidos por el Estado– como plenos poseedores de derechos y participantes de una ciudadanía que reclama, con justicia, la apertura del Estado hacia la diversidad.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Problema y preguntas de investigación

Durante la década de 1990, el contexto político y económico estuvo marcado por la apertura del libre mercado con la promulgación de leyes favorables a la inversión privada, sobre todo en la industria extractiva (petróleo, gas y minerales), favorecidas por el Estado. Bajo tales medidas, se comenzó a intensificar la ocupación de la Amazonía por grandes empresas extranjeras. Mientras esto ocurría en el Perú, en otros escenarios los derechos de los pueblos indígenas eran discutidos en el derecho internacional que llevó a consensos importantes respecto a la autodeterminación, soberanía y derechos sobre el territorio (Orellana, 2009, p. 11).

Con el fin de normar el ejercicio de estos derechos, en 1993 el Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT, mediante resolución legislativa 26253. Pasados los 14 años, en septiembre del 2007, el Perú suscribió la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU donde, entre otros puntos, se reafirma que:

...el territorio indígenas no es solamente un derecho de propiedad, sino que está ligado a la existencia misma del grupo indígena como sujeto colectivo.

Tanto el Convenio 169 como la Declaración otorgan a los pueblos indígenas formularon un estándar de protección mayor, considerando la conexión única y particular que mantienen los indígenas con sus tierras y recursos. Tal estándar conllevó a limitaciones sustanciales o condicionantes muy claras sobre el ejercicio de los poderes del Estado en cuanto a la utilización productiva de los territorios indígenas (Racimos de Ungurahui, 2008, p.13).

Las propuestas y decisiones del Estado peruano sobre el aprovechamiento de recursos del territorio amazónico no guardan relación con las leyes nacionales e internacionales, dándose infracciones a los derechos fundamentales de los

pueblos indígenas establecidos en dichas normas, dado que el Estado está obligado a cumplir todo tratado internacional, sin excusa por su legislación interna. El texto del Convenio 169 de la OIT representa una explícita aceptación de “reconocimiento a los pueblos interesados al derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” (art. Nº 14).

En base al contexto trazado, la pregunta que nos planteamos es la siguiente: ¿En que medida la implementación de políticas que el Estado autoriza en las actividades energéticas del proyecto Camisea afecta los procesos de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y comunidades nativas, toda vez que un 74% del lote 88 se superpone a la Reserva Territorial de los pueblos en aislamiento voluntario, Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, y más del 80% del lote 56 está superpuesto a siete comunidades nativas lo que origina un grave conflicto social que pone en evidencia distintas perspectivas e intereses que se tienen sobre la Amazonía peruana?.

En esta dirección, los problemas específicos se detallan con las siguientes preguntas: ¿Cuál es el ordenamiento jurídico nacional e internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros y siete comunidades nativas matsiguengas afectadas por las actividades extractivas de petróleo que se realizan en el Bajo y Alto Urubamba que generan un riesgo de vida a éstos pueblos? ¿Cómo es que el Estado peruano a través decretos supremos suscribe contratos desventajosos y lesivos para pueblos nativos y el medio ambiente, como es el proyecto Camisea con empresas trasnacionales quienes obtienen grandes ganancias contando con bajos estándares socioambientales, actuando con un comportamiento de saqueo más que empresarial, sin haber consultado con las poblaciones y comunidades y no haber realizado estudios de impacto ambiental independientes a fin de evitar impactos ambientales y sociales? ¿Cómo reaccionan los pueblos y comunidades indígenas, calificados por el Estado nación como primitivos y poco desarrollados, al ver que sus territorios ancestrales que son la base de identidad, conocimientos y saberes ancestrales son impactados por el proyecto Camisea,

sin que el Estado lleve a efecto el derecho a la consulta previa con participación de los pueblos originarios que cobra relevación en el marco de la expansión de la actividad extractiva establecidas en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, que el mismo Estado ha suscrito y que paradójicamente ha silenciado sistemáticamente?

1.2. Justificación

Un caso representativo de los conflictos entre las empresas extractivas y los pueblos amazónicos por la propiedad y el uso del territorio fue lo ocurrido en el Bajo Urubamba, distrito de Echarate, región Cusco. En esta zona se concedió 202 mil hectáreas a los consorcios Pluspetrol y Transportadora de Gas del Perú, TGP, para la explotación, transporte y comercialización del gas de Camisea. Sin embargo, un 74% del lote 88 se superpone a la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, y más del 80% del lote 56 está superpuesto a siete comunidades nativas (Shivankoreni, Segakiato, Camisea, Kiriguetti, Nueva Vida, Nuevo Mundo y Puerto Guayana), así como también un establecimiento rural (el asentamiento de Colonos Shintorini), quienes han sido afectadas por los procesos de ampliación del lote 88, el que vulnera los tratados internacionales y los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y las comunidades nativas.

El proyecto Camisea y las actividades de explotación en el lote 88 empujan consecuencias adversas a los pueblos en aislamiento voluntario que viven en la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nantis y otros, cuyos territorios fueron protegidos por el Estado a través del Decreto Supremo N° 028-2003-AG. Contrariamente a lo establecido, es el propio Estado quien entrega a los consorcios extranjeros el subsuelo constituyendo una arbitrariedad al orden jurídico nacional e internacional. Además, lo concesionan no estando al tanto de quiénes la integran, cuántos son, dónde están. Sucede lo mismo con las comunidades nativas del Bajo Urubamba, debido a la inseguridad de la tenencia de su territorio comunal y ancestral, a pesar de haber sido reconocidas como comunidades nativas mediante entregas de título que solo cubren los suelos

superficiales; en cambio, el subsuelo, bosques, agua y aire son considerados constitucionalmente como bienes nacionales, disponibles para ser concesionados a terceros.

El avance del proyecto Camisea y la infracción de sus derechos llevan a la insurgencia de los pueblos indígenas que deciden protestar y levantarse en el 2005, luego en el 2008, hasta que en junio del 2009 resuelven ocupar las instalaciones del proyecto a fin de exigir al Estado su intervención y que regule las actividades contaminantes en una zona que había sido considerada por instituciones como la Smithsonian Institution (2001) como “una de las pocas áreas vírgenes e intactas del planeta al no registrar en ella actividad humana y contar con un complemento completo de biodiversidad”. En el momento de entregar las concesiones, los estudios advertían que esos bosques de transición se encontraban entre los biológicamente más diversos en el mundo, afectados en la actualidad por la búsqueda insaciable de gas y petróleo.

El presente estudio cree necesario dar a conocer esta realidad que viven los pueblos en aislamiento que habitan la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, así como las comunidades nativas matsiguengas con la finalidad de entender y evitar situaciones como las ocurridas en Bagua.

Por su parte, la relevancia académica del tema de estudio radica en destacar y comprender el derecho que tiene todo pueblo indígena para determinar el límite de su territorio. El territorio es un componente indisoluble para la autonomía e identidad indígena, ya que presenta la matriz simbólica cultural del mundo indígena, lo cual entra en conflicto con la concepción de territorio expresada en la Constitución peruana de 1993. La exigencia del derecho al territorio indígena abre paso a un campo potencial de conflicto social, al que entran en juego elementos limitantes como son la concepción monocultural, base de la noción de Estado-nación predominante que excluye la diversidad étnica y los derechos indígenas.

Los pueblos buscan la manera de expresar su desacuerdo, utilizando el derecho a la autodeterminación como principio democrático al que tienen derecho, el cual implica que:

...toda comunidad formada por personas humanas y libres, posee en sí, en virtud de su naturaleza, el poder gobernarse a sí misma, sin ingerencias exteriores de ninguna clase, para obtener los fines que le son específicos. Tal comunidad humana por consiguiente determina libremente cómo va a gobernarse en el futuro de acuerdo a sus tradiciones y los deseos expresados por su población y, al obrar así, y en la medida en que obre así, ejercerá el derecho a la autodeterminación (De Obleta, 1993, p. 31).

1.3. Hipótesis

a. Hipótesis general

A mayores políticas del Estado peruano orientadas a la extracción de recursos energéticos por corporaciones extranjeras como el proyecto Camisea son menores las políticas públicas para el efectivo ejercicio de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros y las comunidades nativas matsiguengas del Alto y Bajo Urubamba.

b. Hipótesis específicas

- En la medida en que el Estado intensifica el esquema primario exportador, los pueblos y comunidades indígenas ponen en riesgo su vida, integridad, cultura y medio ambiente al implantarse, sin consulta previa, proyectos energéticos como el de Camisea.
- En vista de que el Estado prosiga implantando actividades extractivas referida al ámbito del Bajo Urubamba, en la región Cusco, donde se ejecuta el proyecto Camisea, sin consentimiento previo, han aumentado los conflictos con las comunidades nativas

y pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la selva sureste del Perú poniendo en evidencia distintas perspectivas e intereses existentes sobre la Amazonía.

- Como quiera que el Estado mantenga una actitud permisiva a la depredación del territorio ancestral de la Amazonía por parte del sector privado se ha de generar conflictos e impide el reconocimiento de los derechos indígenas haciéndose visible que el paradigma occidental entra en crisis frente a una realidad que exige asumir una apertura hacia la diversidad y un reconocimiento hacia las raíces socioculturales que son el germen de un Estado plurinacional que respete el derecho de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, así como las comunidades nativas matsiguengas.

1.4. Objetivos

a. Objetivo general

Analizar la actuación del Estado en el proceso de concesión de las actividades de hidrocarburos en el lote 88 del proyecto Camisea que se superpone en los territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros y el lote 56 en siete comunidades matsiguengas.

b. Objetivos específicos

- Determinar si el proyecto Camisea ha dado cumplimiento a la normatividad indígena consagrada en las normas jurídicas internacionales y en la propia legislación nacional respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en

aislamiento voluntario Kugapakori, Nahua, Nanti y otros y comunidades matsiguengas.

- Explicar el comportamiento del Estado y su relación con los consorcios extranjeros del proyecto Camisea ha impedido imponer buenas prácticas ambientales y el uso de tecnologías avanzadas exigidas por las organizaciones indígenas y entidades ambientalistas nacionales e internacionales a fin de evitar impactos ambientales y sociales.
- Relatar la respuesta indígena con sus propias estructuras institucionales y alianzas con entidades ambientalistas frente a los impactos sociales y ambientales del proyecto Camisea que permita el reconocimiento de los derechos indígenas, en particular el derecho al territorio y representar las raíces socioculturales siendo el germen de un Estado plurinacional que respete los derechos colectivos de los nativos.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

La lucha indígena por el reconocimiento de sus derechos, en este nuevo milenio, tuvo en los sucesos de Bagua su máxima expresión. Esto permitió en la ciudadanía construir una nueva lectura sobre el Perú, la que no solo ha producido un avance en el debate político, sino que ha suscitado interés en el ámbito académico sobre la actuación colectiva de los pueblos indígenas y su relación complicada con el Estado peruano a fin de exigirle un efectivo rol regulador y garantizar la supervivencia de los pueblos ancestrales.

El estudio que se presenta registra un conflicto poco investigado en el ámbito académico, a pesar de haber tenido una profunda envergadura política. Es el proyecto Camisea, impulsado por el Estado peruano y concesionado a corporaciones empresariales que han impactado en el territorio amazónico, base de la identidad, conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas.

A fin de analizar este conflicto a la luz de la academia, se ha recurrido a la lectura de diversos autores quienes con sus escritos han intentado hacer una aproximación y aportes al entendimiento de los conflictos en la Amazonía. Algunos de ellos, tangencialmente, al caso del proyecto Camisea, tema de nuestro interés.

Así, tenemos el caso del sociólogo Aníbal Quijano (2005), quien propone que un patrón de poder habita en América Latina desde la Colonia y que encuentra su origen con la noción de raza. Ese patrón no ha dejado de reproducirse y desarrollarse manteniendo sus mismos fundamentos de origen y de carácter colonial. Por esta razón, las cuestiones referidas al debate de lo “indígena” no pueden ser indagadas, ni debatidas, ya que la sociedad peruana ha continuado organizada según ese mismo patrón. Lo paradójico ha sido que mientras el

movimiento histórico emancipador se independizaba, la sociedad continuaba siendo colonial mientras formaba un nuevo Estado. Aquí no emerge un nuevo estado al no representar las identidades de la mayoritaria población indígena. Por tanto, el Estado-nación, no era realmente nacional respecto de las inmensas mayorías y no era democrático, ni representaba ninguna ciudadanía mayoritaria.

Tenemos por otro lado, a Rodrigo Montoya (2008), quien reflexiona sobre los movimientos políticos sucedidos en Ecuador, Bolivia y Perú, en donde articula el tema indígena y el poder. Refiere que los movimientos políticos indígenas se han convertido en un nuevo sujeto dentro del escenario político de Latinoamérica. Casos emblemáticos como el ecuatoriano (1990), boliviano (1990) y el mexicano, en Chiapas (1994), reivindican en forma resumida: territorio, identidad, ciudadanía étnica, libre determinación, autogobierno, derechos colectivos de los pueblos, defensa de los saberes, espiritualidad propia, etc. Asegura que los Estados-nación han fracasado por servir y beneficiar al poder colonial de una clase y que por ello se hace indispensable forjar Estados plurinacionales que respondan al conjunto de todos los pueblos de cada uno de nuestros países. Al centrarse en el Perú, afirma que los movimientos indígenas peruanos no tienen las mismas características con los que cuenta Bolivia y Ecuador, pero están en esa dirección, y por primera vez en la historia se organiza un movimiento de modo autónomo, con un argumento sencillo: existe un nuevo discurso político.

Por su parte, Alberto Chirif (2011) analiza en forma detallada diversas experiencias de afectación a los indígenas como consecuencia del desarrollo del modelo extractivo en distintos ámbitos. Contrasta la existencia de pueblos indígenas amazónicos, calificados como primitivos y poco desarrollados, con el fin de explotar recursos forestales, fluviales, mineros e hidrocarburos en territorios donde habitan las poblaciones nativas. En base a dichas proposiciones y falsos conceptos, la ocupación del territorio amazónico se ha llevado a efecto. Sin embargo –señala–, es en los últimos años que el debate sobre la Amazonía y sus recursos, la existencia de los pueblos indígenas y la proliferación de actividades extractivas se ha colocado en el primer plano en la escena nacional en concordancia con la escasez de recursos minerales, hidrocarburos e

hidráulicos en el mundo, por lo que se ha buscado formalizar la actividad extractiva y entregar grandes lotes a las empresas extractivas, llegando a suscribir contratos desventajosos en provecho de empresas que actúan con un comportamiento de saqueo más que empresarial. Afirma que entre el 70% y 80% de la Amazonía peruana está lotizada para fines de exploración y/o explotación petrolera que ocasiona perjuicios a las poblaciones indígenas por el insuficiente reconocimiento de responsabilidad por parte de las empresas y del Estado, lo que trae consigo una fuente de conflicto permanente.

También tenemos las reflexiones de Anthony Bebbington, Martin Scurrah y Anahí Chaparro (2013), quienes establecen que la relación entre el Estado y los pueblos indígenas ha estado marcada por el acaparamiento de sus territorios, práctica fortalecida a partir del desconocimiento de sus derechos. Sostienen que el territorio y la tierra han sido el eje central de las luchas indígenas y que estos hechos ocurren ante la expansión de las industrias extractivas que han crecido durante los últimos años. Además, mencionan que este proceso está acompañado por el aumento en la conflictividad social que ha paralizado proyectos como Tía María, Minas Conga, Río Blanco. En este sentido, señalan que la conflictividad socioambiental se ha instalado como parte de la escena política y la vida cotidiana del país.

Por su parte, Taípe Sánchez (2005) asegura que el Estado peruano ha intentado homogenizar bajo una sola cultura, idioma y ordenamiento jurídico, único y obligatorio, a los pueblos y comunidades indígenas, sin considerar que las sociedades existentes en el Perú son diversas, heterogéneas en culturas, costumbres y visiones. Señala que es indispensable que la ciencia jurídica permita que el Estado reconozca y respete la diversidad de las setenta y dos nacionalidades/pueblos existentes en los Andes y la Amazonía con su propia cultural, modo de vida, valores, lengua y pluralidad jurídica distinta al “oficial”. Da a conocer los derechos de los pueblos indígenas e incide en sus capacidades basadas en las costumbres y la resolución de conflictos; además, considera relevante la lucha por el territorio/tierra, el que no solo es concebido como un recurso productivo o como un mero bien de mercado. El estudio incide en que los territorios indígenas están vinculados a la propia existencia de cada pueblo

formando una unidad inseparable, reforzada por lazos culturales y espirituales que históricamente les corresponde con su propia cosmovisión, principios, recursos, conocimientos colectivos y respeto de derechos humanos.

También tenemos a Pedro Tipula (2013), quien señala que en los conflictos presentes en la escena nacional existen dos percepciones distintas: la del Estado que defiende las inversiones y la de los pueblos indígenas que necesitan tener un ambiente saludable. Afirma que el conflicto continuará si es que desde el Estado no se implementan políticas públicas en favor del cuidado de los recursos de la Amazonía y se otorgan garantías a los indígenas sobre los territorios.

En el caso de Henry Carhuatoc (2013), precisa la existencia de una cantidad indeterminada de pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario, que es la condición de aquellos grupos que no ha desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, han optado por discontinuarlas. Afirma que el aumento de los conflictos socioambientales tiene como causa fundamental la superposición de lotes de hidrocarburos en tierras tituladas, áreas naturales protegidas y reservas para indígenas en aislamiento y contacto inicial, lo que origina intereses divergentes entre los pueblos indígenas amazónicos, el Estado y las empresas petroleras. Advierte, que el proyecto Camisea vulnera la normatividad de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, refiere que la reserva territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, siendo intangible, viene siendo amenazada por actos administrativos derivados de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en San Martín del Este, en el lote 88, donde se realizan actividades de exploración de hidrocarburos que afectan la intangibilidad de la reserva y ponen en riesgo la vida, salud, integridad física, cultural y ambiental de las poblaciones aisladas.

Y, finalmente, en el estudio de Federica Barclay y Pedro García Hierro (2014), refieren que el pueblo en aislamiento voluntario Nanti obtuvieron notoriedad en

el año 2002 por el impacto de sucesivas epidemias en el Bajo Urubamba con el inicio del proyecto Camisea. A raíz de ello, en el 2003 se llevaron a cabo un análisis de salud en asentamientos la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros que demostraron la alta vulnerabilidad de población en aislamiento voluntario.¹ Se afirma que la reserva creada para atender la vulnerabilidad de los pueblos aislados que habitan allí, se encuentra expuesta a su disolución en virtud de intereses subalternos con participación del Estado que, a través de estrategias planificadas, apoyada en un discurso de desarrollo, fuerzan una situación irreversible que termine por eliminar la intangibilidad de la reserva y legalizar su extinción. En resumida cuenta, vislumbran un espeluznante final a través de una maniobra conducente al genocidio. Presumen este desenlace, dado que el Estado es parte activa y rehén de las circunstancias creadas, por lo que no termina cumpliendo su obligación de garantizar la protección de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial.

2.2. Bases teóricas²

La temática de los derechos de los pueblos nativos, así como también los derechos humanos de los pueblos indígenas en cuanto tal, representan una preocupación relativamente reciente. En esta sección indagaremos cómo se han ido concibiendo este tema desde el ámbito político y jurídico, particularmente desde el derecho internacional y el debate sobre la constitución del Estado-nación.

Respecto al ámbito jurídico internacional, el antropólogo Stavenhagen (2007, p. 10) refiere, que:

...en la década de los cincuenta del siglo pasado la Organización Internacional del Trabajo publicó un amplio estudio sobre la situación de los pueblos indígenas, y en 1957, su Conferencia General adoptó el Convenio 107 sobre pueblos

¹ Para dar mayores detalles de la población censada en ese año (2003), en el Bajo Urubamba, ver anexo A, cuadro 1.

² Para una mayor precisión y orientación teórica, se ha elaborado un glosario de conceptos que permitan clarificar esta sección y, en general, toda la investigación aquí presente. Ver anexo A, cuadro 2.

indígenas y tribales en países independientes. Treinta años después la OIT procedió a una revisión de este convenio y adoptó en 1989 el Convenio 169 con el mismo título, norma que constituye el único instrumento jurídico internacional vinculante sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Es importante anotar que, en aquellos años, los pueblos indígenas eranpreciados como sociedades retrasadas y transitorias, y para que pudieran subsistir, los Estados sustentaban que era indispensable su integración y asimilación.³ Extrañamente, al constituirse el Estado-nación la identidad mestiza se conforma en razón de la expropiación de la cultura indígena. Al mismo tiempo, se niega la preexistencia de la población indígena y su pertenencia a la nueva nación; de modo tal que este es el resultado de una abstracción, una construcción social que pretende eliminar la multiculturalidad étnica del país.

En nuestra opinión, en el Perú actual, los pueblos indígenas de la Amazonía tienen absoluta conciencia de su territorio, identidad, ciudadanía étnica, derechos colectivos de pueblos, defensa de los saberes, espiritualidad propia, aunque se trate de grupos reducidos y dispersos geográficamente, lo que no dificulta que puedan articularse políticamente como lo han demostrado en los últimos años. Es por ello que, aunque distintos gobiernos promuevan en forma política el reconocimiento de sus derechos, en forma encubierta intentan asimilarlos a una cultura única y homogénea, siendo por ello que los derechos indígenas tengan una débil protección.

En nuestra consideración, las insurrecciones indígenas producidas en México, Ecuador y Bolivia fueron las que forjaron un cambio, pues, en adelante las demandas frustran la asimilación, y de allí hasta hoy, serán por el derecho de ser indígenas y a decidir las políticas beneficiosas para el desarrollo de sus pueblos. Es por ello que, desde fines de la década de los ochenta hasta la actualidad, los líderes indígenas han podido participar, al menos, de la

³ Esta situación recuerda los discursos de la época colonial, donde se sostenía que la adopción de la religión católica permitiría incorporar los indígenas a la civilización, con lo cual dejarían de ser "indios".

comunidad política, aunque en el caso peruano con restricciones. Esto mismo nos dice Jürgen Habermas (2000, p. 241) cuando sostiene que,

...la participación política y la comunicación (...) no garantizan el librarse de apremios externos, pero sí la posibilidad de participar en una práctica común, por medio de la cual los ciudadanos puedan llegar a ser lo que desean: miembros políticamente responsables de una comunidad libre e igualitaria.

A pesar de que han pasado más de 25 años, aún los pueblos nativos siguen sufriendo la falta de respeto y violaciones a sus derechos, además de marginación; sin embargo, las respuestas han cambiado a través del tiempo. James Anaya (1996, p. 69) señala:

...que en este nuevo contexto, estos pueblos y sus organizaciones exigen tener poder y voz para que sus representantes defiendan sus derechos imprescriptibles. Al mismo tiempo, los nuevos tratados internacionales y comisiones formales apoyan y destacan las obligaciones del Estado en relación con el goce de los derechos participativos.

En nuestra opinión considero que los derechos indígenas constituyen un reto para los políticos y académicos que, en su mayoría, han propuesto que en lugar de procurar derechos indígenas colectivos exclusivos y únicos, los grupos humanos alcanzan sus objetivos a través de un enfoque liberal de los derechos humanos. Kymlicka (2001) ha reconsiderado el debate colectivista/liberal y defiende los “derechos diferenciados” a favor de grupos como los pueblos indígenas que, no por elección sino por geografía histórica, se han visto reducidos a ser minorías demográficas o políticas dentro de los Estados.

Los tratados internacionales, particularmente el Convenio 169 de OIT, apoyan explicaciones legales y filosóficas, valiéndose de las normas internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. Como enseña el Convenio 169, la forma más fácil de definir a la población indígena desde el punto de vista étnico es señalar como indígenas a quienes descienden de los primeros pobladores del Perú o también los descendientes de quienes se encontraban en el territorio peruano cuando se produjo la conquista o colonización. En ese sentido, se

consideran indígenas aquellos peruanos que no son mestizos, es decir no tienen antepasados europeos, africanos o asiáticos, sino descienden de los primeros habitantes.

El convenio define a los “pueblos indígenas” o “pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial” y les asigna derechos y brinda una descripción operativa en las expresiones siguientes:

(...) los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (...). La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

En este sentido, el reconocimiento como “pueblos” es fundamental, pues constituye el punto de partida para que se admitan sus derechos colectivos. Es importante entender que este reconocimiento significa la legitimación de los derechos especiales en cuanto al acceso y protección de las tierras, territorios y recursos naturales, los que no pueden ser sometidos al régimen de propiedad privada individual. Igualmente, el reconocimiento jurídico significa que deben tener derecho a participar directamente en la vida política

Para la OIT se identifica como *pueblo indígena* a una población de acuerdo al criterio objetivo y al subjetivo. El criterio objetivo responde a determinadas características propias de los pueblos indígenas, como descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica desde la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. En cambio, el criterio subjetivo alude a la identificación del pueblo referido como

parte de un pueblo indígena y que el individuo de dicha población se sienta parte de ese pueblo (OIT, 2003, p. 3).

De tal forma el derecho humano a la libre determinación es el tema fundamental de la discusión indígena que establece la situación de los pueblos como sujetos de derecho. Al respecto, Gaete Uribe (2012, pp. 78-79) refiere:

Por ello, en la redacción del Convenio 169, resultó controvertido el debate por el uso del término “pueblos” en lugar de “poblaciones”, ya que el primero involucra un mayor reconocimiento de la identidad colectiva, y por otro lado, los gobiernos se resistieron a la utilización del término por su asociación con el concepto autodeterminación o libre determinación, principio asociado con el derecho a formar un estado independiente

Existe una discusión sobre la libre determinación para los pueblos indígenas que resulta infundada dado que este derecho no tiene nada que ver con la intención de conformar un Estado dentro de otro. Hace pocos días, el jefe wampis, Wrais Perez, señaló

El ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación no fomenta acción alguna contra de la soberanía del Estado peruano. Por el contrario, como figura en nuestro estatuto constitutivo, ratificamos solemnemente nuestra nacionalidad peruana, el respeto a los símbolos patrios y el carácter territorial unitario del Perú". (La Mula, 6 julio, 2017).

Se entiende por tanto, que la autodeterminación es la posibilidad de decidir con autonomía aspectos de sus vidas, dentro de los cuales, por cierto, se encuentra el tipo de desarrollo al que aspiran, la disposición de los recursos naturales, y la resolución de asuntos comunitarios como la administración de justicia.

Ahora, bien, creemos que es indispensable precisar y dar contenido al concepto del “derecho al territorio”, pues se considera un concepto fundamental en el presente estudio, pues, es una demanda que comprende la totalidad del hábitat de cada pueblo indígena que se ha convertido en los últimos años en un argumento central de varias organizaciones indígenas del Perú.

Desde el punto de vista de Ballón (2002, p. 113-114) refiere que el derecho indígena de territorio no está referido a la propiedad privada de una tierra determinada, sino a la tenencia de un espacio geográfico propio con jurisdicción y competencia indígena en armonía con los principios de derecho humano:

Es por ello es que, al tener un territorio indígena significa ejercer un poder ilimitado por el uso tradicional de los recursos y los medios culturales propios. (...). Si “territorio” para el Estado no es una unidad geográfica, para el pueblo la dimensión geográfica sí es parte vital para su capacidad de reproducir sus condiciones de vida. Tal “extensión” no debe concebirse como las “fronteras jurídicas” del derecho de propiedad, sino como las dimensiones socio culturales que le permite a un grupo humano su supervivencia (Ballón, 2002, p. 104).

Irigoyen (2004), desde el enfoque jurídico, conecta con las propuestas de Ballón al señalar que el derecho a las tierras y territorios indígenas en el Convenio 169 de la OIT (arts. 13-15) posibilita:

Un espacio de gestión colectiva. Se trata del lugar que ocupan o utilizan de algún modo para realizar actividades que les permitan su reproducción material y cultural. Por tanto, tener competencia sobre los hechos que ocurren dentro de dicho territorio es parte de la definición propia de los derechos territoriales. La competencia sobre el territorio, sin embargo, es un mínimo, pero no un limitante, pues el alcance de la jurisdicción indígena se puede ampliar en razón de la competencia personal y material. (...) Lo importante es que se trate del espacio sobre el cual estos pueblos y comunidades interactúan de alguna manera. (Irigoyen, 2004, p. 179).

El concepto de territorio indígena es ampliado por Irigoyen como ámbito territorial, al afirmar que el Convenio 169 de la OIT, define el territorio:

...como la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera (art. 13, 2), e incluye dentro de los derechos territoriales inclusive “las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia” (art. 14, 1). (Irigoyen, 2004, p. 181).

En función a lo expuesto, me permito señalar que, el ámbito territorial no solo equivale a las tierras de propiedad del pueblo indígena, comunidad o ronda campesina, sino al espacio territorial que utilizan de alguna manera para realizar actividades determinadas. Esto es importante anotar, pues, no todos los pueblos o comunidades tienen tierras tituladas o delimitadas sus territorios; hay comunidades nativas que carecen de algún reconocimiento jurídico de la propiedad común de la tierra, sin que por ello desaparezca la comunidad como ente colectivo sujeto de derechos.

Interpreto que han sido los pueblos indígenas, casi siempre por cuenta propia, quienes han generado un marco legal y político favorable a la salvaguardia de sus derechos y las obligaciones intrínsecas de los Estados, gracias a la tarea de organizarse que ellos mismos emprendieron. Resultado de estos hechos es el discurso indígena actual en respuesta a la diversas amenazas y actores que avanzan sobre los territorios de los pueblos y comunidades y eluden a la descomposición de la sociedad tradicional en la que diferentes grupos étnicos tienen una posición establecida y reconocida en un sistema de relaciones recíprocas y relativamente estables conformadas en sus territorios donde habitaron miles de años.

A mi juicio la ejecución de los derechos indígenas no es solo una cuestión de legislar y luego aplicar leyes, sino también de debatir y negociar su interpretación. A mi entender es el diálogo que las organizaciones indígenas utilizan para crear un espacio público para sí mismas y para encarar temas importantes de su comunidad. En ese sentido, los conflictos sociales por los recursos naturales ofrecen ejemplos claros de este doble papel del diálogo. Stavenhagen (2005) advierte que los conflictos étnicos no suelen darse en el vacío y por lo general se relacionan con las políticas que los Estados han impuesto para manejar la diversidad étnica con el paso del tiempo:

Si bien ciertas políticas están destinadas a disminuir la posibilidad de los conflictos étnicos, otras en realidad los fomentan; como se constata en los conflictos en torno a la explotación de recursos naturales –petróleo, gas,

minerales, madera y agua— se han convertido, en parte, en medios públicos para revelar las brechas existentes entre legislación y práctica, y para presionar a los gobiernos por la implementación de nuevas normas (...). La violencia a nuestro alrededor no se genera por el impulso hacia la autodeterminación, sino por su negación. Es la negación de la autodeterminación, no su búsqueda, lo que ocasiona agitaciones y conflictos. Y la negociación de la autodeterminación es incompatible con la democracia. Una sociedad democrática puede concretarse solo si se respeta el derecho de un pueblo a la autodeterminación; y solo en un verdadero ámbito democrático, en el que todos los demás derechos humanos reciban el debido reconocimiento, el derecho a la autodeterminación estará libre de los “demonios” que lo envuelven —reales o imputados— (Stavenhagen, 2005, p. 14, 25).

En relación a lo expuesto, es probable que los pueblos indígenas nunca recuperen la riqueza que perdieron, pero creemos que en adelante reclamarán tanto el derecho a su territorio y a sus recursos naturales como a participar en los debates políticos y a elegir ellos mismos sus representantes. Lo más importante es que ahora tienen una voz activa en la reconstrucción de su dignidad como individuos y como pueblo.

A continuación, se aborda el Estado-nación y Estado plural. Se establece que el Estado en América Latina fue pensado como una copia del modelo de Estado-nación occidental. La homogeneidad fue considerada requisito indispensable para consolidar la nación y lograr la construcción del Estado a fin de contribuir al desarrollo de un determinado modelo económico. En este sentido, los pueblos indígenas constituyen un estorbo, un obstáculo para la integración nacional o alcanzar el desarrollo nacional. Es por ello que existe la necesidad de romper los viejos moldes como señala Olguín Martínez (1998, p. 93):

En la llamada era de la globalización, los Estados tienden a formar comunidades regionales amplias. Sin embargo, en ese momento, irrumpen con fuerza insospechada los reclamos indígenas para que se les reconozca y respete en su identidad colectiva y derechos como pueblos, a los que —siguiendo el modelo del Estado-nación europeo— se les negó su diversidad. (...). La superación de esta forma de poder político (Estado-nación), implica la desmitificación de la idea

de nación, pues se ha constituido en un concepto cerrado que conlleva a la exclusión de los individuos. Nación no significa homogeneidad, sino la voluntad de la población de vivir juntos y a partir de los proyectos que alberguen para el futuro. En realidad, vale la pena la creación algo diferente: una nación plurinacional.

Con el modelo neoliberal florecen nuevos paradigmas. Stavenhagen reflexiona sobre esta problemática cuando nos dice que:

...la pluralidad, la diversidad, la diferencia, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y el replanteo de la relación sociedad y Estado, son problemas al viejo modelo europeo de Estado-nación etnocrático. (...). Extrañamente, ello coincide con el resurgimiento de reivindicaciones crecientes de pueblos indígenas y las minorías culturales. Spencer sostenía que la evolución de las comunidades llevaría en términos relativamente breves a la formación de una sociedad planetaria en la cual habría de reinar la uniformidad cultural y la homogeneidad étnica (1989, pp. 51, 56).

A mi juicio, los Estados pueden refundarse. Esta afirmación es válida para el Perú, cuando se observa que los pueblos indígenas, a quienes no se les considera participantes de la historia nacional, hoy en día demandan mayores espacios, en tanto, reciben opresión por parte de un Estado que reprime cualquier demanda de identidad étnica o regional que compita con el modelo homogéneo.

Por su parte, Prieto Sanchís (1996) tiene una lectura sobre lo que viene ocurriendo con la quiebra del ideal tradicional del Estado-nación, nos dice:

... el crecimiento de la idea de que no es posible conservar el modelo por el cual a cada nación le concierne una organización de Estado, y que cada Estado es representante de una única y homogénea nación. Acertadamente, Proudhon predijo que la mezcla explosiva de la fusión entre Estado y nación acentuaría las divisiones internacionales transformando las luchas entre los pueblos en “exterminio de razas”.

A mi juicio, las insurrecciones indígenas de la década de 1990 produjeron un cambio fundamental, por primera vez la problemática de los nativos es planteada como lo que realmente es: un problema que deriva de un modelo de Estado y de nación errados. Es importante por ello que se plantee la alternativa de concordar el Estado a las características nacionales y étnicas de la sociedad, dado que el Estado cada vez está más desprovisto de fundamentos ante las demandas indígenas que le echan en cara haber sido constituido de manera unilateral y, fundamentalmente, por ser uninacional.

En tal sentido, en el Perú del siglo XXI, se percibe aún a la población indígena como un impedimento para la modernización. En consecuencia, los indígenas siguen siendo el sector social más estigmatizado en sus derechos y más empobrecido. Torres Manrique (2013, p. 3) refiere: “Este pensamiento se acentúa en la clase política liberal a ultranza para quienes toda realidad social que provenga de su historia “traba” el desarrollo del libre mercado. De manera que todos los derechos de los pueblos indígenas deben ser borrados, si son una traba a la ‘inversión’”.

Un Estado pluricultural busca se acepte el derecho de los pueblos indígenas, debiendo superar la esfera política las contradicciones que existen en la vida sociocultural del país logrando su representación directa en la toma de decisiones. En consecuencia, una nueva Constitución es una tarea de prioridad a fin de que no se repitan los defectos de la tradición constitucional y que la organización del Estado peruano tenga correspondencia con los elementos étnico, culturales y de pueblos indígenas que componen la nación peruana. Esa es la tarea constitucional postergada desde el momento de la Independencia. Al respecto, Torres Manrique (2013, p. 7) refiere:

La estructura estatal actual que se compartimenta en distintos órganos para ordenar su acción de gobierno, resulta una verdadera traba cuando se trata de los asuntos indígenas. Una superposición de organismos e instancias dificulta a los indígenas llegar a resolver sus necesidades y problemas. Son frecuentes las “competencias” divididas respecto a titulación, inscripción, recursos forestales,

trámites e inscripciones, etc., de manera que se requiere de un mecanismo de centralización que cuente con participación indígena directa.

Interpreto que la pluralidad se ha convertido en el eje de los movimientos democráticos del mundo, y el Perú no es ajeno a esa transición. Quijano (2005, p. 28) refiere que las organizaciones indígenas han avanzado; plantean la necesidad de un Estado plurinacional que requiere que su estructura institucional sea modificada en sus fundamentos, de modo que pueda representar efectivamente a más de una nación. Es decir, se trata de una múltiple ciudadanía, ya que en el existente Estado-nación, los “indígenas” no tienen –no pueden tener– plena cabida. Por su parte, Montoya (2008) manifiesta que es indispensable forjar Estados plurinacionales que respondan al conjunto de todos los pueblos de cada uno de nuestros países.

A nuestro juicio es indispensable que se reoriente el proyecto de nación uninacional y se dé paso a un proyecto de nación plural y diversa, que brinde a los indígenas el acceso a la autonomía, al territorio, al respeto, al desarrollo de sus lenguas y cultura, al reconocimiento de sus formas sociales de organización y a toda su visión de la vida, en la unidad nacional. Que se les ofrezca esto no a costa de su exterminio, más bien a favor de sus vidas y del establecimiento de nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad nacional con los pueblos indígenas.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación

La presente investigación es básica, dado que los aportes que resulten del estudio incrementarán el conocimiento del tema de estudio.

3.2. Nivel de investigación

El presente estudio es de carácter explicativo, en razón que se describen las políticas de Estado y luego se explican cómo estas afectan a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía.

3.3. Diseño de la investigación

En la presente investigación se empleará el diseño no experimental, transeccional causal. El estudio es no experimental, ya que se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos; es decir, no se manipulan las variables en estudio. Y es transeccional causal, ya que busca establecer relaciones causales entre las variables en un momento determinado.

3.4. Universo y muestra

a. Universo

El universo de estudio estará constituida por los pueblos indígenas amazónicos, en particular, los pueblos en situación de aislamiento voluntario.

b. Muestra

La muestra de estudio estará constituida por los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, así como también las comunidades nativas de los matsiguengas.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

a. Técnicas

En el desarrollo de la investigación se utiliza la entrevista, el análisis documental y la observación como técnicas de recolección de datos.

b. Instrumentos

Para la ejecución de las técnicas se utiliza la guía de entrevista y la guía de análisis documental como instrumentos de recolección. Los instrumentos están compuestos por un conjunto de preguntas orientadas a recabar información relacionada a la investigación.

c. Análisis de datos

Dada la naturaleza cualitativa de la investigación, el análisis comenzará con la organización de la información que se va recogiendo a medida que se desarrolla la investigación. La tarea principal consiste en formular categorías en las cuales se clasifica la información obtenida en el desarrollo del estudio.

CAPÍTULO IV

SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA AMAZONÍA PERUANA

4.1. Contexto socioespacial: características de la Amazonía

La Amazonía peruana cubre alrededor del 60,9% del territorio nacional, la cual representa el 15% de la inmensa cuenca amazónica, cuya extensión llega a los cinco millones de kilómetros que comparten Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuelay las Guyanas. Este territorio alberga tupidos bosques, climas, ecosistemas, flora y fauna heterogénea, variedad de minerales y extensos ríos navegables, entre otros.⁴

El río Amazonas, que ha dado su nombre a la región, es el más caudaloso del mundo. El lugar exacto de su nacimiento, parece ser que inicia su recorrido desde el nevado de Mismi, situado en la cordillera de los Andes del Perú. El hallazgo se debió a una expedición patrocinada por National Geographic que contó con integrantes de varias nacionalidades (Abad Gonzales, 2006, p. 35).

La amplia heterogeneidad cultural es otro rasgo distintivo de la Amazonía peruana y se expresa con la coexistencia de más de sesenta pueblos indígenas,⁵ los cuales se agrupan en catorce familias lingüísticas.⁶ La población indígena

⁴ El título del “Pulmón del Planeta” no es una casualidad, ya que mantiene un equilibrio climático a través de los ingresos y las salidas de CO₂ y de O₂ respectivamente. Cerca del 70% de los bosques húmedos tropicales del planeta contribuyen atenuar el efecto invernadero, por ello se le considera un espacio vital para asegurar el equilibrio ambiental del planeta (Guinness World Records, 2013, p. 40).

⁵ Pueblo indígena o grupo étnico es un grupo etnolingüístico cuyos diversos integrantes comparten una misma identidad. El idioma es un factor principal y dominante para identificar a un grupo étnico, pero existen otros factores que se relacionan con una identidad étnica o la determinan.

⁶ Formado por un conjunto de pueblos indígenas con un grupo de lenguas emparentadas históricamente y que parecen derivar de una lengua más antigua que por diversificación dialectal dio origen a otras.

amazónica es 332975 habitantes.⁷ A esto se añaden los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario que son pueblos que no han establecido relaciones con el resto de la sociedad nacional.

La Amazonía se caracteriza por ser un emporio de riquezas inagotables, cuyos múltiples recursos han contribuido a solucionar distintos problemas no solo nacionales sino internacionales. Otra de sus características es la gran variedad de ecosistemas que conforman un hábitat perfecto para la diversidad de especies de árboles, plantas y animales que existen. Según el Centro de Datos para la Conservación de la Universidad La Molina, se registra más de 379 especies de anfibios, 383 de reptiles, 1822 de aves, 462 de mamíferos y 17144 especies de plantas vasculares, entre otras.⁸ La gran diversidad de especies animales y vegetales que existe en el Amazonas hizo pensar a los primeros conquistadores que no había llegado a otro lugar más que al ansiado Edén.⁹

La Amazonía no es solo hábitat de una maravillosa biodiversidad de valores incalculables, sino que en el interior de sus bosques, a orillas de los ríos, lagos y lagunas, al pie de las montañas y cabeceras de los ríos, en las llamadas cuencas hidrográficas, da cobijo a miles de seres humanos, quienes desde sus antepasados muy remotos han ocupado, en grupos, han habitado grandes extensiones de territorio y utilizado los recursos naturales vitales para su existencia. La diversa y abrupta geografía amazónica albergó desarrollos civilizatorios desde hace más de 5 mil años, siendo los de mayor antigüedad la de nuestro continente, es decir, pueblos originarios o pueblos indígenas amazónicos (Huamán, 2013, p. 4).

Las poblaciones nativas de la Amazonía han vivido un largo proceso de adaptación y evolución de su espacio y territorio, desarrollando un conjunto de

⁷ Según el censo del 2007, la población del Perú es de 28 220 764 personas, de las cuales 3 675 292 habitan en la Amazonía peruana (un 13.4% de la población nacional). Según el mismo censo, la población indígena que habita en las comunidades nativas es de 332 975 personas, constituyendo el 9% de la población amazónica.

⁸ Para mayor información, ver: http://cdc.lamolina.edu.pe/Area_Trabajo/especies.htm.

⁹ Imaginaban que la selva era una inagotable fuente de fertilidad al ver esos gigantescos árboles sobre los que viven tantas clases de animales e insectos, plantas parásitas y, en fin, todo un despliegue de vida sin igual en cualquier otra parte del planeta.

actividades productivas con el uso de recursos naturales vitales para su existencia. Constituyen grupos étnicos que coexisten con sus distintas culturas y lenguas, que crearon sistemas tecnológicos y lograron grandes transformaciones en armonía con la naturaleza, como la fertilización de tierras o el desarrollo de obras hidráulicas, entre otras, admiradas por el mundo.

Sus sistemas religiosos tienen como base común el reconocimiento de deidades y espíritus contenidos en los propios recursos naturales, tienen “vida espiritual” protagonista de su cosmovisión. Además, son portadores de un sabio y amplio conocimiento sobre el ambiente amazónico, la conservación, el uso de los recursos del bosque, el trato armonioso con el medio ambiente heredado como parte de su cultura transmitida en forma oral que procede de muchos siglos antes de la propia formación del Estado-nación.

Los sistemas simbólicos son, en realidad, una manifestación de que los pueblos indígenas son parte integral del ecosistema, donde la biodiversidad y las comunidades humanas están integradas, no aisladas. Por ello, la tierra y los problemas del territorio son una prioridad para ellos. Chirif, Smith y García Hierro (1991, p. 27-28), recogen la siguiente reflexión:

Los montes, valles, ríos y lagunas que se identifican con la existencia de un pueblo y que le han previsto de medios de vida, la riqueza heredada de sus antepasados y el legado que están obligados a entregar a sus descendientes; un espacio en que cada pequeña parte, cada manifestación de la vida, cada expresión de la naturaleza es sagrada en la memoria y en la experiencia colectiva de ese pueblo y que se comparte en íntima interrelación con el resto de los seres vivos respetando su natural evolución como única garantía del mutuo desenvolvimiento, el ámbito de la libertad sobre el que dicho pueblo ejerce dominio permitiéndole desarrollar sus elementos nacionales esenciales y por cuya defensa o reivindicación estará dispuesto a derramar su sangre cada miembro de ese pueblo, antes de soportar la vergüenza de tener que mirarse en los ojos de su pueblo despojado.

La racionalidad de la armonía funcional del bosque amazónico ha sido conocida y respetada por los pueblos indígenas durante miles de años, lo que ha permitido

mantenerla con zonas pristinas y de virginidad inigualable. (La Torre, 1998). La sabiduría indígena ha podido desarrollar y mantener conocimientos, innovaciones y prácticas asociadas a la diversidad biológica que no solo ha contribuido a su bienestar, sino al bienestar de la humanidad en su conjunto. La literatura es abundante sobre el particular, por ejemplo, el aporte de las comunidades amazónicas en la identificación de plantas medicinales con comprobadas propiedades curativas. Sus aportes en la conservación, en la domesticación y el conocimiento sobre cultivos alimenticios están documentados, tanto en el nivel de su valor de uso, para los propios grupos indígenas, como a nivel de importancia agronómica que tienen para el mundo exterior. La información en etnobotánica y etnofarmacología amazónica son, asimismo, abundantes (Ruiz, 2002, pp. 23-24).

Lamentablemente en la actualidad los pueblos indígenas enfrentan formas de opresión que amenazan su existencia. Por tal razón, el Convenio 169 ha considerado necesario proteger el conjunto compuesto por tierra, territorio y recursos naturales, pues se trata de una “cuestión de derechos humanos esencial para la supervivencia de los pueblos indígenas.” (Stavenhagen, 2007, p. 29).

Las zonas de la Amazonía que cuentan con mayor diversidad biológica y cultural son las que reciben mayor presión de la inversión privada para explotar recursos naturales (Tipula, 2013, p. 15). Es el caso del proyecto Camisea, situado en un área virgen e intacta del planeta, limpia de toda actividad humana y con su complemento completo de biodiversidad, además de ser santuario de caza y pesca para los pueblos indígenas.

El avance del sector empresarial en la Amazonía está relacionado con la política del Estado que opta por otorgar derechos a terceros, sin contar con territorios indígenas saneados en virtud de la promoción de la inversión a través de facilidades para el ingreso de capitales. Esta situación se hizo evidente cuando el Estado peruano, a pesar de haber creado la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, en 1984, con el fin de resguardar a las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, con el correr de los años, terminó por

concesionar los territorios de la reserva, permitiendo que dentro ella se realizaran actividades hidrocarburíferas ejecutadas por los consorcios. Terminó así por violar las normas nacionales y tratados internacionales, en virtud de que las reservas territoriales para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial son intangibles.

La Ley N° 28736 (Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento voluntario y en situación de contacto inicial) afirma que: a) no podrán establecerse asentamientos poblacionales distintos a los de los pueblos indígenas que habitan en su interior; b) se prohíbe la realización de cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres ancestrales de los habitantes indígenas; c) no se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales. De este modo, el derecho al territorio, a la propiedad y a la posesión ancestral de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como los que habitan en la Reserva Territorial Indígena Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, quedaron anulados, contraviniendo el artículo 2º de la Constitución política del Perú que establece la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Estas normas, al ser inconstitucionales, son inaplicadas y abren un camino de lucha por el respeto absoluto de la intangibilidad de las reservas territoriales indígenas, al prohibirse toda actividad extractivas de terceros en esos territorios.

Estos hechos han dado origen a conflictos permanentes entre las comunidades nativas y los pueblos en aislamiento voluntario contra el Estado y los concesionarios del proyecto Camisea. Al respecto, el líder del Consejo Matsiguenga del Río Urubamba (COMARU), Walter Kategari nos dice:

Para nosotros el proyecto Camisea será un hito al que nos referiremos en el futuro para señalar cómo era antes de Camisea y cómo es después de Camisea. Tengan la seguridad de que a pesar de que se ha invertido gran cantidad de recursos económicos para demostrarnos que no ha habido impactos, nuestro pueblo los ha sufrido en sus ríos, bosques, fauna y tierra que repercute en su salud, nutrición y patrimonio. Estamos seguros de que Camisea es solo el principio y que en muchos años no tendremos tranquilidad en nuestros territorios

porque detrás de él vienen otros lotes, y posiblemente otras empresas; ante todo ello, nosotros lo único que podemos invocar con nuestros derechos en la mano es que continuaremos a partir de esta experiencia exigiendo respeto a nuestros derechos y el cumplimiento de los estándares que garanticen un futuro digno para nuestro pueblo.¹⁰

Las palabras del líder indígena Kategari recuerda los instrumentos legales internacionales suscritos por el Estado peruano veinte años con el Convenio 169 de la OIT, el que continúa aún sin ser reglamentado pese a la insistencia de las organizaciones indígenas. Al respecto, Duránd (2011, p. 41) refiere que:

El derecho a la consulta previa, que ha cobrado relevancia en el marco de la expansión de la actividad extractiva, ha sido sistemáticamente ignorado, iniciándose las acciones de extracción de los hidrocarburos sin contar con el aval de los pueblos asentados en los territorios en los que operan. Lo que ha primado desde el Estado es el impulso de una política de polarización en virtud del establecimiento de las actividades extractivas por lo que ha insistido en mecanismos represivos ante el reclamo de las organizaciones indígenas, ignorando reiteradas solicitudes de diálogo y criminalizando las acciones de protesta de los líderes indígenas, lo que vulnera la posibilidad de que los pueblos amazónicos ejerzan plenamente sus derechos.

Es seguro de que el Estado pudiera haber contribuido en prevenir la confrontación, si es que hubiera promovido la participación de las comunidades amazónicas en las actividades del proyecto Camisea. En especial, si se hubiese implementado la consulta previa, antes de dar la licencia o concesión a terceros y antes de que Perupetro divida en lotes los territorios de los pueblos indígenas, dando de este modo los primeros pasos para el incumplimiento de los derechos indígenas y ambientales de respeto a los territorios y conocimientos colectivos.

La presente investigación se inició cuando la autora realizaba estudios de maestría, por lo que alcanza a identificar las primeras manifestaciones de protesta en el Bajo Urubamba, el primer paro sucedido en el año 2005 y el

¹⁰ Palabras en la presentación del libro de Linda Lema Tucker *¿Fulgor o penumbra? El proyecto de gas de Camisea y el exterminio de los pueblos indígenas peruanos* (2011), en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

levantamiento indígena en toda la Amazonía que acontece en el 2008. Todo estos sucesos antes de imaginar el sangriento desenlace de los hechos de Bagua, ocurridos el 5 de junio del 2009, conflicto que ha marcado un punto de inflexión en las protestas indígenas y que apertura un nuevo ciclo para los pueblos originarios de la Amazonía peruana.

4.2. La conformación legal de los pueblos indígenas en el Perú

Si tomamos como antecedente las incursiones al territorio amazónico durante la Colonia y la República por parte de las administraciones políticas de cada periodo, vemos que ya existía un contacto entre los pueblos indígenas con la sociedad occidental desde hace siglos, siempre bajo un carácter violento. En el siglo XIX, con la Fiebre del Caucho, se ocupó de manera sistemática el territorio y se expandieron los límites de lo que se concibió como el Estado-nación. Sin embargo, para los pueblos indígenas esto representó una catástrofe demográfica, social, cultural, política y económica.

El siglo XX se presentó como un largo tiempo de lucha, negociación y articulación con la sociedad nacional, que nunca estuvo exenta de conflictos y que no ha culminado para todos los grupos étnicos hasta el momento actual viviendo aún arrinconados y exterminados en forma paulatina. En torno a esta lucha, los indígenas aprendieron a utilizar mecanismos políticos y jurídicos para asegurar su supervivencia a través del reconocimiento de sus derechos y su constitución legal frente al Estado y la sociedad nacional.

Entre los antecedentes de este proceso de lucha y reconocimiento, vemos que a inicios del siglo XX el Estado daba preferencia a las comunidades indígenas de la sierra (posteriormente comunidades campesinas), y sobre ella legislaba en torno al reconocimiento de sus territorios, dedicados generalmente a las actividades de la agricultura y la ganadería. Así, el gobierno de Leguía se caracterizó por dictar leyes de protección contra las poblaciones de los Andes (aunque paradójicamente también las explotaba mediante mitas viales). Por su

parte, durante el gobierno de Sánchez Cerro, en 1933, se declaró como “imprescritible, inajenable e inembargable” la propiedad de las comunidades.¹¹

Pero no fue hasta 1957 cuando se establecerían las bases de una política de tierras para los nativos de la Amazonía (Decreto Supremo N° 3), bajo el criterio de las diez hectáreas de tierra por persona mayor de cinco años. Chirif (2007, p. 103) advierte que esta norma tenía una gran limitación: la tierra era otorgada en usufructo y no en propiedad. Esta entrega de tierras en calidad de “reserva” a los indígenas amazónicos habría respondido a la idea de que estos debían ser “asimilados a la civilización”.

Entre la década de 1950 y 1960 el Estado empezó a establecer modernos proyectos de colonización en la Amazonía. Mediante la Carretera Marginal, impulsada por el presidente Belaúnde, se buscaba ingresar la “civilización” y el “progreso” al entonces considerado agreste, salvaje y rico territorio. La presión masiva de los colonos se hizo sentir sobre diversas poblaciones indígenas. Mientras tanto, el Estado buscaba hacerse presente por medio del Instituto Indigenista Peruano, una oficina especializada de lo que se denominaba en ese entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas.

Sin embargo, no fue hasta la década de 1970 que se dictaron leyes que ejercieron incidencia directa sobre la organización de los pueblos indígenas. El gobierno de Velasco Alvarado causó un influjo político de grandes proporciones en la Amazonía peruana.

a. La Reforma Agraria en la Amazonía: la formación de las comunidades nativas

El gobierno del general Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley N° 17716 de Reforma Agraria, el 24 de junio de 1969, en donde ordena la expropiación de las haciendas para entregarlas a los campesinos, poniendo fin a la situación abusiva de la oligarquía latifundista. Esta ley rebautizó a las comunidades de indígenas

¹¹ Artículo 209° de la Constitución de 1933. Salvo en caso de expropiación por razones de utilidad pública, previa indemnización.

por comunidades campesinas. La palabra indígena se la sustituyó por campesino, creándose las comunidades campesinas cuyo status fue aceptado y defendido por los propios involucrados; la idea primogénita era retirar el estigma de opresión y discriminación (Angles, 2014, p. 12). Sin embargo, esta ley no se ocupaba de las llamadas tribus selvícolas, que continuaron siendo vistas como salvajes.

A los cuatro años de haberse decretado la Reforma Agraria para la costa y la sierra, el gobierno de Velasco promulgó el Decreto Ley N° 20653, “Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de Regiones de Selva y Ceja de Selva”, el 24 de junio de 1974. El decreto hacía las siguientes descripciones:

Las comunidades nativas tiene origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva y están constituidos por un conjunto de familias vinculados por el idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso.

Se establecía que las tierras comunales eran inalienables, inembargables e imprescriptibles, garantizando la integridad territorial. Además permitió convertir a las comunidades nativas en propietarias sobre todas sus tierras, cualquiera que fuera su capacidad de uso, sea para el cultivo, la ganadería o de tipo forestal (Aroca, 2011, p. 185).

Esta norma jurídica fue promotora de un verdadero cambio en la Amazonía, siendo la primera ley que reconoce a la población indígena de la selva el mismo status que tienen las comunidades de la sierra (denominadas ahora campesinas). Además, la ley formuló las bases de un estatuto jurídico indígena propio con derecho a la autonomía cultural y a regirse por su derecho consuetudinario, como el derecho prioritario sobre las tierras de actitud agrícola o ganadera que posee, y el aprovechamiento prioritario de los recursos naturales que hubiera en esas tierras.

Un año después, el gobierno de Morales Bermúdez derogó el Decreto Ley N° 20653 a través de Decreto Ley N° 22175 que se denominó “Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva” que se promulgó el 9 de mayo de 1978. Esta nueva ley, que hasta hoy se encuentra en vigencia, establece en su artículo 11° que la parte del territorio de las comunidades nativas que corresponda a tierras con aptitud forestal les será cedida en uso; de esta manera, la ley resuelve en contra de las poblaciones indígenas amazónicas, en tanto se ha establecido una limitación de acceso de los indígenas a sus bosques tradicionales, anulándose la propiedad sobre la integridad territorial que estaba establecida en la ley anterior y que reconocía el derecho de propiedad sobre todo el territorio comunal. En realidad, el Decreto Ley N° 22175 favoreció más a las empresas madereras que a las comunidades, y prueba de ello es que a los pocos meses de su promulgación ya se habían otorgado concesiones forestales a favor de las empresas privadas sobre casi todos los bosques nacionales.

La Constitución política del Perú de 1979 estableció que las tierras de las comunidades campesinas y nativas son inembargables e imprescriptibles; asimismo señalaba que estas eran inalienables, estableciendo dos excepciones: (i) una ley fundada en el interés de la comunidad y solicitada por una mayoría de los dos tercios de los miembros calificados de esta; y (ii) un caso de expropiación por necesidad y utilidad pública. En ambos casos se estableció que se hará un previo pago en dinero, quedando prohibido el acaparamiento de tierras en la comunidad.¹²

Con el transcurrir de los años, otras leyes fueron decretadas en torno a las comunidades nativas, todas las cuales estuvieron enmarcadas en la propiedad de tierras y uso agrario, forestal y ganadero; como se ve, no precisamente en el tema de la identidad étnica y cultural.

Con la Constitución de 1993 se recorta la protección de las tierras de las comunidades, eliminando la inembargabilidad e inalienabilidad de estas, pero como compensación se introduce como derecho fundamental la Identidad étnica

¹² Artículo 163 de la Constitución política de 1979.

y cultural, además de reiterar el reconocimiento al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. (Carhuatocto, 2012, p. 43).

b. Régimen de protección a los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial

En el Perú el régimen especial de protección para pueblos en aislamiento se ha ido construyendo gradualmente a partir del año 2000, a través de diversas normas específicas, aunque ya la ley de comunidades nativas de 1974 tomó previsiones para atender las necesidades de protección territorial de pueblos aislados. Este escenario se da en razón de que en la Amazonía peruana habitan una cantidad indeterminada de pueblos indígenas caracterizados por no seguir un patrón de vida sedentario (no viven en un solo lugar o asentamiento), sino que se desplazan por el bosque amazónico refugiándose frente a diversas amenazas a sus formas de vida.¹³

El avance de la frontera extractiva forestal puso en evidencia el impacto mortal de los encuentros con poblaciones indígenas que se mantenían en aislamiento en zonas aisladas y remotas. En 1984 –como se analizará más adelante– ocurre una tragedia, la muerte de una alta proporción de indígenas aislados de la etnia Yora, denominada entonces Nahua, quienes vivían en las cabeceras del río Mishagua y el río Serjali. Para muchos, estas muertes se produjeron inducidas por una empresa en tanto los nativos aislados eran un obstáculo para las actividades de exploración petrolera:

La organización AIDESEP y otras instituciones nacionales y extranjeras iniciaron entonces la tarea de documentar la ubicación de estas poblaciones para solicitar la creación de diversas reservas territoriales que protegieran las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. (Lema, 2011, p. 54).

¹³ Entre ellos existe una gran población aún no identificada, especialmente en la zona fronteriza entre Perú y Brasil, que ha dado lugar a la creación de varias reservas indígenas de protección especial.

El Decreto Ley N° 22175, “Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva” de 1978 que recogía la Ley N° 20653 (1974), en su artículo 10º preveía diferentes situaciones que daban lugar a diversos procesos de demarcación: a) comunidades estables, sedentarias, y b) comunidades con patrones dinámicos de asentamiento, nómadas.

En su segunda disposición transitoria, estableció un tercer mecanismo “para la demarcación del territorio de las comunidades nativas cuando se encuentren en situación de contacto inicial y esporádico con los demás integrantes de la comunidad nacional”, en cuyo caso “se determinará un área territorial provisional de acuerdo a sus modos tradicionales de aprovechamiento de recursos naturales...”.¹⁴ Este mecanismo tenía la ventaja de establecer un área territorial concebida provisionalmente como “reserva del Estado”, pero con un destino final muy claro: la titulación. Se trataba del reconocimiento de un derecho territorial sujeto a posteriores actos de autodeterminación (Barclay y Hierro, 2014, p. 9).

En el año 2003, el Estado peruano presionado por las organizaciones indígenas adecuó su categoría legal a través de un decreto supremo bajo la denominación de “Reserva Territorial del Estado”, producto de la mesa de trabajo que se constituyó en el año 2001 para prever mecanismos de protección a los pueblos en situación de aislamiento de la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua. Resultado de ello se promulgó el D.S. N° 013-2001-Promudeh,¹⁵ que garantiza el respeto y la promoción de los derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en todas las acciones que emprendan otros sectores del Estado, debiendo diseñar una política de intervención para garantizar sus derechos.

El tema culminó en el 2006, cuando el Estado peruano promulgó la Ley N° 28736 (“Ley para Protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial”) ¹⁶ a fin de instaurar un régimen

¹⁴ Su extensión original era de 443887 ha. En el año 2002 se corrigió la extensión tomando como base la memoria descriptiva original.

¹⁵ Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, actualmente Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

¹⁶ Fue publicada en el diario oficial *El Peruano*, 18 de mayo del 2006.

que dispusiera formas de gestión de las reservas. La norma autorizó dichas “categorías” poblacionales, que eran en esos momentos abiertamente discutidas por sectores interesados en impedir la vigencia de unos territorios dotados de una intangibilidad especial, estableciendo las siguientes definiciones:

a) *Pueblos indígenas*: Aquellos que se autorreconocen como tales, mantienen una cultura propia, se encuentran en posesión de un área de territorio y forman parte del Estado peruano conforme a la Constitución. En estos se incluye a los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial.

b) *Pueblos en aislamiento*: Situación de un pueblo indígena, o parte de él, cuando no ha desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, han optado por discontinuarlas. La ley dispuso como ente rector al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuano (INDEPA).

Barclay y García Hierro (2014, p. 12) sostienen que un año después, en 2007, los cambios que se produjeron crearon confusión e incertidumbre. La ley fue reglamentada a través del DS N° 008-2007-MIMDES que creaba un régimen especial transectorial que la Ley 28736 no anunciaba, para así dotar como ente rector a un nuevo organismo: el MIMDES, a través de su Dirección de Pueblos Originarios y Afrodescendientes. El reglamento creó la categoría de “reserva indígena” a la que las existentes debían adecuarse, definió con mayor detalle las funciones del ente rector, creó una comisión multisectorial y definió legalmente las categorías de pueblos en aislamiento y en contacto inicial y los procedimientos para el reconocimiento de estas poblaciones y sus áreas de vida. Al respecto, los autores señalan: “...este ‘reconocimiento’ requiere la realización de un estudio previo el cual, de ser aprobado, se traduce en un decreto supremo que reconoce la existencia del Pueblo en Aislamiento o Contacto Inicial. A su vez la categorización de una reserva requiere un Estudio Adicional de Categorización que, de ser aprobado, resulta en otro decreto supremo de creación como reserva indígena

Hasta el momento ninguna reserva ha sido recategorizada como reserva indígena. La duración de las reservas, antes de plazo indefinido, pasó a estar sujeta a plazos definidos renovables, sujetos a informes técnicos referidos a la continuidad de la población dentro de las categorías poblacionales a las que se aplica la ley. De esta manera, el nuevo régimen de reservas eliminó, sin decirlo, el compromiso de que la protección tuviera un carácter permanente; peor aún, mediante el artículo 35, el reglamento acepta implícitamente la superposición de lotes petroleros u otros derechos sobre las reservas, lo que hasta ese momento carecía de sustento legal, al señalar que:

Cuando en una reserva indígena se ubique un recurso natural cuya exploración y explotación el Estado considera de necesidad pública, la autoridad sectorial y competente solicitará al Viceministerio de Interculturalidad la opinión técnica con ocasión de los estudios de impacto ambiental requeridos de acuerdo a ley (Barclay y García Hierro, 2014, p. 18).

4.3. El régimen jurídico internacional

Durante los últimos veinte años, la comunidad internacional ha reconocido la necesidad de prestar una atención especial a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Como resultado de ello, varios instrumentos internacionales tratan los derechos de los pueblos indígenas o incluyen estipulaciones pertinentes a ellos.

En la región, dos instrumentos internacionales trascendentes han marcado el ritmo de materia indígena. Estos instrumentos internacionales son: el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989¹⁷ y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 2007.

a. El Convenio 169 de la OIT

¹⁷ El Convenio 169 OIT fue ratificado por el Perú el 17 de enero de 1994 mediante la Resolución Legislativa N° 26253, por tanto, las disposiciones referidas al respeto al territorio indígena y el derecho a la consulta son de cumplimiento obligatorio.

El principal documento jurídicamente vinculante dedicado completamente a los derechos de los pueblos indígenas es el Convenio 169 de la OIT que introduce los conceptos de “pueblos” para las agrupaciones indígenas y de “territorios” para sus espacios de uso, a fin de asegurar sus derechos de propiedad y de uso, en particular sobre aquellas tierras que han utilizado tradicionalmente y sobre las que han tenido acceso (Tipula, 2013, p. 19).

Desde su aprobación, el Convenio 169 se ha convertido en el mejor instrumento para hacer respetar los derechos indígenas, especialmente en lo que respecta a su derecho fundamental al respeto de su cultura, la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado contemplados en sus artículos 3º, 6º, 15º y 16º. Ciertamente que otros países han optado, además de ratificar el Convenio, por incorporar de manera expresa en sus constituciones los mencionados derechos indígenas, tal es el caso de Ecuador, Colombia y Bolivia. A la fecha, dicho instrumento internacional no se ha implementado en el Perú, aunque esta norma internacional sea la primera sobre cualquier norma de legislación especial. El Convenio 169 tiene rango constitucional y, al haber sido ratificado, el Estado peruano debería integrarlo en su Constitución.

En tal sentido, las entidades estatales, organismos públicos, y ministerios están obligado a elaborar políticas públicas, establecer instituciones y dar medidas que implementen los derechos contenidos en el Convenio 169, previa consulta y con participación de los pueblos indígenas:

Especialmente están obligado a efectuar “consultas previas” antes de cualquier medida administrativa que vaya a tomar que pueda afectar los pueblos indígenas. En caso de conflicto con otras normas deben dar prioridad al Convenio 169 y a las normas que otorgan más derechos o ventajas a los pueblos indígenas (art. 35) (Carhuatocto, 2012, p. 47).

El Convenio 169 establece un conjunto de derechos colectivos que garantizan la identidad, autonomía y desarrollo de los pueblos indígenas. Por ello, representa una explícita aceptación de reconocimiento a los “pueblos interesados al derecho de propiedad y de posición sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” (art.

Nº 15 y 16); y un reconocimiento a la diversidad étnica y cultural del país como un elemento positivo y trascendente de la nacionalidad.

El convenio representa un compromiso del Estado con los pueblos indígenas frente a la comunidad internacional. Así, en el artículo Nº 21 asigna a los gobiernos la responsabilidad de asegurar a los indígenas el goce “en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población”, además de promover “la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones”. Por su parte, el artículo Nº 31 señala para los pueblos indígenas la opción clara de “gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación”. De acuerdo al Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales:

(...) los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorio, o con ambos según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación (...).

Al consagrar los derechos indígenas fundamentales, el Convenio 169 constituye la piedra de toque para la construcción de un Estado plurinacional, pues registra las diferentes naciones que habitan en su territorio reconociendo sus tradiciones ancestrales, cultura e incluso su jurisdicción.

b. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se aprobó, luego de veinte años de debate, el 13 de septiembre del 2007, durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La declaración precisa que los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, territorios y

recursos; a su cultura, identidad y lengua; al empleo, la salud y la educación; y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico, es fundamental. Enfatiza en el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones; prohíbe la discriminación contra los indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener su diversidad y a propender por su propia visión económica y social.

A nivel internacional, esta declaración fue promovida por la cancillería peruana, sin embargo, no tuvo mayor vigencia y difusión en el Perú. Resulta por eso irónico que siendo nuestro país promotor de esta importante norma, seamos los primeros en transgredir los artículos 7º y 8º de la Declaración de la ONU, donde se señala que los Estados establecerán mecanismos eficaces de prevención para proteger la integridad de los pueblos y las personas indígenas, así como sus tierras, territorios y recursos para que no sean enajenados.¹⁸

4.4. El debate sobre el territorio indígena en América Latina y el Perú

La década de los 90 de América Latina se reveló como un tiempo histórico rico en posibilidades y complejo en su interpretación, en cuyo interior se dio la eclosión de los nuevos movimientos sociales y, entre estos, los movimientos indígenas. Producto de ello, han sido las movilizaciones en contra de la reforma estructural, pero también la autonomía y el respeto a sus derechos que protagonizaron los indígenas en el continente (Dávalos, 2005, p. 1).

Como se ha mencionado a lo largo del presente estudio, uno de los aspectos centrales de las demandas indígenas, y la más conflictiva, es la superposición de las actividades económicas extractivas sobre los territorios indígenas. Pero ante ello, no solo se ha dado una insurgencia del movimiento indígena a nivel político, sino que también se ha ido forjando una epistemológica sobre el tema indígena que cuestiona el modelo occidental del Estado-nación, el que dificulta

¹⁸ Carta de la OIT ACD5-169, fechada el 27 de julio del 2007, dirigida a la Defensoría del Pueblo.

la comprensión de la relación entre el indígena con su territorio. Además, se ha ido produciendo un pensamiento indígena que revalida los derechos y el acceso a la ciudadanía de sus pueblos. Estas propuestas académicas, indesligables de su compromiso político, pasaremos a detallar:

a. La lucha indígena y las nuevas vertientes epistemológicas en América Latina

En la década de los noventa se dan acontecimientos significativos: se produce el primer levantamiento de los indígenas en Ecuador cuando entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Canadá y Estados Unidos; así también se produce la insurgencia indígena en Chiapas, México. La historia no olvida que los indígenas mejicanos, al mando del comandante Marcos, apelaron al pasamontañas para taparse el rostro a fin de que el mundo pueda visibilizarlos.

En todos los países donde se encuentran pueblos en condición de indígenas, sus movimientos lograron poner en el centro del debate público, con distinta intensidad, sus reclamos de reconocimiento como colectivos diferenciados – pueblos– sujeto de derechos, exigiendo nuevos estatutos que garanticen su existencia y su libre determinación. (Brysk, 2001).

Estos hechos trajeron nuevas y variadas circunstancias, como la emergencia de una vertiente de intelectuales indígenas en América Latina, marcada por reflexiones en torno a la descolonización como eje teórico. De este modo, los conceptos, categorías y perspectivas constituidas como únicas para el análisis de la realidad fueron echados al traste por su marcado eurocentrismo. Justamente Wallerstein sostiene que las ciencias sociales se constituyen como tales en un contexto espacial y temporal específico, en cinco países liberales industriales, Inglaterra, Francia, Alemania, las Italias y los Estados Unidos, que forman “el cuerpo disciplinario básico de las ciencias sociales, al interior de las cuales continuamos hoy habitando” (Wallerstein, 1996, p. 102). Con los cambios producidos en la región, en adelante ya no serán las únicas categorías universales para el análisis de cualquier realidad y no han definir el deber ser para todos los pueblos del mundo.

Los sucesos indígenas inundaron el quehacer de las ciencias sociales latinoamericana tanto de intelectuales indígenas como no indígenas, dando cuenta en los últimos lustros de una situación interesante en destacar. Lander, (2000), uno de los importantes estudiosos en la búsqueda de formas alternativas del conocer, cuestiona el carácter colonial/eurocéntrico de los saberes sociales del continente y refiere que, en este camino, el futuro de las *otras* culturas y pueblos que no logren incorporarse a la marcha inexorable de la "historia" no está más que destinado a desaparecer.

Una forma de organización y de ser de la sociedad se transforma mediante este dispositivo colonizador del saber en forma "normal" del ser humano y de la sociedad. Las otras formas de ser, las otras formas de organización de la sociedad, las otras formas del saber son transformadas no solo en diferentes, sino en carentes arcaicas, primitivas, tradicionales, premodernas. Siendo ubicadas en un momento anterior del desarrollo histórico de la sociedad (Lander, 2005, p. 246).

Por su parte, Dávalos (2005, pp. 359), al referirse a la década de 1990, la denomina la "década ganada" para los pueblos indígenas de la región. Además señala:

Durante estos lustros los indígenas de la región fueron protagonistas de rebeliones, levantamientos y otras acciones colectivas que removieron presidentes de repúblicas, redefinieron constituciones nacionales, eligieron mandatarios, impidieron la concreción de megaproyectos de explotación de recursos naturales, instalaron en el debate público concepciones inimaginables para estos territorios hace cuarenta años, como autonomía territorial, pluriethnicidad e interculturalidad como nuevo pacto de convivencia entre pueblos y naciones.

b. Territorio indígena y enfoques diferentes

En América Latina el tema del territorio indígena ha sido tratado a través de distintos enfoques. Dávalos (2001, p. 6) afirma que el territorio es uno de los ejes conceptuales de la plataforma de las demandas indígenas:

Es el territorio indígena el que genera incompatibilidades conceptuales al incorporar categorías inexistentes en el pensamiento occidental, como por ejemplo cuando se habla de territorios colectivos dando cuenta de los límites que tienen las aproximaciones teóricas elaboradas en los países del Norte para analizar las emergentes realidades latinoamericanas y sus diversos contextos culturales y procesos políticos.

Uno de los intelectuales indígenas que analiza el movimiento y presenta una visión histórica panorámica y estratégica, es el historiador mapuche Víctor Toledo Llancaquero. Este describe los derechos territoriales como una de las principales reivindicaciones de los pueblos indígenas, plantea la hipótesis de situar el debate sobre la disputa de la territorialidad, entendiendo a esta de manera múltiple: como locus geográfico, pero también como locus simbólico-histórico, jurídico, político, y espacio de disputa por el control y la defensa de la biodiversidad y los recursos naturales. Además sostiene que en el contexto actual neoliberal se desterritorializan y rompen los vínculos sociales. Sin embargo, los derechos territoriales indígenas adquieren centralidad para garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos y realizar aquel estándar de derecho internacional (Toledo Llancaquero, 2005, p. 63). En ese sentido, la capacidad de creación, modificación y decadencia de territorialidades será en la globalización uno de sus rasgos propios.

Estos hallazgos de la investigación ayudan a comprender la afirmación de Bourdieu (1998) acerca de por qué el neoliberalismo resulta ser “un programa de destrucción metódica de colectivos sociales”. Los pueblos indígenas, por ello, han desplegado esfuerzos frente a los nuevos asedios a sus territorios, del capital que presiona sobre los espacios indígenas y afectan a sus derechos territoriales. Al respecto, Toledo Llancaquero (2005, p. 76) afirma:

En algunos casos, la defensa de hábitat y recursos ha puesto de relieve complejos y elaborados sistemas de conocimiento local con representaciones del mismo, estructurados de acuerdo a las lógicas internas de las culturas; en otras situaciones, el reclamo de derechos ancestrales sobre sus tierras y espacios se ha apoyado en el relevamiento de la memoria del lugar y la activación de las antiguas territorialidades.

Como se ve, las contiendas y procesos que afrontan los indígenas se dieron en gran cantidad, buscando reivindicar la autonomía, el hábitat, las tierras ancestrales, los recursos y la biodiversidad; es decir, reconstruir y defender los territorios.

A modo de recapitular, los derechos territoriales han pasado a constituir una plataforma común del movimiento indígena. Es bajo el rótulo de derechos territoriales que se pueden encontrar diversos temas de debate: identidad cultural, tierras, recursos naturales, biodiversidad, medioambiente, organización social del espacio, jurisdicción y control político, soberanía, etc.

Una expresión del tema es el debate del proyecto de Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas. Al respecto, el relator del Grupo de Trabajo de OEA resume del siguiente modo el estado de la discusión que hubo en su instancia sobre derechos indígenas, en la sesión del 7 y 8 de noviembre del 2002:

Los derechos territoriales son una de las principales reivindicaciones de los pueblos indígenas en el mundo. Esos derechos son el sustrato físico que les permite sobrevivir como pueblos, reproducir sus culturas, mantener y desarrollar sus organizaciones y sistemas productivos [...] Estos derechos (territoriales) no son solamente una cuestión de bienes inmuebles, y no deberán basarse en el clásico enfoque de “propiedad” sobre el que se basa el derecho civil. Abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, y para su propio desarrollo. (Kreimer, 2003, p. 4-8).

c. Estado del debate indígena en el Perú

En el Perú, poco se ha avanzado en el tema de los pueblos indígenas, si lo comparamos a Bolivia y Ecuador. No existe suficiente bibliografía, se carece de una corriente de intelectuales indígenas, se aprecia desinterés de las ciencias sociales en ofrecer una nueva discusión teórica y epistemológica que tenga como finalidad elaborar nuevas estructuras de interpretación, análisis y relaciones sociales de la realidad, desde ópticas que no tengan nada que ver con la clásica y hegemónica dinámica occidental.

El caso peruano, salvo honrosas excepciones como Aníbal Quijano, Alberto Chirif, Federica Barclay, Rodrigo Montoya, Roger Rummrigill, el país podría ejemplificar el enfoque colonizador de las ciencias sociales construidas de conceptos, categorías y perspectivas occidentales convertidas en las únicas categorías para el análisis de realidad peruana. Sin embargo, se tiene esperanza de la emergencia de una corriente de intelectuales indígenas luego de los sucesos de Bagua que comienzan a sacudirse de la dominación propia de los Estados nacionales, pudiéndose ver a jóvenes dando sus primeros pasos en la academia y espacios contiguos, desde la tensión y los conflictos sociales y ambientales a fin de remecer con su presencia la ortodoxia académica occidental.

4.5. Estado, pueblos indígenas y empresas: concepciones e intereses sobre el territorio indígena

Para la presente investigación se ha considerado a tres representantes directos de los conflictos socioambientales. Es importante conocer los intereses de los actores tanto nacionales o internacionales, empresas públicas y privadas, empezando por supuesto por el Estado y sus dependencias. Asimismo se abordará la experiencia vital de los actores implicados, en especial de los líderes indígenas, protagonistas principales en el meollo de todo el entramado, centro de las presiones, tensiones y contradicciones.

a. Las comunidades nativas y los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial

En el Perú, los pueblos indígenas se encuentran organizados a través de comunidades nativas, comunidades campesinas y los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. El reconocimiento y la personería jurídica se establece en el artículo 89° de la Constitución política del Perú de 1993, y en el caso de los pueblos aislados el sustento se halla en la Ley 28736, la que ha sido creada para la protección de estos grupos étnicos.

Como se ha hecho referencia, los pueblos indígenas han sido un grupo marginado y sujeto de graves afectaciones a sus derechos humanos, tanto como individuales (integridad, libertad de expresión, salud, entre otros) como colectivos (territorio, autodeterminación, consulta, identidad cultural, entre otros). De ahí que los reconocimientos formales en cuanto a derechos humanos logrados en el siglo XX también han involucrado reconocimientos a los derechos humanos específicos de los pueblos indígenas.

Estas poblaciones tienen una historia y una cultura que precede al Estado-nación. Así lo revelan Mayor y Bodmer (2009, p. 16):

Todos los pueblos indígenas vivieron siempre en estrecho contacto armonioso con sus territorios. Sus conocimientos básicos nacían en el bosque. Esta era la extensión de su vida, su fundamento. No hay más que revisar su vida productiva y todo lo que les rodea: vivienda, artesanía, vestido, medicina. La educación se daba para el manejo correcto de los recursos del bosque. El arte, la música y la poesía se desprendían del bosque. Los instrumentos musicales reproducían los sonidos del bosque; las letras de sus canciones, el viento, la vida cotidiana y su relación con la naturaleza.

El reporte realizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), en el año 2010, establece que la población de las comunidades nativas asciende a 320 mil habitantes distribuidos en 33 provincias

y 114 distritos de la Amazonía.¹⁹ En la actualidad existen 71 grupos étnicos con 67 lenguas agrupados en 16 familias etnolingüísticas.²⁰

Existe una relación *sui generis* que tienen los pueblos indígenas con su territorio que se ha venido dando históricamente. Al respecto, Gálvez (2007, pp. 1-2) nos dice “que dicha relación no es la misma que posee el resto la sociedad nacional, en razón de que las comunidades nativas ocupan sus territorios desde hace más de 10 mil años”. Por su parte, Mayor y Bodmer (2009, pp. 49-50), también reflexionan al respecto:

Los territorios de estos pueblos son el embrión que dio origen a la existencia de pueblos con culturas e identidad propia. Si no tienen territorio, se consideran pueblos indígenas sin vida y, por tanto, sentenciados a ser exterminados. En la cosmovisión amazónica no cabe el término tierra, sino Territorio, en un concepto amplio de la integralidad como un bien colectivo en interdependencia con la naturaleza. Las montañas y las cataratas donde meditaron sus ancestros son heredados como lugares sagrados y gozan de respeto como fuentes de realización visionaria y fortalecimiento espiritual.

El territorio indígena es comprendido de este modo como la totalidad de hábitat de un pueblo, es decir, abarcando lugares como las aguas y el subsuelo, y desde el punto de vista cultural, abarca el espacio en el cual la cultura de un pueblo se asienta y reproduce (Gálvez, 2007, pp. 1-2).

Las comunidades nativas de la Amazonia entienden el territorio como una relación con el espacio natural de las comunidades, es decir, como un espacio que preserva el origen, la memoria y el pasado del grupo, la realidad y la seguridad actuales del mismo, así como la promesa de la seguridad y la existencia futura. En tal sentido, el territorio para una comunidad nativa es parte esencial de su identidad cultural. Las comunidades nativas del pueblo Kichua de Pastaza (2004) manifiestan:

¹⁹ Para mayor información, ver Instituto Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA, 2010): http://www.indepa.gob.pe/principal/galerias/mapas/mapa_etnolingustico_2010.jpg.

²⁰ Ver mapa etnolingüístico del Perú (anexo B, mapa 1).

Nuestro territorio no es no es una cosa, ni un conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto de recursos...O nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus ríos sus lagunas y humedales, con sus lugares agrados donde viven los dioses (dioses protectores), con sus tierras negras, rojas, arenosas y sus arcillas es un ente vivo que nos da vida, nos provee agua y aire; nos cuida, nos da alimentos y salud; nos da conocimientos y energía; nos da generaciones y una historia, un presente y un futuro; nos da identidad y cultura, nos da autonomía y libertad. Entonces, junto al territorio está la vida y junto a la vida está la dignidad; junto al territorio esta nuestra autodeterminación como pueblos.

En relación a esta concepción, cualquier intervención humana en la naturaleza, sea individual o grupal, como ocupar un lugar para construir una casa, preparar el terreno para la chacra, cazar, pescar, recolectar animales o vegetales, causa desequilibrios en el medio natural. Por eso es fundamental que estas intervenciones cuenten con la aprobación de los seres protectores, es decir, los pueblos indígenas, dueños de los recursos:

De esta percepción, se deriva el sentido que tiene el territorio para las comunidades nativas que se concibe como un espacio geográfico ocupado históricamente por el conjunto de seres humanos, de recursos naturales y de seres o espíritus de la naturaleza. En efecto, esta percepción no solo abarca a los seres huamnos, a los animales, a las plantas y todos los recursos naturales, sino que además incluye a los espíritus (dueños o madres de los recursos) que protegen el medio ambiente (Tipula, 2013, pp. 46).

b. El Estado

El Estado peruano se integra a la Amazonía con una visión de conquista e integración a partir de la extracción de recursos naturales, contando para ello con un marco legal flexible para la apropiación y extracción intensiva del petróleo, gas y minerales. Para tal efecto, el Estado homogeniza bajo una sola cultura e idioma un ordenamiento jurídico único, de carácter obligatorio y coercitivo, sin

considerar que las sociedades existentes en el Perú son diversas, heterogéneas en culturas, costumbres y visiones. En este sentido, el Estado-nación procede a declarar el territorio indígena como un territorio vacío de historia, de significado y de presencia.²¹

El Estado viene promoviendo el desarrollo de actividades para la inversión privada como la extracción de recursos en las zonas andina y amazónica del país. Muchas de las zonas donde se desarrollan esas actividades son habitadas por pueblos indígenas, conocidos en el Perú como comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas aislados, cuya característica general es la pobreza y la exclusión histórica (DAR, 2011, p. 11).

Basta con solo leer los artículos periodísticos del presidente García Pérez, en donde hace referencia a los nativos como “perros del hortelano”, para observar la visión de los gobiernos sobre la Amazonía como sinónimo de recursos naturales explotables, al servicio de empresas transnacionales, en la que no existe población a quienes consultar sobre los actos del Estado. Y como si la selva peruana fuera una zona “vacía”, en los últimos años la presión sobre los pueblos nativos se ha agudizado por la implementación de una política agresiva del Estado de entregar concesiones de hidrocarburos a terceros.

De acuerdo a ese modelo, los mayores ingresos que recauda el Estado se dan durante la etapa de explotación de hidrocarburos. Según el Reporte de Estadística Petrolera ²² del año 2008 de PERUPETRO S.A, se aprecia que con diecinueve contratos de licencia en explotación se logró una inversión de US \$1128.1 millones que incluyen regalías, impuestos, infraestructura, etc. Para el caso de los ingresos totales del 2008 en beneficio del Estado por los contratos de licencia y de servicios (tanto petróleo como gas y sus condensados), los

²¹ Como ha dado cuenta Laura Kropff (2005) en su investigación sobre el surgimiento de la organización de los mapuches autónomos en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubu durante las décadas del 80 y 90 da cuenta a los procesos de emergencia étnica, en contextos representados desde los discursos hegemónicos donde en mayor o menor medida se los ha representado como "sin indígenas".

²² Para mayor información, ver web oficial de PERUPETRO S.A.: www.perupetro.gob.pe.

ingresos ascendieron a US \$1217.34 millones de dólares, lo que significó un total de S/.1573.82 millones de nuevos soles para las regiones por el concepto del canon.²³

El informe no señala que el costo de las actividades extractivas, como el caso del proyecto Camisea, terminan pagándolo los pueblos indígenas, dado que cerca del 75% de los yacimientos de extracción de gas están localizados dentro de la reserva territorial de pueblos que viven en aislamiento que han sido forzados a tener contacto con el Consorcio Camisea, violando sus derechos reconocidos internacionalmente. Lo mismo ocurre con los pueblos Matsigenka y otras comunidades nativas como Camisea, Shivankoreni, Segakiato y Cashiari, quienes tienen asentamientos cercanos a los lotes. Para sobrevivir, estas poblaciones dependen de la agricultura, recolección, caza, pesca y extracción de los productos del bosque, amenazadas por la expansión de las dañinas actividades de hidrocarburos.

El Estado, al promover el desarrollo de las actividades de hidrocarburos sobre la base de la libre competencia lo hace con la finalidad de alcanzar el bienestar de la persona humana y el desarrollo nacional.²⁴ Sin embargo, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, D.S. 042-2005-EM, Texto Único Ordenado de la Ley 26221, traza la estrategia de la actividad económica de los hidrocarburos y entrega la responsabilidad en tres instituciones estatales. La promoción de la actividad, a cargo de PERUPETRO; el otorgamiento de la concesión, a cargo del Ministerio de Energía y Minas; y la fiscalización del cumplimiento de las normas del sector, a cargo inicialmente de OSINERG, convertida después en OSINERGMIN, transferido luego ese rol al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), consecuencia del Decreto Legislativo 1013.

Resulta controversial conceder a una empresa del Estado las labores de fomento y negociación de las actividades de hidrocarburos en todo el territorio nacional (Perupetro), como si fuera un agente o promotor, hecho que no se frecuenta en

²³ Contratos vigentes al 15 de septiembre del 2009.

²⁴ Artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221.

otras actividades económicas como la minería y electricidad, manifestando este sector una incoherencia en sus políticas de promoción de inversiones. Carhuatocto (2014, p. 70) advierte:

A la postre, este sistema de promoción de hidrocarburos ha sido aprovechado por funcionarios corruptos, pues una empresa pública, tiene menores controles como para evitar negociaciones ilícitas y tráfico de influencias, como se pudo apreciar en el 2008, en el tristemente célebre escándalo de los Petroaudios, donde se vieron implicadas seriamente la alta dirección de dos empresas públicas: Petroperu, y Perupetro.

Otro problema preocupante del sector de hidrocarburos son los bajos estándares socioambientales que vienen desarrollando las empresas:

Un asunto que debería resolverse si se implementa el olvidado Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Supremo No 019-2009-MINAM, y de esta manera se dejaría atrás el vetusto, pero vigente, Decreto Supremo No 015-2006-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, que sigue regulando el procedimiento para aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental. Sobre el cual han opinado más de un especialista resaltando sus defectos y no presisamente sus virtudes (Carhuatocto, 2004, p. 70).

Esta situación pone en evidencia que los conflictos socioambientales, para ser resueltos, requieren de un nuevo Estado o de una respuesta diversa del mismo; un Estado en el cual se reconozcan los derechos fundamentales de todos los miembros de la comunidad, en particular de los pueblos indígenas ancestrales. Es posible que las causas más profundas sean la falta de voluntad política y, sobre todo, la demanda de los derechos indígenas que se antepone a los modelos de desarrollo occidental impuestos por el Estado-nación y las corporaciones privadas. Lo que queda pendiente es vencer las inercias dentro de los Estados nacionales que se oponen a la vigencia de ese nuevo orden jurídico y que se resisten a su transformación para dar nacimiento a un nuevo modelo de sociedad y Estado en el marco de democracias pluriétnicas. Es previsible que la acción indígena se exprese con frecuencia y tenga como

propósito la construcción de ese nuevo modelo de Estado y sociedad. El dirigente indígena Miguel Palacin (en Boaventura de Sousa, 2007, p. 11-12), de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), al referirse sobre el Estado-nación señala lo siguiente:

Es un Estado uninacional y monocultural, centralista y excluyente, que no solo desconoce a los pueblos indígenas sino que estuvo siempre en contra de ellos (...) son los Estados plurinacionales, la expresión política del Buen Vivir. Sus organizaciones luchan por Estados que expresen y valoren nuestra diversidad cultural, al igual que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos y colectivos de todos y todas. Dos constituciones en el continente proclaman ya el Estado plurinacional y el Buen Vivir: Bolivia y Ecuador. (...) Pero los pueblos están conscientes de que tienen ahora la oportunidad histórica de construir ese nuevo Estado y ese Buen Vivir.

c. Las empresas

El principal objetivo de las empresas es invertir y conseguir ganancias. En el Perú, esta es la forma en que las empresas, particularmente petroleras, mineras y forestales se han relacionado con el Estado y forman parte de ese modelo económico impuesto, con sus tratados comerciales y concesiones indiscriminadas, sin control a las industrias extractivas y con su secuela de impactos ambientales, económicos y culturales. Las empresas no han internalizado que su actividad genera costos sociales y ambientales, y ante los reclamos de las comunidades responden con estrategias de relaciones públicas (Tipula, 2013, p. 45).

El Estado peruano acaba por otorgar derechos de explotación de recursos en la Amazonía, a diferentes empresas que pueden ser clasificadas como grandes, medianas o pequeñas. Las grandes son mayormente transnacionales con ingentes recursos, tienen mucha influencia económica y política en sus países de origen, en sus embajadas representadas en nuestro país, en los organismos internacionales y en el gobierno del Perú. Las empresas medianas en su mayoría nacionales hacen uso de tecnologías menos sofisticadas, operan a

escalas menores y tienen estándares bajos; además, son más resistentes a los cambios y suelen ser exigentes al Estado al saber que no cuentan con los recursos que tienen las grandes empresas para adaptarse a estas modificaciones. Finalmente, la empresa pequeña se caracteriza por su alto grado de informalidad, por mantener las condiciones de seguridad y salariales más bajas, y su impacto es menor por la escala reducida de sus operaciones.

A lo largo del tiempo, la inversión privada nacional y extranjera en hidrocarburos arribó masivamente a la Amazonía en la década de los 60, lo que trajo serias preocupaciones a las poblaciones indígenas. La Torre (1998, p. 98) refiere:

En esos años que se instalaron los primeros equipos de exploración alarmaron a la población indígena que se vio masivamente invadida debiendo de dejar sus mejores tierras en las que fueron instalados los campamentos petroleros y trasladarse a otras. El éxodo de los pueblos indígenas hacia nuevos territorios se prolongó durante años ante el constante movimiento de los equipos de sísmica y las perforaciones de prueba, con campamentos estables y móviles, almacenes, helipuertos, la apertura de trochas y las detonaciones de explosivos, etc. Al terminar los trabajos de exploración, el desosiego y la frustración se convirtieron en norma de la vida indígena.

Por su parte, el dirigente awajun Saúl Puerta (2009, p. 7), relata:

En la década de los 90 se impulsó un marco legal que brindó condiciones extremadamente favorables a las empresas extractivas como en el sector de hidrocarburos. Desde entonces, el Estado peruano autoriza mediante la aprobación de decretos supremos, la creación de lotes de hidrocarburos y la correspondiente suscripción de contratos de licencia de exploración y explotación superpuestos a Reservas Territoriales para Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, Áreas Naturales Protegidas, tierras-territorios de Comunidades Nativas, Áreas Urbanas y de expansión urbana entre otros derechos pre-existentes constituyéndose en fuente de conflictos socio ambientales.

En estos últimos años, preocupa que el Perú se halla convertido en el país de América Latina que ha dado en concesión la mayor parte de su Amazonía para proyectos petroleros y gasíferos.²⁵ En el estudio elaborado por Save America's Forests y Land is Life (2009), en un análisis a cargo del investigador Matt Finan de la Universidad de Duke, se señala:

El dato resulta sorprendente a primera vista, el 72% de la selva peruana, es decir, 49 millones de hectáreas, está cubierta por lotes hidrocarburíferos. Señala que a pesar de que los parques nacionales están fuera de los límites de las actividades hidrocarburíferas, alrededor de 20 lotes petroleros y gasíferos cubren una variedad de otro tipo de áreas protegidas y, además, 17 lotes cubren reservas territoriales propuestas y creadas para la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.²⁶

El incremento de estas concesiones está relacionado con la proliferación de conflictos de las empresas con las comunidades nativas que se oponen a las actividades extractivas en sus territorios, por considerar que representan una amenaza potencial de contaminación ambiental y que no contemplan los procesos de consulta previa, como acuerda el Convenio 169 de la OIT que protege los derechos indígenas.

El crecimiento de la inversión en la Amazonía no ha parado. Sobre este tema, la ONG DAR (2017, p. 6-7) refiere:

La extensión del territorio amazónico con lotes de hidrocarburos se incrementó entre el 2004 al 2007, del 15% al 75%, muchos superpuestos con áreas protegidas por el Estado, con tierras indígenas tituladas y territorios indígenas ancestrales, incluso con reservas propuestas para pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

²⁵ Para el análisis del territorio amazónico peruano entregado en concesión para la explotación petrolera, véase anexo B, mapa 2.

²⁶ Diario *La República*, 16 de agosto del 2009.

A marzo del 2011, en aumento continuo,²⁷ el 63% de la superficie de la Amazonía peruana estaba cubierto por lotes, donde existe un total de 76 lotes, de los cuales 53 están en contrato, 13 en adjudicación, 3 en convenio y 1 en suscripción, sin dejar de mencionar que aún hay muchas áreas disponibles para ser concesionadas en un futuro (Tipula, 2013, p. 46).

Las inversiones provienen de corporaciones, todas extranjeras, la mayoría son privadas y proceden generalmente de los Estados Unidos, Canadá, países de Europa y ahora de empresas chinas. Perupetro ha emitido un informe sobre las empresas extranjeras del rubro energético establecidas en el país ²⁸, en la que destacan: Pluspetrol, Korea National Oil Corporation, Daewoo Internacional, SK Corporation, Maple Production, Burlington - Conoco Phillips, Repsol, Petrobras, Barret, HuntOil Company, Occidental, Petrolífera, Petrobras, Sapet, Pan Andean, CCP, Hocol, Amerada Hess, Cepsa, Talismán, Discover, entre otras.

Los procesos de licitación de los lotes también han sido sumamente cuestionados por falta de transparencia e indicios de corrupción. Algunos de ellos han sido descubiertos y difundidos a través de los "petroaudios" en diversos medios de comunicación (Gorriti, 2009). Sin embargo, el problema de fondo es que, por un lado, los recursos naturales del subsuelo son propiedad del Estado, esto le da la potestad de entregar a las empresas privadas para su explotación por un periodo de cuarenta años. Y, por otro, dado que las comunidades nativas y los pueblos en aislamiento voluntario tienen derechos de propiedad sobre el suelo, las empresas tendrían que llegar a un acuerdo con ellas para instalarse y realizar actividades en sus tierras. Si no se llegase a un acuerdo, la legislación establece que se puede aplicar el derecho a la servidumbre.²⁹

²⁷ Para dar cuenta del crecimiento de las concesiones entre el 2004 y el 2009, ver anexo B, mapa 3.

²⁸ Para un mayor detalle de todas las compañías de gas y petróleo que operan en territorio amazónico, ver anexo A, cuadro 3.

²⁹ Son los derechos reales sobre las cosas ajenas que limitan las facultades del propietario, como las comunidades nativas, en beneficio de las empresas extractivas, las que proporcionan un pago mínimo por las alteraciones que ocasionen sus actividades en el territorio.

Muchas críticas se han expuesto en contra del Estado y la industria de hidrocarburos por contar con bajos estándares socioambiental que desarrollan las empresas, tema que evidentemente podría resolverse a través de una adecuada fiscalización ambiental, implementación de la consulta previa y estudios de impacto ambiental independientes a fin de evitar impactos ambientales y sociales. En este ámbito se suman otros factores negativos: insuficientes normas referidas a los límites máximos permisibles de contaminación, no se resuelven los pasivos ambientales y se carece de adecuados mecanismos de participación ciudadana. La vigilancia institucional no ha servido de mucho, como lo comentan Vega y Zúñiga (2012, p. 2):

La creación del Ministerio del Ambiente no resuelve estos problemas, pues dicha entidad hasta el momento no tiene competencias en dos puntos centrales: la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y la gestión de recursos hídricos.

Un ejemplo de estos problemas en la extracción energética es el proyecto Camisea donde se han producido numerosos derrames debido a que las tuberías no contaban con los requerimientos técnicos necesarios, a pesar de que tanto el Estado como los consorcios empresariales ofrecieron aplicar tecnología de punta para minimizar el impacto ambiental. Sin embargo, las medidas tomadas fueron escasas.

d. Los conflictos sociales

En la Amazonía dan una serie de confrontaciones sociales y ambientales causadas por la forma en que el Estado entrega a terceros los recursos naturales del subsuelo y del bosque para la explotación de hidrocarburos. Al mismo tiempo, es el propio Estado quien, mediante el régimen de servidumbre, obliga a las comunidades a permitir el ingreso de las actividades extractivas en los territorios que son de su propiedad (Tipula, 2013, p. 52).

En la actualidad, la Amazonía presenta innumerables conflictos sociales constantes que se incrementaron a partir del 2000. En todo caso, queda claro

que el paquete de decretos legislativos en el marco del Tratado de Libre Comercio, sin consulta a las comunidades nativas, como lo señala el Convenio 169 de la OIT, es lo que vulnera los derechos indígenas convirtiéndose en la punta de iceberg produciendo un conjunto de protestas y descontentos que ya se venían desarrollados desde antes. Además, se debe resaltar que muy pocas de las demandas indígenas son asumidas por los partidos políticos, siendo un factor que genera desconfianza a la hora de establecer diálogos. Ello queda demostrado por la falta de conocimiento que tiene el Estado y sus funcionarios sobre el tema y la falta de académicos indígenas es caldo de cultivo de conflictos. Al mismo tiempo, en la actuación de los organismos públicos –salvo excepciones, como algunos gobiernos regionales – los encargados del tema indígena resultan ser generalmente poco productivos.

La dirigencia indígena exigió que el INDEPA³⁰ tuviera rango ministerial, ya que estaba adscrito al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES), para luego ser minimizado en el Instituto Nacional de Cultura (INC), teniendo en cuenta que el Perú es un país multilingüe y pluricultural y que, sin embargo, la estructura jurídico-política vigente del Estado-nación no corresponde a esta realidad, imponiéndose una cultura uniforme y una sola lengua nacional.

Este escenario promovió las confrontaciones sociales, las cuales aún están latentes, pese a las iniciativas de las mesas de diálogo y las comisiones investigadoras que se sucedieron en el Congreso de la República, luego de las paralizaciones indígenas del 2008 y 2009. No ha habido soluciones claras que buscaran y promovieran un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; más aún, desde las políticas de gobierno se invisibiliza a las poblaciones indígenas.

³⁰ El proceso INDEPA deviene de la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas (SETAI), apoyado por el Banco Mundial en el período 1998 -2000. La SETAI fue creada en el año 1998 como un órgano de cuarto nivel dentro del ámbito administrativo del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano- PROMUDEH y su creación duró hasta el año 2001. El 5 de octubre del 2001 se creó la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Su finalidad era liderar un proceso de cambio priorizando estrategias de desarrollo que respeten los valores culturales y eliminen toda forma de discriminación con los pueblos Indígenas y Afroperuanos. (D.S. N° 111-2001-PCM). Esta entidad tuvo una corta duración, pues fue desactivada en 2004, creándose INDEPA.

Es oportuno reiterar, una vez más, que los derechos de los pueblos indígenas están protegidos no solo por la legislación nacional sino también por acuerdos, convenios y declaraciones internacionales aprobados en el marco de las Naciones Unidas. Como se ha indicado antes, los más trascendentes son el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. Sorprende que en ninguno de los discursos presidenciales de los últimos años se haya incluido a las comunidades y pueblos indígenas, aunque sí lo hizo el gobierno de Alejandro Toledo. También se puede observar que en ninguno de los planes de desarrollo elaborados desde el Ejecutivo se tiene en consideración el reconocimiento de sus derechos a una cultura e identidad propia, pese a que estos derechos están reconocidos por la Constitución política de 1993. Al respecto, la congresista Ramos Prudencia, a pocos meses de los sucesos de Bagua, emitió un informe sobre “Conflictos socioambientales en el Perú” (2009), en que señala:

No hay voluntad política para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio, al contrario desde el Estado se promueve la inversión privada en territorios indígenas existiendo superposición de lotes para concesión minera o de hidrocarburos en tierras ancestrales de pueblos indígenas. Desde las organizaciones indígenas se busca el reconocimiento de los derechos indígenas por parte del Estado. Los movimientos indígenas regionales han ido ganando el apoyo de otras organizaciones regionales y reivindican sobre todo el derecho a la tierra-territorio promoviendo el derecho a la consulta a fin de ser tomados en cuenta por el Estado al momento de otorgar las concesiones sobre los recursos naturales que existen en ellos. Y los espacios de diálogo y concertación que ha venido promoviendo el Estado están siendo desconocidos al sentir la población que devienen inoperativos y que no aportan soluciones sino largos tiempos de espera.

En los conflictos amazónicos intervienen los pueblos indígenas y sus organizaciones nacionales, como son AIDSEP y CONAP, las que se encuentran en situación de desventaja política cuando buscan defender sus territorios, derechos humanos y medio ambiente. Por otro lado, las empresas transnacionales, en su objetivo de generar ganancia a costa de explotar la mayor

cantidad de recursos naturales, terminan afectando a las poblaciones y al medio ambiente. Al respecto, Carlos Soria (2002, p. 4) sostiene:

Las corporaciones privadas tienden a negar cualquier responsabilidad de daños ambientales o problemas sociales, e incluso niegan haber impactado sobre los derechos humanos de las poblaciones involucradas (Johnston y Turner, 1998,p. 35); más aun las corporaciones operan con un gran nivel de secreto, pues no están abiertas al escrutinio público y, lo que es peor según, afirman Johnston y Turner (1998,p. 36), “una vez que una autoridad pública ha entregado el dinero al desarrollista, esta, la autoridad pública, pierde mucho de su capacidad de demandar el cumplimiento de cualquier estándar o limitación que pueda haberse impuesto como condición para la entrega del préstamo”.

En años recientes, el incumplimiento del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas es la causa de los más grandes conflictos del siglo XXI, cuyas manifestaciones más evidentes fueron las protestas pacíficas y acciones legales para el cumplimiento de este derecho en el ámbito de las actividades de hidrocarburos en el 2007. Las comunidades nativas ejercieron presión social para que el pleno del Congreso derogue los decretos legislativos 1015 y 1073, en el 2008, por vulnerar el derecho a la consulta previa, lo cual finalmente consiguieron. Significó por primera vez un reconocimiento público de la consulta previa como un derecho fundamental, lo que ha quedado refrendado en el imaginario colectivo con la reciente derogatoria de los decretos legislativos 1064 y 1090, en el 2009, luego del lamentable fallecimiento de treinta y cuatro peruanos y una severa crisis política (Soria, 2002).

Es evidente que si los derechos no están debidamente protegidos no se debe a la falta de legislación, sino a la voluntad política de un Estado que no respeta la Constitución, la que paradójicamente establece en su artículo 1º: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” (Tipula, 2013, p. 55)

Actualmente existen más de doscientos conflictos sociales en el Perú, buena parte de ellos en la Amazonía. Esto es una desdicha para los pueblos en aislamiento voluntario como los Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, así como las

comunidades nativas matsiguengas, quienes con el proyecto Camisea deben enfrentar ambigüedades en la legislación peruana, cambios de gobiernos y derechos sobre áreas del territorio amazónico que se superponen sobre los territorios indígenas. Esto genera, como veremos en el siguiente capítulo, una complicada relación existente entre estos tres actores: las comunidades nativas, las empresas y el Estado.

CAPÍTULO V

CONFLICTOS SOCIALES EN TERRITORIO AMAZÓNICO: EL CASO DE CAMISEA Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

5.1. Ubicación del estudio

El área de estudio está constituido por el territorio donde se desarrollan las actividades extractivas del proyecto Camisea, ubicado a 500 km de Lima, enclavado en el corazón del departamento del Cusco, en el distrito de Echarate de la provincia de La Convención. Geográficamente se encuentra ubicado en el Bajo Urubamba,³¹ en la cordillera de Vilcanota.

El proyecto Camisea se inició en agosto del 2004, luego de 20 años de que fuera descubierto. Es la mayor reserva de gas del país y uno de los “proyectos de desarrollo” más controversiales al encontrarse en una zona rodeada de reservas indígenas y áreas naturales protegidas en que habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial y las comunidades nativas de los matsigena y los yine, pueblos fieles a prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias al interior de sus territorios, con una convicción humana sólida que muchos señalan puede ser una alternativa viable para el mundo (Lema, 2011).

En el caso del lote 88, las dos terceras partes del mismo están superpuestas a la reserva en favor de los grupos étnicos Kugapakori, Nahua, Nantis y otros.³² La mayoría de las actividades sísmicas se realizan dentro de la reserva, lo que genera una situación de riesgo para los pueblos aislados que habitan en su

³¹ La cuenca del Bajo Urubamba comprende una extensión territorial de 15056,41 km², es considerada una unidad espacial periférica con un relativo aislamiento socioeconómico respecto del resto del territorio nacional y cuyo acceso se logra únicamente por vía fluvial y aérea. El rasgo climático que caracteriza la zona es el tipo perhúmedo, propio del bosque tropical, con dos estaciones claramente diferenciadas: estación lluviosa, desde noviembre hasta abril, y la estación seca, entre mayo y octubre. Según datos de la zona de Sepahua, la precipitación anual media supera los 2500 mm; la humedad relativa sobrepasa el 80%, la temperatura media máxima alcanza 26° (enero) y la mínima 23° (junio) (Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, 2003).

³² Ver el área territorial de la reserva en anexo B, mapa 4.

interior. Las compañías no aprueban el contacto de sus trabajadores con estos pueblos, no obstante, es muy probable que a lo largo de los 33 años durante los cuales se implemente el proyecto, dicho contacto tenga lugar, aún contra la voluntad de algunos de estos grupos.

En el caso del lote 56, el 80% del mismo se superpone a siete comunidades nativas del Bajo Urumbamba: Shivankoreni, Segakiato, Camisea, Kirigueta, Nueva Vida, Nuevo Mundo y Puerto Guayana y el asentamiento rural de Colonos Shintorini.³³

5.2. Pueblos indígenas que habitan en la zona de Camisea

a. Los pueblos indígenas en situación de aislamiento Kugapakori, Nahua, Nanti y otros

Los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial son los más perjudicados por los impactos sociales del proyecto Camisea.³⁴ Los constantes ingresos de terceros, sin adoptar precauciones previas o procedimientos adecuados para evitar un contacto, ponen en riesgo la supervivencia física de estos pueblos.

Los pueblos en aislamiento Kugapakori, Nahua, Nanti y otros están asentados en la zona del Urubamba desde hace más de 5 mil años. Son nativos recolectores y cazadores, viven en las cabeceras de los ríos de la cuenca del Bajo Urubamba y a lo largo del río Manú, en la cuenca de Madre de Dios. En el estudio ambiental realizado por Caffrey (2002) da cuenta de la vida que llevaban estos pueblos antes de la penetración de las empresas y las actividades de hidrocarburos. Allí señala:

³³ Para mayor detalle sobre los lotes de hidrocarburos superpuestos a los territorios indígenas y a las áreas protegidas, ver anexo B, mapa 5.

³⁴ Para ver este tipo de poblaciones indígenas que se encuentran en la zona de Camisea, remitirse al anexo A, cuadro 4.

Estos pueblos caminaban por el monte y dormían donde les sorprendía la noche, luego se trasladaban a otro lugar, y así sucesivamente huían de las formas de esclavitud de los foráneos. Aunque viven en aislamiento, la competencia por los recursos naturales los acercó a otros pueblos indígenas.

El pueblo Kugapakori, autodenominado Nantis, constituye un subgrupo matsiguenga del grupo etnolingüístico arawak; desde la época del caucho se encuentran ubicados en el curso medio y alto del río Camisea. Los Yora, conocidos como Nahua, pertenecen a familia pano, llegaron a la zona huyendo de los horrores de la sociedad nacional que los impactó en la época del caucho y se concentraron alrededor de las cabeceras remotas de los ríos. Un gran número de seminómada nantis vive en aislamiento, en grupos familiares pequeños pero numerosos, principalmente a lo largo de los ríos Timpia y Ticumpinía.

El censo realizado por CEDIA (Rivera, 1991) indica que hay 450 nahuas y 950 kugapakori. Por su parte, el diagnóstico hecho por el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado (2003) estima que la población matsiguenga censada es de unos 9494 habitantes. Algunos investigadores estiman que la población total Nanti llega a unas 800 personas. Es decir, los Kugapakori, Nahua, Nanti y los Matsiguenga que habitan en el Alto y Bajo Urubamba tendrían una población aproximada de 12 mil habitantes. Los principales asentamientos matsiguengas se encuentran en el Alto y Bajo Urubamba con un promedio de 300 habitantes por comunidad, siendo más reducidos en asentamientos distribuidos en la cuenca del río Madre de Dios. Si esto es así, la población afectada por el proyecto Camisea llegaría a 15 mil habitantes.

Los contactos con pueblos indígenas en aislamiento voluntario suscitan enorme preocupación debido a trágicas experiencias pasadas que generaron una rápida diseminación de enfermedades infecto-contagiosas. Al carecer de anticuerpos para enfrentar los agentes patógenos, los nativos no cuentan con defensas inmunológicas, por lo que es seguro que al diseminarse las enfermedades, solo logren sobrevivir pocas personas a un cuadro infeccioso adquirido al establecerse

el contacto, como ocurre en la actualidad, aunque los consorcios sostengan que sus trabajadores están impedidos de hacer contacto con los indígenas aislados.

Sobre la categoría “contacto”, Barclay y García Hierro (2014, p. 6) refieren que:

El concepto de “contacto inicial” engloba una gama muy grande de situaciones porque el hecho del contacto puede darse en términos traumáticos de mayor o menor alcance, en particular debido a la vulnerabilidad de estos pueblos ante las epidemias, y puede dar lugar a condiciones subsecuentes muy variables dependiendo de la naturaleza de las relaciones sociales y económicas que se generen y de los agentes de frontera a través de quienes se produce este contacto.

Es justamente la alta vulnerabilidad biológica y cultural de los pueblos en aislamiento lo que justifica “la intangibilidad absoluta de sus territorios, lo que lamentablemente en el Perú posee una intangibilidad relativa, esto es, son intangibles pero no es tan intocable” (Ballón, 2007, p. 63).

b. Las comunidades nativas de los matsiguengas

Los matsiguengas, quienes prefieren autodenominarse matsigenka, pertenecen a la familia etnolingüística arahuaca –o arawak– y habitan en la ceja de selva cusqueña. Como pueblos aislados, este grupo étnico igualmente es afectado por las actividades del proyecto Camisea, en particular por el lote 56 superpuesto en sus territorios.

Son el grupo étnico más numeroso en el Bajo Urubamba, tradicionalmente, ocupan la cuenca del Alto y Bajo Urubamba en casi toda el área amazónica que corresponde al departamento del Cusco. Su forma de vida está vinculada al hábitat del bosque natural y al agua de los ríos que fluyen de las laderas andinas orientales y de la cuenca del río Amazonas. De allí que la degradación o conversión de estos hábitat naturales por las actividades alteran de manera significativa la forma en que obtienen el sustento diario, afectan su salud y su forma de vida. Sobre ellos el diagnóstico social del Bajo Urubamba realizado por

el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado (2003), describe a los matsiguengas:

Grupo étnico originario de la cuenca del Urubamba y que actualmente se halla extendido también por los ríos Manu y Alto Madre de Dios. La población total Machiguenga censada es de unos 9000 habitantes, constituyendo aproximadamente el 4% de la población indígena peruana. Los principales asentamientos Machiguengas se encuentran en el Alto y Bajo Urubamba, con un promedio de 300 habitantes por comunidad, siendo más reducidos los asentamientos distribuidos en la cuenca del río Madre de Dios.

5.3. Antecedentes del conflicto

A inicios de 1980, en plena crisis del sector hidrocarburífero nacional y al déficit de la producción de petróleo, el gobierno de Belaúnde aprobó el contrato de operaciones de la compañía Shell Prospecting and Development en la región del río Camisea. Mediante Decreto Supremo N° 17.81-EM/DGH otorgó derechos de exploración sísmica sobre el lote 88 en territorios habitados por pueblos indígenas en aislamiento voluntario Kugapakoríy Nahua.

La empresa Shell se instala en la cuenca del Urubamba. El contrato de operaciones de exploración contaba con un marco flexible de apropiación y extracción de hidrocarburos, siendo vago lo relacionado con los costos sociales y ambientales sin contar con la presencia del Estado y una legislación que exigiera la elaboración de estudios de impacto ambiental independiente, consulta previa y fiscalización ambiental (Lema, 2011, p. 56).

Al respecto, Goodlan (2003) cuenta que el proyecto Camisea:

...empieza en 1980, cuando la Royal Dutch Shell llega a la zona y realiza acciones de exploración hasta 1988; en este periodo el medio ambiente y la vida de las poblaciones son afectados de manera determinante, porque no era una prioridad el cuidado del medio ambiente.(...) de 1980 a 1988, desde el punto de vista social y ambiental, fue una experiencia de aprendizaje para principiantes

en que se cometieron errores que tuvieron impactos negativos sobre grupos indígenas y el medio ambiente.

Este suceso es recordado como la invasión de las empresas en el territorio indígena de los pueblos aislados, avalado por el Estado que viola los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía, siendo un actor clave del dolor nativo ante la invasión de territorios indígenas por compañías nacionales y multinacionales de petróleo. García Hierro (1997, p. 98) refiere:

El impacto principal que sensibiliza a los indígenas a la entrada de una empresa, es precisamente, la intrusión en pleno corazón de sus territorios ancestrales, de un acontecimiento de gran magnitud con consecuencias imprevisibles pero amenazadoras para todo lo que se estima valioso, sin su autorización. Una invasión de grandes proporciones en la que no se ha contado con ellos. En esa usurpación de la autonomía como pueblos, que plasma la sujeción incondicional del Estado que se revela como dueño del mundo y se lo entrega, sin miramientos, a una empresa extranjera, está la clave del dolor indígena ante la llegada de las petroleras. A partir de ese momento no más dueños de su historia ni controlan por sí mismo su futuro.

La Royal Dutch Shell preparó el contacto con los pueblos indígenas en situación de aislamiento. Al respecto, Zarzar (1991, p. 91) nos dice que:

Un año antes del contacto, la Shell que viene operando en la región desde 1981, mediante el uso de helicópteros obsequia machetes que son arrojados, mientras el jefe Yaminahua de Sepahua perifoneaba desde el helicóptero, táctica que tenía como objetivo impedir mayores incursiones de los Nahuas a los campamentos de explotación en el Alto Mishagua, para agenciarse esas preciadas herramientas.

El choque inicial provocado por la Shell en territorio Nahua, generó conflicto con el pueblo en aislamiento voluntario que se opuso a toda actividad petrolera.

En 1984, siguiendo las huellas de las cuadrillas de trocheros de la Shell, penetraron los bosques y los ríos del pueblo Nahua, produciéndose el tan esperado “contacto forzado” en que cuatro hombres nahuas fueron capturados,

atados y trasladados a Sepahua cerca de la desembocadura de la quebrada Dorado (Lema, 2011, p. 54).

Después se inició una epidemia de infecciones respiratorias (tos convulsiva, resfríos, influenza, tuberculosis y malaria) que produjo la muerte del 60% de los nahuas en situación de aislamiento, a causa del contacto forzoso propiciado por la empresa. El testimonio de Tomás –un hombre nahua recogido por Conrad Feather, de la ONG Shinai Serjali –sobre las epidemias que mataron a la mayor parte de su familia en 1984-85, habla por sí mismo:

Nadie tosía antes. Tuvimos diarrea y fiebre antes, pero no nos daba miedo, sanamos solitos sin remedios. Nadie estaba enfermo en el monte, pero entonces las enfermedades nos han terminado y solo unos pocos quedaron. Ahí están enterrados, regados por todos sitios allá en Manu. Las enfermedades bien fuertes, tos, en nuestro corazón, con estas enfermedades nos ha terminado como la peste en las gallinas (Conrad Feather, 2004).

La muerte de los nahuas no fue reconocida por la Shell Royal Dutch. El Estado se puso de espaldas a los pueblos indígenas evitando sancionar a una de las cuatro empresas más grandes del sector petrolífero con mayor caudal monetario del mundo, de hecho una de las mayores multinacionales del planeta. En esos años no se contaba con un discurso internacional sobre derechos indígenas ni había conciencia sobre los impactos del proyecto; además, el Convenio 169 de la OIT, el principal instrumento de protección de los derechos indígenas, recién se adoptaría en 1989.

Sin embargo, la noticia se difundió por la prensa internacional llegando a escenarios de las Comisiones y Consejos de Derechos Humanos de Organismos Internacionales. Una campaña impulsada por las organizaciones indígenas del Urubamba y la sociedad civil hizo que el Estado reconozca la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (Lema, 2011, p. 57).

Mientras tanto, en 1984, la empresa multinacional descubre el yacimiento de gas de Camisea como resultado de la perforación de cinco pozos exploratorios (Lema, 2011, p. 58).

El suceso Nahua trajo conciencia al Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU). En 1985, las comunidades matsiguengas solicitaron a la empresa la redacción de un convenio que razone la valoración de las tierras y árboles maderables explotados por la empresa. El pedido no fue atendido. Esta negación fue un hito en el proceso de organización de los habitantes del Urubamba y la manifestación de que las organizaciones indígenas empezaban a defender sus derechos frente a la codicia empresarial de la industria energética.

A consecuencia de las muertes nahuas, el Estado estableció a través del Decreto Supremo N° 028-2003-AG³⁵ la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros con la finalidad de proteger la integridad de los diversos pueblos indígenas en situación de aislamiento que habitaban en su interior, al amparo del Decreto Ley N° 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva de 1978, que en su Segunda Disposición Transitoria, concordante con los incisos a) y b) del artículo 10º de la misma ley dispone:

...que para la determinación del territorio de las comunidades nativas cuando se encuentren en situación de contacto inicial y esporádico con los demás integrantes de la comunidad nacional, se determinará un área territorial provisional de acuerdo a sus modos tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales, hasta que se definan su condición de establecimiento.

El Decreto Supremo N° 028-2003-AG establece:

Artículo 1º: Declarar como Reserva del Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori y Nahua la superficie de 443887 hectáreas de tierras ubicadas en los distritos de Echarate y Sepahua, provincias de la Convención y Atalaya, departamento de Cusco y Ucayali, de acuerdo a los linderos y medidas

³⁵ Fue publicado en el diario oficial *El Peruano*, 25 de julio del 2003.

perimétricas que aparecen en el plano y memoria descriptiva que forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2º- La Reserva Territorial se establece con el propósito de preservar el derecho de los grupos nativos Kugapakori y Nahua sobre las tierras que ocuparen de modo tradicional para el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en dicha área.

Artículo 3º- La Reserva Territorial subsistirá hasta que se defina una de las situaciones a que se refieren los incisos a y b del artículo 10 del Decreto Ley 22175

Artículo 4º- Disponer que la Unidad Agraria Departamental XX-Cusco se encargue del cumplimiento de la presente resolución en concordancia con la legislación vigente.

5.4. La privatización de Camisea (1999)

En 1999, el Estado firma un “Memorándum de políticas económicas y financieras del gobierno del Perú 1999-2002” con el Fondo Monetario Internacional, teniendo una relación directa con la suscripción del futuro contrato del proyecto Camisea y la intensificación de la política de exploración y explotación de petróleo y gas natural en el país.³⁶

En mayo de 1999, se apertura un concurso público que otorga las licencias de explotación, transporte y comercialización del gas del lote 88 a consorcios de hidrocarburos, liderados por Pluspetrol y Transportadora de Gas del Perú (TGP).³⁷

³⁶ El proyecto Camisea es la mayor reserva de gas del país, que al ser inaugurado contaba con 13 billones de pies cúbicos de gas natural permitiría abrir –según los funcionarios de Estado– una era de energía más limpia que proveería los requerimientos energéticos del país por 45 años. Las leyes disponían que el abastecimiento del mercado interno estaba garantizado por un horizonte permanente de 20 años, lo que en los hechos impedía su exportación.

³⁷ Los componentes del proyecto Camisea estuvieron a cargo de la empresa Pluspetrol Perú Corporation S.A., conformada por HuntOil (EE.UU.), SK Corporation (Korea) e Hidrocarburos Andinos S.A.C. (Perú). El transporte del gas fue dado en concesión al consorcio liderado por Transportadora de Gas del Perú – TGP, consorcio integrado por Pluspetrol (Argentina), HuntOil (EEUU), SK Corporation (Korea), Sonatrach (Argelia), GyM (Perú) y Tecgas (Argentina, operador principal del proyecto y subsidiaria de Techint.

En esta fase se establece:

- a) La perforación de pozos ubicados en la reserva territorial a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial Nahua, Kugapakori, Nanti y otros, cerca de las comunidades matsiguengas.
- b) La construcción de la planta separadora de gas natural y líquidos, e instalaciones asociadas en la misma zona en la planta Las Malvinas, a orillas del río Urubamba.
- c) La construcción y operación de dos ductos con extensiones de 650 y 700 km aproximadamente (gasoducto y poliducto), que van desde la Amazonía peruana hasta la costa (al sur de Lima), atravesando tierras de pueblos indígenas, ecosistemas altamente sensibles y otros ámbitos de similar importancia.
- d) La construcción de una planta de fraccionamiento en la zona de amortiguamiento de la única área natural protegida marino-costera del país (Reserva Nacional Paracas).

El gobierno del expresidente, Valentín Paniagua firma el contrato de explotación del lote 88 y cuando el proyecto se puso en marcha, el Estado no contaba ni con políticas en materia energética y de hidrocarburos a favor de los pueblos indígenas (Lema, 2011, p. 69).

Los impactos sobre el medio ambiente y las poblaciones, tras los años de exploración y la explotación de hidrocarburos, se impusieron, perturbando el modo de vida indígena, particularmente el de los pueblos que viven en aislamiento. Spelucín y Giraldo (2007, p. 12) refieren que es permanente “la falta de respeto a los derechos de la población nativa, condición esencial para eliminar la discriminación que se constata a través de diversas fuentes de contaminación de su hábitat –contaminación sonora, emisión de gases tóxicos, derrames, etcétera”.

A pesar de la comprobada vulnerabilidad de los pueblos de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros para hacer frente a nuevas enfermedades contra las cuales no habían desarrollado defensas inmunológicas, el Estado

alienta la ejecución de la explotación del proyecto Camisea. Al respecto, Ross (2008, p. 199) revela:

A la población indígena le es difícil adaptarse a este nuevo escenario, especialmente si consideramos que no se han respetado sus derechos a participar en el proceso de negociación mediante el cual se habría, por lo menos, cautelado la protección de su estilo de vida y de los recursos de los cuales depende la población nativa, como lo estipula los acuerdos internacionales. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Perú es signatario, demanda la consulta previa de los pueblos indígenas a ser afectados por el proyecto, y reconoce el derecho de los pueblos en aislamiento a no sufrir contactos forzados con foráneos.

5.5. El proyecto Camisea: concepciones e intereses (2001-2006)

En el año 2001, el proyecto Camisea se convirtió en el proyecto de mayor importancia del Estado que incluyó varios componentes de explotación, transporte y exportación del yacimiento de gas. El propósito emblemático para el desarrollo nacional se deslució al advertirse la situación en que vivían los pueblos en aislamiento, quienes peligraban su integridad en el valle del Urubamba. En defensa de sus derechos, las organizaciones indígenas habían crecido y ejercieron presión junto a organizaciones ambientalistas de la sociedad civil que obligaron al Estado, en más de una oportunidad, a enfrentar la discusión sobre la protección de las poblaciones en aislamiento y la biodiversidad en el área de Camisea.

Con el pasar de los meses, lejos de velar por los derechos indígenas, el Estado asumió la defensa del proyecto Camisea en nombre de las empresas, mientras las organizaciones exigían estándares correctos y desarrollo sostenible como correspondía. Los nativos confundidos se preguntaban sobre el rol del Estado y su relación con ellos. Sobre el particular, Aráoz (2003, pp. 1), refiere que el gobierno respondió de la manera siguiente:

No existe discrepancias entre este megaproyecto, la modernidad y el respeto a las comunidades nativas, aunque muchas instituciones y organizaciones no

gubernamentales no coinciden con esa afirmación, pues aseguran que este megaproyecto romperá todo el equilibrio ecológico de la zona, destruyendo toda la biodiversidad, dentro de un territorio indígena virgen.

En este contexto, dos concepciones quedan confrontadas: las demandas indígenas que son ignoradas por el Estado, las empresas y los medios de comunicación, mientras que los Informes de la ONG Amazon Watch (2001), Caffrey (2002) y la Defensoría del Pueblo (2006) refieren las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones indígenas y las afectaciones del medio ambiente causadas por el proyecto.

El informe de la Defensoría del Pueblo (2006) N° 3, establece:

[En tanto] la explotación, transporte y distribución de gas de grandes dimensiones, como ocurre en el presente caso, genera diversos impactos sobre el ambiente natural y social, así como sobre el patrimonio cultural. Estos impactos afectan tanto a las comunidades nativas que habitan las zonas de la Amazonía, donde se encuentra ubicado el yacimiento de gas y las unidades operativas dedicadas a su extracción, como a las poblaciones asentadas en las zonas de selva, sierra y costa por donde se han instalado las líneas de transporte del gas. Es por ello que los planes de manejo ambiental y las medidas de mitigación pertinentes deberán ser supervisados adecuadamente por el Estado. En tal sentido, una preocupación especial es el caso de los pueblos indígenas en aislamiento y/o en contacto inicial, por su extrema vulnerabilidad frente a los impactos del proyecto.

Ante los estragos sociales y ambientales, los indígenas se sienten incapaces en defender su territorio y el medio ambiente frente al poder articulado del Estado y de las empresas Pluspetrol y TGP. Finalmente, deciden fortalecer sus organizaciones al recibir la solidaridad de las ONG ambientalistas, nacionales e internacionales a fin de parar los excesos de los consorcios. En ese momento, los indígenas del Urubamba comienzan a extraer lecciones de experiencias ocurridas en otros países y, ante la insensibilidad del Estado, deciden demandar los daños del proyecto en sus territorios ancestrales.

El Estado no tiene claridad de la consulta previa establecida en el Convenio 169, que exige a los gobiernos realizar verdaderas consultas a los pueblos indígenas para que tengan el derecho a expresar sus puntos de vista antes de las actividades económicas. El convenio establece que la consulta no es solo informar, plantea alternativas posibles en el sector de hidrocarburos (donde nunca se habían discutido alternativas); de este modo, la consulta permite ser un mecanismo útil para el intercambio de información entre las partes para evitar los conflictos.

a. Los conflictos sociales entre el Estado, los consorcios extranjeros y los pueblos indígenas

La zona del proyecto se convirtió en un espacio incontrolable de problemas sociales y ambientales, en tanto los líderes indígenas deciden enfrentarse al Estado al estimar que, lejos de protegerlos y defender sus derechos, buscan el “desarrollo económico” blindando a las empresas extranjeras. Mientras tanto, la ejecución del proyecto venía propiciando la aparición de enfermedades desconocidas, dañaba sus fuentes tradicionales de recursos alimentarios, propiciaba la biodegradación de la flora y la fauna, así como lesionaba el medio ambiente. En tanto, los nativos al no haber sido informados no tenían conciencia de lo que ocurría en la vasta zona del Urubamba:

La magnitud de los efectos eran desconocidos por los propios indígenas del Urubamba que no sabían qué es lo que venía ocurriendo en el área del proyecto, puesto que la empresa se había negado a entregarles información confiable (Lema, 2011, p. 86).

Los indígenas comprenden que su supervivencia dependía de sus acciones. A fin de asumir sus demandas de respeto a sus derechos a la vida, cultura, salud, y protección de sus fuentes naturales de alimentos y evitar la contaminación de los suelos, las aguas y el entorno natural en el Bajo y Alto Urubamba, se constituyen tres federaciones indígenas: el Consejo Matsiguenga del Río Urubamba (COMARU), afiliado a la organización nacional AIDSEP –la más grande, con treinta comunidades de base en el Bajo Urubamba–; la Central de

Comunidades Nativas Machiguengas (CECONAMA), con ocho comunidades nativas que dio origen a la creación de una organización nacional, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP); y la Federación de Comunidades Nativas Yine Yane (FECONAYY), con veinte comunidades. En la actualidad COMARU como CECONAMA tienen una dinámica actividad en torno a las negociaciones con las empresas que explotan el gas y también con entidades del Estado vinculadas a estas actividades.

En relación a este contexto, Spelucín y Giraldo (2007, p. 52) señalan:

Estas organizaciones fueron las que resistieron la presión del consorcio Shell/Mobil, en negociaciones asimétricas, logrando aglutinar a su alrededor a ONG como CEDIA que trabaja para apoyar a los pueblos indígenas en el zona. Estas organizaciones a través de sus congresos que llevan a cabo de forma anual definen sus propuestas y planteamientos referidos principalmente a aspectos de carácter reivindicativo: defensa legal de sus territorios, defensa del medio ambiente y mejora de servicios.

En el 2002, COMARU convocó al Congreso de las Comunidades del Alto y Bajo Urubamba, evento que tuvo como agenda central la discusión sobre el proyecto Camisea y adopta la resolución de exigir a las empresas el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que había elaborado Pluspetrol y TGP, - en las que no habían tenido participación - puesto que que las empresas se negaban a entregar a los nativos . Aprueban solicitar el documento, dando un plazo mínimo de 90 días para que pudieran efectuar sus observaciones.

Los estudios constaban de varios volúmenes y cientos de páginas y las organizaciones indígenas solo disponían de 15 días –tiempo establecido por el gobierno y las empresas– para efectuar sus observaciones. Este comportamiento del Estado puso de manifiesto que no estaba interesado en promover la participación real y efectiva de las poblaciones indígenas. Al respecto, Servindi (2003) manifiesta: “Hasta la fecha las empresas del gas se niegan a entregar juegos completos del Estudio de Impacto Ambiental a nuestra organización, a pesar de haberlo solicitado hace tiempo. La empresa nos habla bonito, dice que

no va a pasar nada pero no nos entrega los estudios para conocer los impactos que va a generar el proyecto” (Lema. 2011, p. 89).

Por otro lado, las organizaciones, AIDASEP y COMARU convocan en Lima una conferencia de prensa en la que participan diversos dirigentes amazónicos. Los líderes precisaron las demandas de sus pueblos para el caso del proyecto Camisea. El dirigente asháninka-nomatsigenka, Guillermo Ñaco³⁸ de AIDASEP, denunció atropellos generados en las oficinas de Ministerio de Energía y Minas:

El Director General de Hidrocarburos es uno de los funcionarios que viene obstaculizando desde hace años la aprobación del Reglamento de Actividades Hidrocarburíferas en Territorios Indígenas, situación que favorece el atropello de los derechos indígenas en favor de las empresas. El motivo de fondo es que no se quiere respetar el derecho de consulta a los pueblos indígenas, regular de manera apropiada su participación en la elaboración y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y reconocer el derecho a obtener beneficios de los proyectos que se desarrollan en sus territorios.

El Ministerio de Energía y Minas ignoró la solicitud del congreso indígena de negar a la empresa Pluspetrol la licencia ambiental. El 17 de diciembre del 2003, el Estado peruano entrega esa licencia que indignó a las organizaciones indígenas y organizaciones ambientalistas de la sociedad civil.

La falta de transparencia con la que actuó el Estado fue reiterada a lo largo de la ejecución del proyecto Camisea, por lo que cuatro instituciones como Amazon Watch, Oxfam America, CEDIA y AIDASEP decidieron colaborar con COMARU, brindando asistencia técnica con el fin de establecer términos de referencia para realizar un “estudio independiente de impacto ambiental”, en contraparte a lo que habían preparado las empresas en el lote 88. Se buscaba comparar ese estudio con los documentos de los especialistas internacionales.

³⁸ Diario *Ojo*, 8 de noviembre del 2003.

El Informe Caffrey (2002)³⁹ encuentra marcadas diferencias en los EIA elaborados por las empresas, por lo que estableció medidas programadas para atenuar los impactos sociales y ambientales del proyecto Camisea, además de detallar los graves problemas y riesgos si seguía ejecutándose tal como venía haciéndolo.

Algunas de las recomendaciones que establece el Informe Caffrey sobre el proyecto Camisea a continuación se enumeran:

1. El proyecto tendrá impactos irreversibles, sociales y ambientales, a pesar de usar medidas estrictas.
2. Las actividades de exploración, extracción y transportación destruirán el ecosistema natural espantando a la fauna, especialmente durante la exploración sísmica que llevarán a la degradación y conversión de hábitats naturales críticos.
3. En los dos EIA faltan los análisis de impactos inducidos indirectos y medidas de manejo ambiental. El EIA del componente de producción analiza impactos inducidos indirectos, pero, al plan de manejo ambiental, le falta analizar las medidas para prevenir o mitigar impactos inducidos. El EIA de la fase de transportación no reconoce los impactos inducidos indirectos, por lo tanto, no son tratados por el plan de manejo ambiental. Los dos componentes fueron estudiados separadamente, de modo que no se reconocen los impactos de los dos componentes en conjunto.
4. Los pueblos Nanti, Nahua y Kirineri serán afectados en diferentes grados y formas. El proyecto viola repetidamente los derechos individuales y colectivos reconocidos internacionalmente en el Convenio 169 de la OIT. Los límites de la reserva del Estado a favor de las poblaciones indígenas Kugapakori y Nahua no han sido respetados en el lote 88. Tres de las cuatro plataformas y la mayoría de la actividad sísmica tendrá lugar en la reserva. Para respetar los límites de la reserva y los derechos de los pueblos en aislamiento se necesitaría la prohibición del desarrollo de tres

³⁹ Ver anexo A, cuadro 5. Informe Caffrey: Resultados deseados para prevenir y mitigar los negativos impactos sociales y ambientales del proyecto Camisea (2002).

de las plataformas (Cashirairi 1 y 3, San Martín 3) y reducir la exploración sísmica, de tal modo que no se desarrolle dentro de la reserva.

5. Las comunidades matsiguengas están preocupados porque su mayor recurso de subsistencia –los ríos– serán interrumpidos durante la construcción del gasoducto. El EIA de la empresa TGP declara que de cinco a siete ríos, entre Las Malvinas y el Río Apurímac, serán afectados por la construcción del gasoducto temporalmente. El pueblo matsiguenga pide que los ríos no se bloqueen, ya que causará dificultades serias en sus comunidades. Las compañías deberían considerar colocar el gasoducto en estos cinco ríos usando las mismas técnicas de perforación horizontal, como las que usarán en los ríos Urubamba y Apurímac.

Robert Goodland (2003) presentó un informe en el que recomienda que “el Proyecto no debía financiarse si no cumplía con los más altos estándares, si no se creaba un fondo fiduciario para la protección de la biodiversidad y si no se contaba con un plan de evaluación y monitoreo del proyecto”.⁴⁰ Las recomendaciones Caffrey y Goodland colocaron en una posición incómoda a Plusptero y GTP, quienes requerían un financiamiento de US\$1.6 billones para la ejecución del proyecto a través del BID.

Las observaciones y recomendaciones de los informes se hicieron públicas, trayendo consigo presumibles conflictos sociales, mientras las organizaciones indígenas y la sociedad civil se enfrentan a una multiplicidad de problemas no resueltos por el consorcio Pluspetrol y GTP, que el Estado había pasado por alto:

Los indígenas pensaron que el tema del proyecto representaba un conjunto de conflictos muy grande y que cada organización no podía enfrentarlos por su cuenta, por lo que deciden juntarse para resolverlos invitando a AIDESEP para que coordinara el espacio de concertación (Lema, 2011, p. 100).

La problemática de los indígenas aislados que habitan en la reserva territorial se agudiza al tomar conciencia la vulneración de sus derechos reconocidos en el

⁴⁰ El experto Robert Goodland, elaboró el estudio “Camisea Natural Gas Project: Independent Assessment of the Environmental and Social Priorities”, que se publicó en el 2003.

Convenio 169 y al saber que no se había respetado su territorio ancestral en el lote 88, al identificar que tres de las cuatro plataformas y la mayoría de la actividad sísmica se realizaba en la reserva que el mismo Estado había creado para protegerlos.

Además, el artículo 1° de la Constitución política del Perú establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Asimismo, el numeral 19 del artículo 2° de la carta magna obliga al Estado a reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural de la nación. En cumplimiento de dicho mandato, debe ser resguardada la integridad física y cultural de los indígenas en aislamiento voluntario a través del respeto absoluto de la intangibilidad y prohibición de actividades extractivas en la reservas territoriales como las que son habitadas por los Kugapakori, Nahua, Nanti y otros.

AIDSEP informa su decisión de oponerse al proyecto Camisea y define posiciones de las organizaciones indígenas y ONG ambientalistas. Las tentativas de las empresas Pluspetrol y TGP continuaron en pie, esta vez con la estrategia de dividir a las organizaciones indígenas.

La ONG Amazon Watch (2001), en un reporte de viaje que realizó a la zona del proyecto, refiere que los consorcios Pluspetrol y TGP contaban con planes de evaluación comunitaria buscando dividir al pueblo matsigena, para de este modo soslayar los impactos acumulados a largo plazo por Camisea:

La forma en la cual las compañías han llevado a cabo el proceso de consulta y negociación ha sido negociar separadamente con cada comunidad directamente afectada, según lo dispuesto por las compañías. De este modo, las compañías presionan fuertemente a los líderes de las comunidades –comunidad por comunidad– para estar de acuerdo. Esta práctica está desaprobada internacionalmente, ya que no toma en cuenta los derechos colectivos más amplios y los derechos territoriales de los pueblos y crean confrontaciones entre las comunidades. Estos derechos están reconocidos internacionalmente por el Convenio 169 de OIT, del cual el Gobierno peruano es un signatario. Las compañías han tratado de socavar la unión de los pueblos machiguenga y yine

ofreciendo a cada una de las comunidades un conjunto de “compensaciones” que coinciden con los impactos directos del proyecto. Aunque recientemente, los machiguenga expresaron a las compañías que ellos desean discutir los temas colectivamente y no de comunidad en comunidad. Del mismo modo PLUSPETROL ha tratado consistentemente de recusar la jurisdicción de COMARU diciendo que las comunidades que Pluspetrol ve como las más directamente afectadas por la producción del consorcio pertenecen a otra organización, CECONAMA afiliada a la CONAP.

El comportamiento de los consorcios internacionales incitó a discusiones y discrepancias en diversos ámbitos de la sociedad peruana. Las críticas se establecieron a uno de los actores gubernamentales, el BID, quien habiendo sostenido que su participación era contribuir al diálogo constructivo de las partes interesadas del proyecto, su actuación fue parcializada al apoyar a las empresas. Frente a ello, Pluspetrol y TGP no levantaron las observaciones de los expertos que recomendaban que el proyecto no debía ser financiado por el BID, toda vez que no cumplía con los estándares establecidos internacionalmente.

Si bien, Caffrey y Goodland habían colocado en una posición incómoda a las empresas que requerían financiamiento para ejecutar el proyecto a través del BID⁴¹ (Lema, 2011, p. 98) –tras señalar los daños ocasionados a las poblaciones indígenas aisladas y la violación a los derechos en las comunidades nativas–, no impidieron que esta entidad otorgara el crédito de 75 millones de dólares a las empresas y 5 millones para fortalecer entidades del Estado destinadas a supervisar y regular a las empresas privadas, lo que derivó luego en la conformación del Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional (GTCI).⁴²

⁴¹ El BID es solo uno de los establecimientos internacionales que cuenta con 48 países miembros, de los cuales 16 son prestatarios y 22 no prestatarios. Estados Unidos controla el 30% de los votos dentro de la organización.

⁴²El GTCI fue establecido por el gobierno con la finalidad de coordinar y fortalecer los mecanismos de supervisión, vigilancia y fiscalización de los aspectos ambientales y sociales derivados de la ejecución del proyecto. Es responsable de la coordinación de las actividades que desarrollan las entidades públicas orientadas a asegurar una adecuada vigilancia, evaluación y monitoreo de los compromisos asumidos por los consorcios, en el marco de los estudios de impacto ambiental y la normatividad ambiental vigente. Estaban representados por el CONAM, el Ministerio de Energía y Minas, DGAAC y DGH, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, OSINERG, Defensoría del Pueblo, INRENA, INC, INADE, DIGESA, DICAPI, Programa Especial de Titulación (PETT) y, en ese momento, la CONAPA.

Sobre el comportamiento del Estado destinado a regular a las empresas privadas, Griffiths (2007, pp. 23-24) refiere:

En los años 2002-2004, en medio de una fuerte crítica nacional e internacional, el BID otorgó créditos al proyecto Camisea, y continuó con estos préstamos frente a las advertencias de la sociedad civil de que el proyecto podría fomentar actividades de la industria extractiva en áreas protegidas, debilitar la protección de los pueblos indígenas aislados, violar los derechos de las comunidades nativas, dañar hábitat naturales críticos y transgredir normas nacionales e internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible. El BID siguió adelante señalando que su “enfoque proactivo” le “añadiría valor” y promovería el “desarrollo sostenible.

Soria (2009, p. 4) relata que la entidad recientemente creada, CGTI había actuado como una oficina del Ministerio de Energía y Minas, y no como una entidad creada para vigilar y fiscalizar los aspectos ambientales y sociales derivados de la ejecución del proyecto:

El GTCI no ha sido un espacio de debate y reflexión sobre el comportamiento del Estado en la ejecución del proyecto, sino que ha funcionado como una oficina de coordinación del Ministerio de Energía y Minas, para asegurar que el proyecto no fuera entorpecido por múltiples agencias y sectores con competencias en el proyecto.

El contexto de intereses creados alrededor del proyecto Camisea, explota en la reunión anual del BID del 2004, en que los líderes indígenas de AIDSEP y las ONG de derechos humanos de Estados Unidos y el Perú denunciaron ante el vicepresidente del BID, al director del GTCI por ocultar copia de un informe de inspección oficial, no solo al público sino al mismo BID.

Se trataba del Informe de Inspección de la GTCI de setiembre, 2003, el cual describía los daños ambientales producidos en la construcción del gasoducto y urgía a la empresa TGP y a las entidades supervisoras del Estado, en este caso OSINERG, a atender un conjunto de impactos relacionados a los cortes de drenajes naturales, pérdida de especies, contaminación de residuos sólidos y

derrames de diesel en el Derecho de Vía (DDV). El documento no solo advertía que no se había controlado la erosión, también mencionaba problemas de desplomes exhortando a OSINERG a que evaluara para controlar la erosión. Identificó que la entidad supervisora no había hecho nada para corregir estos problemas reconocidos en una visita anterior (Ross, 2008, p. 1999).

El proyecto Camisea representaba una ofensiva a la salud de los pueblos aislados. Si bien las vacunas eran una defensa básica, estas podrían impactar en los nativos acostumbrados a convivir con la naturaleza y en buen estado de salud. El estudio de la doctora Napolitano Stephens (2003), realizado por el Ministerio de Salud del Perú y la Escuela de Londres de Medicina Tropical, publicado por AIDESEP, alertó que la actividad extractiva en la zona amenazaba la salud de los Nantis en la reserva y aumentaba la vulnerabilidad de otros grupos aislados frente a epidemias contra las que tienen muy poca o ninguna resistencia. De hecho, la última epidemia que atacó a los aislados había ocurrido a finales del 2006. El estudio descubrió que la mortalidad y morbilidad había aumentado durante el tiempo en que habían empezado las operaciones sísmicas y de construcción en la zona del proyecto.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, en su informe 103 denominado “El proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas” (2006), denunció que los derechos indígenas de las comunidades ubicadas alrededor del yacimiento de Camisea habían sido afectados por las empresas, señala:

El reporte constituye una crítica severa y contiene acusaciones sobre la actuación del gobierno respecto de la defensa de la vida de los pobladores de la Reserva Territorial Nahua-Kugapakori, en cuyo territorio había irrumpido el consorcio Pluspetrol y TGP. Estas comunidades “son particularmente vulnerables ante las infecciones respiratorias y gastrointestinales”, además “su identidad cultural se encuentra sometida a cambios que menoscaban su autoestima”.

El proyecto Camisea trajo consecuencias desastrosas a los pueblos nativos. La queja más escuchada de los matsiguengas fue la alarmante reducción de los

peces en los ríos, la fuente más importante de proteínas para la población matsiguenga.

Sin embargo, lo absurdo es que, el 5 de agosto del 2004, el gobierno y representantes de Pluspetrol y TGP inauguraron el proyecto Camisea en la planta Las Malvinas, hecho que puso al descubierto la falta de voluntad política para reivindicar los derechos indígenas en el Urubamba.

A los pocos meses de inaugurado Camisea, los derrames del gaseoducto pusieron en alerta a la población: el 22 de diciembre del 2004 aconteció el primer derrame del gasoducto en el Bajo Urubamba, luego continuaron cinco más.⁴³ Estos hechos constataban la falta de transparencia del Estado al contratar empresas inversoras que en otros países se les habría negado ser concesionarios por faltas a los estándares en la extracción de recursos naturales del subsuelo, siendo el Estado peruano incapaz de controlarlos, sancionarlos y obligarlos a ponerse en orden.

Los impactos no pudieron ocultarse, el Estado había ignorado las medidas ambientales de los informes presentados por los nativos, los que fueron dejados de lado. No se puso en práctica la protección prometida a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Griffiths (2007) da cuenta del hecho:

Después de la sexta ruptura, el Gobierno del Perú y el BID finalmente empezaron un trabajo de auditoria en el año 2006, aunque rechazaron pedidos a que los expertos que realizaran la evaluación fueran completamente independientes. Al mismo tiempo, el trabajo en Camisea II siguió avanzando en medio de graves alegaciones que la consulta pública fue defectuosa, que se violaron normas nacionales e internacionales, y que se intimidó a las organizaciones indígenas locales que criticaban el proyecto.

En enero del 2005, COMARU y CECONAMA entregan al Ministro de Energía y Minas una carta expresando su indignación por los daños causados a la cultura,

⁴³ Para dar mayores detalles sobre la historia de los derrames del ducto transportador de TGP, ver anexo A, cuadro 6.

agricultura, salud, flora, fauna y demás recursos naturales amazónicos, asimismo manifestaron su inquietud por no contar con respuestas claras y oportunas sobre los derrames, por lo que las comunidades indígenas – advierten– se opondrían a las actividades de licitación del lote 56 (Lema, 2011, p. 119).

b. Respuesta indígena frente a los daños sociales y ambientales producidos en los “territorios indígenas”

La confrontación social no se hizo esperar y en el año 2005, los pueblos indígenas del Alto y Bajo Urubamba irrumpieron con una primera acción de protesta, la cual constituyó un hito en la lucha indígena de la Amazonía frente a las actividades extractivas. Fue, la primera acción indígena ante atropellos de las empresas, y ante dos concepciones que se confrontan en forma permanente: una empresarial que concibe la tierra como mercancía que se intercambia en el mercado, y la otra indígena, que la concibe como un espacio geográfico ocupado históricamente por el conjunto de seres humanos, recursos naturales y seres o espíritus de la naturaleza que se deben legar a las generaciones venideras (Lema, 2011, p. 125).

Luego del paro del 2005, vendrá el paro amazónico del 2008, para culminar en la acción planificada en toda la selva peruana, en la que participaron las organizaciones indígenas del Urubamba. Tales acciones culminaron el 5 de junio del 2009, con los sucesos de Bagua.

Ya el 5 de diciembre del 2005, los indígenas de Camisea se reunieron en la comunidad de Nuevo Mundo. Allí asistieron bases de las federaciones de las comunidades del Bajo Urubamba, COMARU, CECONAMA y FECONAYY. Luego de analizar la agravada situación por los impactos y derrames ocurridos, acuerdan un levantamiento pacífico, un paro en contra de la empresa Pluspetrol. En un comunicado, manifiestan las razones de tal actitud:

(...) el paro fluvial pacífico en el Bajo Urubamba es como medida de presión para exigir a las autoridades del Estado y de las empresas implicadas que se tomen las medidas oportunas y se atiendan los reclamos actuales. La duración del paro

será hasta el día 12 de diciembre, fecha en la que se establece el diálogo con las autoridades del Estado y las empresas implicadas (Lema, 2011, p. 126).

El paro fue exitoso. La Organización Indígena Atalaya (OIRA), el 30 de noviembre del 2005 manifiesta su solidaridad a través de un pronunciamiento de apoyo a los nativos matsiguengas, luego lo envía al gobierno para su conocimiento. La ONG Amazon Watch informa a través de las redes ambientalistas que el paro había sido de cinco días. Estos hechos establecen la alianza entre las instituciones de la sociedad civil y la solidaridad a las federaciones indígenas exigiendo una auditoría social y ambiental independiente.

Ante estos hechos, el BID contrató una entidad internacional para realizar una auditoría social y ambiental, los nativos refieren que ello era para encubrir la serie de accidentes ocurridos. Los resultados del informe se publicaron en junio del 2007, no plantea objeciones de fondo al proyecto, entre tanto se había iniciado el plan de monitoreo ambiental comunitario (PMAC) con financiamiento de Pluspetrol y TGP (Lema, 2011, p. 124).

Pero no solo ello ocurría, pues, el gobierno modificó leyes y contratos, y redujo la seguridad energética en un lapso de 20 años fijos, del año 2005 al año 2025. Los cambios legales propiciaron la exportación de gas natural, cuando las reservas del país estaban establecidas para preservar y satisfacer la demanda interna durante 20 años, como estaba acordado en el marco legal y el contrato original de Camisea. Además estaba provisto la generación de industria petroquímica que había de poner al Perú a la altura de otros países de la región. De este modo, la soberanía y la seguridad energética del Perú habían sido alteradas sacrificando el mercado nacional, alterando leyes de menor jerarquía, lo que constituía una infracción al ordenamiento constitucional y a los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano.

5.6. Los conflictos sociales y el protagonismo indígena de la Amazonía (2006 - 2008)

El gobierno del expresidente Alan García Pérez puso a disposición de la exploración y explotación de gas y petróleo toda la Amazonía peruana, en espacios vitales de las poblaciones nativas.

Para proceder a la venta de los lotes de hidrocarburos a las empresas privadas extranjeras, se creó el concepto del “perro del hortelano”. En varios artículos publicados en el diario *El Comercio*, García postuló que la propiedad de la tierra de las comunidades nativas y campesinas, en cuyos suelos se encuentran las riquezas naturales, deben ser explotadas por los grandes monopolios y que los indígenas se constituían en un verdadero obstáculo para el desarrollo y el progreso nacional (Lema, 2011, p. 142).

El artículo publicado bajo el título “El síndrome del perro del hortelano” expone la tesis de que hay ciertos sectores sociales en el Perú que, frente a los recursos existentes en el país, asumen una actitud conforme al “perro del hortelano” —que no comen ni dejan comer—, esbozando la alternativa de vender las tierras indígenas para que se extraigan los recursos naturales:

Existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales que tienen 200000 hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de “mano muerta”, mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras (...). Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento. El perro del hortelano (García, 2007).

En el artículo “Receta para acabar con el perro del hortelano” se advierte que se iba aprobar una norma para que, al igual que en la costa, los campesinos de la sierra dejen de ser “ciudadanos de segunda clase y sin iniciativa”. En el artículo “El perro del hortelano contra el pobre”, acusa a los nativos de perjudicar a los pobres al empujar a los extremistas para que protesten contra todo, aunque no

superen las 10 mil personas. Los indígenas son llamados "activistas agresivos y callejeros".

A fines del 2007, se insiste en la explotación del petróleo, gas y minería, pues aparentemente traerían al país un gran beneficio. No dejó de sorprender a la ciudadanía nacional la forma peyorativa con la que se calificó a las poblaciones indígenas, al tildarlas de "perros del hortelano". De esta manera se ridiculizaba la concepción ancestral de estos pueblos en su relación con la naturaleza y con la madre tierra regida por creencias y costumbre tradicionales.

Ese año, sorprendentemente, Perupetro anunció la firma de 22 contratos para la exploración y explotación de nuevos lotes en el Perú, entre los que se encontraban las zonas circundante al proyecto Camisea, donde se ubican los lotes 56, 57 y 58 (Lema, 2011, p. 142).

a. Los decretos legislativos y la infracción de los derechos indígenas suscritos por el Estado peruano

En mayo del 2008, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1015, referido a la aplicación de decretos legislativos y leyes que el gobierno dio en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, "cuyo propósito era reguardar la inversión de las corporaciones en las actividades mineras, petroleras y otras en tierras de las comunidades a través de la compra-venta de la mercancía tierra. De este modo, los consorcios transnacionales quedaban garantizados por el Estado, mientras los derechos de los pueblos indígenas resultaban vulnerados" (Lema, 2011, p. 145).

Los decretos conocidos como la "Ley de la Selva" contravenían el Convenio 169, que en su artículo 13.1 establece la importancia de la relación de los pueblos indígenas con las tierras que ocupan. De este modo, se violenta uno de los derechos más importantes de los indígenas, el derecho a la consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado (Lema, 2008b).

A los 30 días, el gobierno emite nuevamente una serie de decretos legislativos – como son los N° 994, 995, 1060, 1064, 1020, 1081, 1083, 1089 y 1090– que vulneran múltiples derechos de las comunidades indígenas (nativas y campesinas), con el propósito de facilitar la enajenación de sus tierras. Las normas atentan contra el Convenio 169 de la OIT referido a las Comunidades Indígenas y Tribales, que en su artículo 6 establece:

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Es decir, ordena a los Estados firmantes concertar y escuchar las opiniones de los pueblos indígenas que pudieran resultar afectados con alguna ley.

Nelson Manrique (2009) cuestiona los lesivos decretos legislativos que se dieron al margen de la consulta con las comunidades indígenas:

Lo más grave es que estas leyes se han elaborado y aprobado sin consultar con los interesados, lo que ha provocado el reclamo de los gremios campesinos, primero, y luego el anuncio de medidas de lucha y un paro general de todas las organizaciones indígenas de la Amazonía, después de intentar inútilmente durante largos meses ser escuchados.

AIDSEP, a través de su vicepresidente, dijo: “Las medidas del actual gobierno atentan contra la propiedad colectiva y pretende destruir a los pueblos indígenas, que poseen derechos y existen desde mucho antes a la formación del Estado peruano” (SERVINDI, 2008).

El gobierno se negó a dialogar y escuchar las reclamaciones de los nativos, llevando a los indígenas amazónicos a adoptar medidas desesperadas para intentar salvar sus territorios. La plataforma indígena estaba compuesta por 11

puntos, resaltaba la derogatoria inmediata de los decretos legislativos N° 1015 y N° 1073, por ser inconstitucionales; los decretos N° 994, N° 1020, N° 1064, N° 1081 y N° 1090, por atentar contra los territorios indígenas; y el archivamiento definitivo de los cinco proyectos de ley N° 840, 1770, 1900, 1992 y 2133.

Los nativos protestaron por los decretos y por la ley de consulta previa, pues consideraban que no fueron llamados al diálogo, como lo establecen las leyes nacionales y los tratados internacionales. Así, los pueblos indígenas levantaron su voz de protesta, estando constituidos por las siguientes etnias amazónicas: Achuar, Aguaruna, Amahuaca, Ashaninka, Bora, Candoshi, Cashibo-Cacataibo, Cashinahua, Chayahuita, Cocama-Cocamilla, Culina, Ese Eja, Harakmbut, Huambisa, Huitoto, Jebero, Matsiguenga, Ocaina, Quechua del Napo, Quechua Pastaza-Tigre, Secoya, Sharanahua, Shipibo, Shipibo-Conibo, Uranina, Yagua, Yaminahua, Yanesha, Yine; todos ellos organizados en AIDESEP y CONAP.

b. Los conflictos sociales: el levantamiento indígena en toda la Amazonía peruana en defensa de sus derechos y territorios

El 9 de agosto del 2008, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las organizaciones nativas amazónicas lideradas por AIDESEP tomaron el control de las instalaciones petroleras en toda la selva peruana. En estrategia planificada, la COMARU y la CECONAMA se hicieron con el control de las instalaciones del proyecto Camisea en la cuenca del río Urubamba. Estas acciones demostraban el nivel de conciencia indígena alcanzado por las organizaciones del Bajo y Alto Urubamba, como se ha sosteniendo a lo largo de la presente investigación.

La protesta amazónica duró casi un mes, sin embargo, apenas tuvo eco en Lima y los medios de comunicación. En respuesta, el Estado declaró el estado de emergencia en Cusco, Loreto y Amazonas, bajo la amenaza de enviar tropas para desalojar por la fuerza y detener a los manifestantes indígenas. La tensión

se incrementó cuando Alberto Pizango, presidente de AIDSEP, declaró que "los indígenas se defienden contra la agresión del gobierno".⁴⁴

Las organizaciones nativas exigieron la derogatoria de los decretos N° 1015 y 1073 para hacer retroceder al gobierno. El 20 de agosto del 2008, el Congreso del Perú aprobó el pedido de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, derogando dichos decretos legislativos. El gobierno lamentó esta decisión y el presidente García calificó la derogación como un "error histórico".⁴⁵ El dirigente Alberto Pizango declaró que se trataba de "un nuevo amanecer para los pueblos indígenas del país".⁴⁶

En la "IV Cumbre Continental de Pueblos Indígenas" en Puno, el 31 de mayo del 2009, Pizango manifestó la radicalización de las medidas buscando la derogatoria de los decretos legislativos "en defensa de los territorios originarios". Pidió hablar directamente con el presidente del Perú; además anunció que iba a solicitar al Tribunal Constitucional que declare los decretos inconstitucionales, y que de no ser respaldado en esa instancia, presentaría su demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

c. Bagua y el protagonismo indígena en defensa del territorio: la otralectura del Perú

El 5 de junio del 2009 se produjeron los sucesos de Bagua. Los indígenas y organizaciones casi por dos meses ocuparon la Estación 6 del Oleoducto Norperuano, en la provincia de Bagua (Amazonas), bloquearon la carretera Belaúnde Terry, en la provincia de Utcubamba. Exigían la derogatoria de los decretos N° 1064 y 1090 aprobados. Tras la incursión policial ordenada desde el Poder Ejecutivo, murieron 34 peruanos, entre indígenas y policías. Como resultado de la intervención policial, el líder awajún Santiago Manuin recibió ocho disparos en el cuerpo (Lema, 2011, p. 152).

⁴⁴ *Reuters News Online*: Peru may use army to end protests at energy sites, 19 de agosto del 2008.

⁴⁵ Diario *El Comercio*, 20 de agosto del 2008.

⁴⁶ *BBC News Online*: Perú throws out Amazon land laws, 23 de agosto del 2008.

Después del conflicto de Bagua, los líderes amazónicos continuaron promoviendo el diálogo y, ante la presión de la sociedad nacional, el gobierno a través de la Resolución Suprema 117-2009-PCM, creó un Grupo Nacional de Diálogo donde participaron dirigentes de AIDESEP, CONAP y varias instituciones gubernamentales para elaborar una política nacional a favor de los pueblos indígenas, investigar los sucesos de Bagua a través de una Comisión de la Verdad y trabajar la propuesta que establezca el derecho a la consulta previa, libre e informada. En diciembre del mismo año, el Grupo Nacional finalizó su trabajo y las organizaciones indígenas, AIDESEP, CONAP, CONACAMI, CNA, no se mostraron conformes con los acuerdos y recomendaciones, pues en lugar de buscar otros mecanismos de consenso, el gobierno resolvió perseguir y detener a los líderes nativos (Lema, 2001, p 162).

Después de los sucesos de Bagua, los peruanos tienen otra lectura del Perú. Saben que en el país existen otros compatriotas, peruanos, que se autodenominan indígenas, y que tienen otra concepción de la vida y derechos que deben ser respetados como lo establecen las leyes nacionales, los convenios internacionales y los derechos humanos. De este modo, los pueblos amazónicos pusieron el dedo en la llaga sobre la falta de respeto a sus territorios ancestrales, a sus formas de vida y al menosprecio por la naturaleza. La masacre ocurrida en Bagua ha sido uno de los hechos de profundo significado ocurrido en el Perú del siglo XXI, la que acarreó lamentablemente la muerte de ciudadanos peruanos, indígenas y policías.

CONCLUSIONES

1. La institucionalidad del Estado peruano en materia de los asuntos indígenas ha sido débil. En los últimos 35 años esta situación no ha cambiado, todo lo contrario, se ha acentuado. En ese contexto, el país cuenta con un Estado débil y, en consecuencia, incapaz de contar con una legislación sobre la protección de los pueblos y comunidades indígenas, la cual ha fracasado ante la falta de voluntad política de los gobiernos sucesivos a partir del año 2000.
2. En la actualidad un proceso creciente de conflictos sociales entre los pueblos indígenas, el Estado y las empresas extractoras de recursos naturales se agudiza y cobra importancia con los sucesos de Bagua ocurridos en el año 2009, lo que demuestra una forma diferente de percibir el territorio indígena. Más allá del origen histórico y el complejo contexto que se vive en la Amazonía frente a la ola de inversiones privadas, existe una realidad que determina la circunstancia como es el choque de dos visiones y percepciones muy distintas: por un lado, el Estado que defiende la necesidad de las inversiones para el desarrollo del país y que concibe los territorios como bienes de compra y venta, y por otro lado, los pueblos nativos que consideran al territorio como embrión que dio origen a su existencia con culturas e identidad propia. En este sentido, el aumento de los conflictos socioambientales tiene como causa principal la superposición de lotes de hidrocarburos en tierras tituladas indígenas y reservas para indígenas en aislamiento, lo que origina intereses divergentes entre los pueblos indígenas amazónicos, el Estado y las empresas petroleras.
3. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y las comunidades nativas están protegidos no solo por la legislación nacional, sino también por acuerdos, convenios y declaraciones internacionales aprobados en la marco de las Naciones Unidas, sistema del cual el Perú es signatario. Entre los más trascendentess, está el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. Entre los

derechos fundamentales que les asisten destacar el derecho a la propiedad y posesión de tierras, al territorio y al hábitat.

4. El proyecto Camisea (el más grande proyecto energético del Perú) se inicia en agosto del 2004, luego de veinte años de su descubrimiento. Se encuentra ubicado en un área remota e inhabitada del bosque tropical de la Amazonía peruana, siendo uno de los “proyectos de desarrollo” más controversiales al encontrarse en una zona rodeada de reservas indígenas y áreas naturales protegidas, donde habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario y comunidades nativas como los machiguengas y los yine, pueblos ancestrales fieles a prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de sus territorios, con una convicción humana sólida como alternativa viable para el mundo. En el caso del lote 88, las dos terceras partes del mismo están superpuestas a la reserva en favor de los grupos étnicos Kugapakori, Nahua, Nantis y otros y el 80% del lote 56 se superpone a siete comunidades nativas del Bajo Urubamba: Shivankoreni, Segakiato, Camisea, Kirigueti, Nueva Vida, Nuevo Mundo y Puerto Guayana y el asentamiento rural de Colonos Shintorini.
5. La reserva territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, a pesar de ser intangible, soporta una fuerte presión de parte de las empresas petroleras, siendo actualmente amenazada para la ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en San Martín del Este, en el lote 88, donde se realizan actividades de exploración de hidrocarburos que afectan la intangibilidad de la reserva y pone en riesgo la vida, salud, integridad física, cultural y ambiental de las poblaciones aisladas.
6. El proyecto Camisea vulnera la normatividad de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A fin de respetar los límites de la reserva y los derechos de los pueblos en aislamiento, se necesitaría prohibir el desarrollo de tres de las

plataformas (Cashirairi 1 y 3, San Martín 3) y reducir las actividades sísmicas, de modo que no se desarrolle dentro de la reserva.

7. Las organizaciones indígenas se sienten incapaces en defender sus territorios frente al poder articulado del Estado y los consorcios Pluspetrol y TGP. Por ello, deciden fortalecer sus organizanes y reciben solidaridad de las ONG ambientalistas, nacionales e internacionales, a fin de parar los excesos de las empresas. Los líderes indígenas extraen lecciones de experiencias ocurridas en otros países de la región y deciden enfrentarse al Estado y empresas frente a los problemas sociales y ambientales producidos por el proyecto. Estiman que el Estado, lejos de protegerlos y defender sus derechos, apoya a las empresas extranjeras. Los impactos no pudieron ocultarse, las medidas ambientales presentadas por las organizaciones fueron dejados de lado y no se puso en práctica la protección prometida a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
8. Los conflictos lleva al primer levantamiento indígena de la Amazonía que se da en el Bajo Urubamba, en el 2005, como medida de presión para exigirles al Estado y a las empresas atendieran sus reclamos. Estas acciones constituyen un hito en la lucha indígena del Urubamba que busca soluciones claras a los impactos sobre los pueblos indígenas en aislamiento y al ambiente natural y social generados por el proyecto Camisea. Los derrames del gaseoducto producidos pusieron en alerta a la población. En el 2008, el gobierno de García Pérez promulgó el Decreto Legislativo 1015, llamada “Ley de la Selva”, cuyo propósito fue defender la inversión de las corporaciones en actividades mineras y petroleras en tierras de las comunidades a través de la compra-venta de la mercancía tierra. El 28 de junio de ese año, el gobierno emitió una serie de decretos legislativos que vulneraron múltiples derechos indígenas (nativas y campesinas) para facilitar la vulneración del territorio. Los nativos protestaron. El 9 de agosto, con AIDASEP a la cabeza, toman el control de las instalaciones petroleras en toda la selva peruana. El Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y la Central de Comunidades Nativas Machiguengas (CECONAMA) toman las instalaciones del proyecto Camisea en la cuenca del río Urubamba, demuestran el elevado

nivel de conciencia política alcanzado por los indígenas del Urubamba. La lucha de los nativos amazónicos hizo retroceder al gobierno: el 20 de agosto, el Congreso derogó los decretos legislativos 1015 y 1073. Los pueblos indígenas habían levantado su voz de protesta y cuestionado al Estado y a las empresas cuando sus bosques y ríos sufrieron dramáticos cambios por las deforestaciones, cuando las sequías amenazaron aniquilar la vida biológica y humana con consecuencias impredecibles.

9. Luego de los sucesos de Bagua, los peruanos tuvieron otra lectura sobre el país: ahora saben que existen otros peruanos que se autodenominan indígenas, con otra concepción de la vida y derechos que deben ser respetados como lo establecen las leyes nacionales, los convenios internacionales y los derechos humanos. Los pueblos amazónicos pusieron el dedo en la llaga por la falta de respeto a sus territorios ancestrales, a sus formas de vida y al menosprecio por la naturaleza. Los sucesos de Bagua ha sido uno de los hechos de profundo significado ocurridos en el Perú del siglo XXI.
10. En el Perú, poco se ha avanzado en el tema indígena, si lo comparamos con países como Bolivia y Ecuador. Sin embargo, una corriente de estudiantes indígenas se encuentra dando sus primeros pasos en la academia y espacios contiguos, y desde la tensión de los conflictos socioambientales en sus propios territorios saben que su presencia ha de remecer la ortodoxia occidental. En tanto, existe un desinterés de las ciencias sociales en ofrecer una nueva discusión teórica y epistemológica que tenga como fin nuevas estructuras de interpretación y análisis de la realidad peruana, desde ópticas que no tienen nada que ver con la clásica y hegemónica dinámica tradicional.
11. Ante estos hechos surge la noción de multiculturalismo, concepto proveniente de las ciencias sociales que ha sido estudiado desde diversas perspectivas. De forma análoga, también se ha acuñado el concepto de pluralismo, el cual ostenta sus propios principios, e implica que se aceptan las diferencias y no se busca eliminarlas, teniendo como meta la integración. En último lugar

tenemos a la interculturalidad, que es un proceso de superación de desigualdades, no de diferencias, sobre un constante diálogo intercultural.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que el Estado peruano vuelva a iniciar esfuerzos orientados a asegurar los territorios indígenas y se comprometa a superar la debilidad, argucia e incertidumbre de las normas en cuanto se refieran a la seguridad del territorio de las reservas de territorio de los pueblos en aislamiento voluntario. La perspectiva es una necesaria reforma constitucional y la creación de órganos independientes que certifiquen la autonomía en la gestión ambiental, que haga irrealizable que la coyuntura política decida sobre la viabilidad de proyectos de inversión, teniendo en cuenta los intereses de grupos políticos o económicos, y no razones técnicas, de tipo ambiental y social. En este sentido, se induce a examinar el tema de fondo determinado por la crisis del Estado-nación y tener en cuenta que dicha crisis se refleja en la desigual estimación que hace el Estado respecto a sus compromisos para con la industria de hidrocarburos y la que hace respecto a los derechos de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial, así como también con las comunidades nativas. Esta circunstancia solo podría ser superable con un Estado constitucional plural, por lo que es necesario en la actualidad revisar los conceptos tradicionales para que los derechos fundamentales sean reinterpretados a fin de brindar soluciones a nuevos requerimientos de la sociedad peruana.
2. Para una mejor protección de las reservas de los pueblos en aislamiento voluntario se debe promover normas que regulen la prohibición del desplazamiento de las poblaciones indígenas, y la necesidad de obtener su consentimiento para las actividades de extracción de los recursos energéticos de acuerdo a lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta institución prioriza la protección de los derechos colectivos y exige que los pueblos indígenas no deben ser desplazados por fuerza de sus territorios, y que no se procede a ningún traslado sin el consentimiento o acuerdo previo donde se recompense con una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, exista una opción de regreso. Igualmente, el Estado peruano está obligado a cumplir con la

preeminencia de los derechos de los pueblos indígenas sobre los derechos de privatización (exploración o extracción de recursos naturales), exaltando el derecho al consentimiento y a no ser desplazados sin su consentimiento, por ser derechos colectivos que se entrelazan con sus derechos individuales.

3. En el proyecto Camisea, los límites de la reserva territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario Kugapakori, Nahua, Nanti y otros no han sido respetados en el lote 88. En esta reserva se han instalado tres de las cuatro plataformas, además ha tenido lugar la gran mayoría de la actividad sísmica producida por las máquinas, lo que ha obligado a la población nativa a huir de los territorios donde habitaron por más de cinco mil años. El desplazamiento territorial es una grave afectación a los pueblos, dado que implica el abandono del territorio ancestral. Cabe resaltar que este territorio se encuentra protegido constitucionalmente y está respaldado internacionalmente por el Convenio 169 de la OIT y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde se establece el derecho a sus tierras, territorios, recursos naturales y autodeterminación como derechos indispensables para su subsistencia y desarrollo armónico. En este sentido, las normas de concesión al ser inconstitucionales deben ser inaplicadas; con ello se podrá permitir el respeto absoluto de la intangibilidad de las reservas territoriales indígenas, y prohibirse toda actividad extractivas de terceros en estos territorios.
4. Con el fin de superar los diferentes intereses y modos de entender el territorio indígena es primordial que la inversión empresarial, en función del “desarrollo nacional”, se lleve a cabo bajo los principios del cuidado y buen manejo de las reservas de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Por ello, se recomienda impulsar una política de interculturalidad que acceda conocer y entender a los pueblos indígenas, superar la ausencia de diálogo, la falta de información e integrar a todos los sectores, a partir de una visión de respeto a los pueblos indígenas y al medio ambiente. Es decir, se busca un proceso de superación de desigualdades, no de diferencias, sobre un constante diálogo intercultural a fin de respetar los derechos indígenas y evitar los conflictos. El Estado debe de tener una visión holista de la Amazonía que

admita hacer uso de los recursos naturales de forma acertada y que responda a la modernidad y al respeto de los derechos indígenas. Es indispensable, por tanto, contar con una ley de ordenamiento territorial que permita tener una visión de conjunto del territorio para planear de manera ordenada y articulada los diferentes y distintos sectores, así como el uso y ocupación del territorio para que sea económicamente factible, socialmente justo y ambientalmente sostenible.

5. Es indispensable contar con intelectuales indígenas que permitan una nueva discusión teórica y epistemológica, que tengan como meta elaborar nuevas estructuras de interpretación, análisis y relaciones sociales de la realidad peruana, desde ópticas que no tengan nada que ver con la clásica y hegemónica tradición académica a fin de forjar un Estado plurinacional que respondan al conjunto de todos los pueblos de nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

- ABAD GONZÁLES, Luís (2006). *Resistencia india organizada: el caso del Perú*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- ANAYA, James (2003). "Los derechos de los pueblos indígenas". En: GÓMEZ, J. (ed.). *La protección de los derechos humanos en los albores del siglo XXI*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- ____ (1996). *Indigenous Peoples and International Law. Indigenous and Tribal Peoples: A Guide to ILO Convention N° 169*. Montreal, Nueva York, Ginebra: International Centre for Human Rights and Democratic Development, Oxford University Press, OIT.
- ANGLES YANQUI, Gerald Henry (2014). *Naturaleza y alcance constitucional del consentimiento en el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, en los casos de desplazamiento de territorio*. Tesis para optar el grado académico de magister en derecho constitucional. Lima: PUCP.
- AMAZON WATCH (2001). *Reporte de viaje: el proyecto de gas de Camisea y el valle de Bajo Urubamba*. Cusco.
- ARÁOZ, Luis (2003). "Importancia del Gas de Camisea". En: *Revista informativa*. Cusco: Colegio de Economistas del Cusco.
- AROCA MEDINA, Javier (2011). "El dilema de los pueblos indígenas frente a las industrias extractivas". En: *TDA, DAR. Revista Latinoamericana de Derechos y Políticas Ambientales*, año 1, N° 1. Lima: Palestra.
- BALLÓN, Francisco (2007). *¿Y si la derogamos? La textura abierta versus el formalismo. Hacia una reglamentación de la Ley No 28736 Régimen Especial Transectorial de protección a favor de los pueblos en aislamiento voluntario*. Lima: DAR.
- ____ (2002). *Introducción al derecho de los pueblos indígenas*. Lima: Programa de Comunidades Nativas, Defensoría del Pueblo, Visual Service SRL.
- BARCLAY, Federica & GARCÍA HIERRO, Pedro (2014). *La batalla por 'Los Nanti'. Intereses y discursos superpuestos a favor de la extinción de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros*. Lima: IWGIA, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas.
- ____ (1992). "Cambios y perspectivas de la sociedad rural en la selva". En: *Debate Agrario* N°13. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales.

- _____. (1991). "El minifundio en la selva alta". En: *Debate Agrario* N° 11. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales.
- BASADRE, Jorge (1994). *Perú: problema y posibilidad*. Lima: Fundación M:J: Bustamante de la Puente.
- BEBBINGTON, Anthony; SCURRAH, Martin y CHAPARRO, Anahí (2013). *Proyecto industrias extractivas, Conflictos sociales e innovaciones institucionales en la región andino-amazónica*. Documento de Trabajo N° 8. La expansión de las industrias extractivas y los cambios en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales, Clark University, CERDET.
- BENGOA, José (1999). *Historia de un conflicto: el estado y los mapuches en el siglo XX*. Santiago de Chile: Editorial Planeta.
- BERRANDO LÓPEZ, Mikel (2011). "Pueblos indígenas en aislamiento y la protección de sus territorios en las Américas". En: *TDA, DAR. Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales*, año 1, N°1. Lima: Palestra.
- BOURDIEU, Pierre (1998). "La esencia del neoliberalismo". En: *Le Monde diplomatique* (diciembre). París.
- BOAVENTURA DE SOUSA, Santos (2010). *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del sur*. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad.
- _____. (2007). *La reinención del Estado y el Estado plurinacional*. Cochabamba: CEJIS-CEDIB.
- BRYSK, Allison (2001). *From Tribal Village to Global Village. Indian Rights and International Relations in Latin America*. California: Stanford University Press.
- CANALES TAPIA, Pedro (2013). *Intelectualidad indígena en América Latina: Debates de descolonización, 1980-2010*. Santiago de Chile: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT).
- _____. (2014). "Etnointelectualidad: construcción de "sujetos letrados". En: *América Latina, 1980-2010*. Artículo desarrollado en el marco del Proyecto FONDECYT.
- CASTILLO GALARDO, Mayarí (2009). "Pueblos indígenas y derecho consuetudinario: un debate sobre las teorías del multiculturalismo". En: *Nueva Antropología*, vol. 22, N°71. México D.F.

CASTRO, Augusto (2008). *El desafío de las diferencias, reflexiones sobre el Estado moderno en el Perú*. Lima: CEP-IBC.

CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry (2012). “Los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial en el sector de hidrocarburos en el Perú”. Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Lima: UNMSM.

CHIRIF, Alberto (2016). “Kuczynski, ¿mal comienzo o solo un resbalón?”. En: *La Mula* [19 de junio]. Lima.

_____. (2011). *Pueblos indígenas amazónicos e industrias extractivas*. Lima: CAAAP, Comisión Episcopal de Acción Social.

CHIRIF, Alberto y CORNEJO, Manuel (eds.) (2009). *Imaginario e imágenes de la época del caucho: los sucesos del Putumayo*. Lima: CAAAP, IWGIA, UPC, Tarea.

CHIRIF, Alberto y GARCÍA, Pedro (2007). *Marcando territorio: progresos y limitaciones de la titulación de los territorios indígenas en la Amazonía*. Copenhague: IWGIA.

CUEVA MAZA, Neptali (2007). *La vulnerabilidad de los indígenas en aislamiento. Hacia una reglamentación de la Ley N°28736: Régimen Especial transectorial de protección a favor de los pueblos en aislamiento voluntario*. Lima: DAR.

CLOUSDEYI, T. (1998). *La búsqueda de petróleo de la Shell y sus efectos sobre los nativos en la región del Bajo Urubamba en la selva peruana Amazonía Peruana*. Lima.

DANDLER, Jorge (1998). *Pueblos indígenas de la Amazonía peruana y desarrollo sostenible*. Lima: OIT, PNUD, HIVOS.

DÁVALOS, Pablo (2005). “Movimiento indígena en América Latina: el derecho de la palabra”. En: DÁVALOS, Pablo (comp.). *Pueblos indígenas, estados y democracia*. Buenos Aires. CLACSO.

DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (2011). *Diagnóstico sobre el estado actual del desarrollo de la actividad de hidrocarburos de los lotes ubicados en el ámbito de las federaciones: FECONADIP, FECONACURPI, FECONBU, OIDIT y ORDECONADIT de la Organización Regional AIDSEP Ucayali – ORAU* [elaborado por María Rosario Sevillano]. Lima: DAR.

_____. (2007). *Memoria del primer encuentro: respuesta para una política hidrocarburífera coherente con el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana* [evento realizado en Lima, 14 y 15 de junio del 2007].

- _____. (2005). "De paja de páramo sembraremos el mundo". En CHÁVEZ, Daniel; GARAVITO, César y BARRETT, Patrick (eds.). *La nueva izquierda en América Latina*. Colombia: Norma.
- _____. (2001). "Los sueños de la razón producen monstruos. Los pueblos Záparas y la modernidad". En: *América Latina en movimiento*. ALAI, N° 33. Quito.
- DEGREGORI, Carlos Iván (1993). "Identidad étnica, movimientos sociales y participación política en el Perú". En: *Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos*. Lima: IEP, IFEA.
- DE OBLETA Chabaud, José (1993). *El derecho humano de autodeterminación de los pueblos*. Madrid: Tecnos.
- DÍAZ POLANCO, Héctor (2002). *El debate por la autonomía*. México D.F.: Siglo XXI Editores.
- _____. (2005). "Los dilemas del pluralismo". En: *Pueblos indígenas, Estado y democracia*. Buenos Aires: CLACSO.
- DURAND, Anahí (2011). *¿Tierras de nadie? Actividad extractiva, territorio y conflicto social en la Amazonía peruana: el río Cenepa*. Lima: Asociación Servicios Educativos Rurales.
- GAETE URIBE, Lucía (2012). "El Convenio 169. Un análisis de sus categorías problemáticas a la luz de su historia normativa". En: *Lus et Praxis*, año 18, N° 2.
- GÁLVEZ REVOLLAR, Connie (2007). *Problema del territorio en pueblos y comunidades indígenas en el Perú*. Lima. CAAP.
- GARCÍA HIERRO, Pedro (1997). *Actividades petroleras en tierras de los pueblos indígenas amazónicos*. Lima.
- _____. (1995). "Territorios indígenas y la nueva legislación agraria en el Perú". Documento IWGIA 17 -Grupo de Trabajo "Racimos de Ungurahui". Lima: IWGIA.
- GÁRCÍA PÉREZ, Alan (2007). "El síndrome del perro del hortelano". En: *El Comercio* [28 de octubre]. Lima.
- GASCHÉ, Jürg (2001). "Biodiversidad domesticada y manejo hortico-forestal en pueblos indígenas de la Amazonía". En: *III Congreso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais*. Manaus. Embrapa.
- GOODLAND, Robert (2003). Proyecto de gas natural de Camiseta: evaluación independiente de las prioridades sociales y ambientales. Washington:

Fondo Mundial para la Naturaleza, Conservación Internacional, The Nature Conservancy, Instituto Smithsonian.

GORRITI, Gustavo (2009). *Petroaudios. Políticos, espías y periodistas detrás del escándalo*. Lima: Editorial Planeta.

HABERMAS, Jurgen (2000). *The Inclusion of Others*. Cambridge: MIT Press.

HUERTAS, Beatriz (2002). *Los pueblos indígenas en aislamiento: su lucha por la sobrevivencia y la libertad*. Lima: IWGIA.

HUNTINGTON, Samuel (1997). *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*. Barcelona: Paidós.

KROPFF, Laura (2005). "¿Bariloche: una suiza argentina?". En: *Desde la Patagonia: difundiendo saberes* N° 2: Bariloche: Secretaría de extensión universitaria, Universidad Nacional del Comahue

KREIMER, O. (2003). "Informe del relator del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos sobre Derechos Indígenas". En: *Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. Derecho a tierras y territorios*, sesiones del 7 y 8 de noviembre del 2002. Washington: OEA.

IRIGOYEN, Raquel (2009a). "El derecho a la libre determinación del desarrollo, la participación y la consulta previa". En: Aparicio, Marco (ed.). *Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales y al territorio. Conflictos y desafíos en América Latina*. Barcelona: Icaria.

_____ (2009b). "Balance y retos de implementación del derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica" [ponencia]. En: *Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas. A los 20 años del Convenio 169 OIT: Balance y retos*. Lima: Colegio de Abogados de Lima.

_____ (2004). "Pluralismo jurídico, derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos". En: *El otro derecho* N° 30. Bogotá: ILSA.

LANEGRA QUISPE, Iván (2008). *El (ausente) estado ambiental*. Lima: Realidades.

LANDER, Edgardo (2005). "Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntrico". LANDER, Edgardo (comp.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.

LA REPÚBLICA (2009). "El 72% de la Amazonía peruana está cubierta de concesiones de petróleo y gas" [16 de agosto]. Lima.

_____ (2008). "Aprueban decreto que vulnera derechos de los campesinos y pueblos indígenas" [24 de mayo]. Lima.

LA TORRE LÓPEZ, Lily (1998). *¡Solo queremos vivir en paz! Experiencias petroleras en territorios indígenas de la Amazonía peruana*. Copenhague: IWGIA-Racimos de Ungurahui.

LAM, Maivan Clech (2000). "Remembering the country of their birth: indigenous peoples and territoriality". En: *Journal of International Affairs*, vol. 57, N° 2. Washington.

LEMA TUCKER, Linda (2011). *¿Fulgor o penumbra? El proyecto de gas de Camisea y el exterminio de los pueblos indígenas peruanos*. Lima: Grupo Editorial Arteidea.

_____ (2009). "Indígenas amazónicos se ponen de pie y se movilizan pacíficamente por el derecho a la vida y a sus territorios". En: *América Latina en movimiento*. Quito: ALAI.

_____ (2008a). "Perú: indígenas amazónicos se ponen en pie de lucha y se movilizan pacíficamente por el derecho a la vida y a sus territorios". En: *América Latina en movimiento*. Quito: ALAI.

_____ (2008b). "Duro golpe a las comunidades nativas y campesinas en el Perú y la resistencia indígena es anunciada en el Perú". En: *América Latina en movimiento*. Quito: ALAI.

LÓPEZ, Francisco (2006). "Rostros y caminos de los movimientos indígenas en México". En: CANABAL, Beatriz y otros (coord.). *Diversidad rural, estrategias económicas y procesos culturales*. México D.F.: Plaza y Valdés, UNAM.

NAPOLITANO, Stephens (2003). La "salud de los pueblos indígenas y el proyecto Camisea". Informe para AIDSEP, LSHTM/Shinai, Oficina General de Epidemiología. En: *Pueblos en situación de extrema vulnerabilidad: el caso de los Nantide la reserva territorial Kugapakori Nahua. Río Camisea, Cusco*. Lima: Ministerio de Salud.

MANRIQUE, Nelson (2009). "Pueblos indígenas: rezagos de una monarquía". En: *Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú*. Informe anual 2008 - 2009. Lima: Oxfam Internacional.

MONTOYA, Rodrigo (2008). *Voces de la tierra. Reflexiones sobre movimientos políticos indígenas en Bolivia, Ecuador, México y Perú*. Lima: Fondo Editorial UNMSM.

- _____. (1998). "Multiculturalidad y política". En: *Derechos indígenas, ciudadanos y humanos*. Lima: Sur. Casa de Estudios al Socialismo.
- MAYOR APARICIO, Pedro y BODMER, Richard (2009). *Pueblos indígenas de la Amazonía peruana*. Iquitos: Universidad Autónoma de Barcelona, Wildlife Conservation Society.
- OLGUÍN MARTÍNEZ, Gabriela (1998). "Estado nacional y pueblos indígenas. El caso de México". En: *Nueva Sociedad* N°153.
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2003). *Convenio N°169 sobre pueblos indígenas y tribales*. París: OIT.
- ORELLANA, Marcos (2009). "Pueblos indígenas, minería y derecho internacional". En: *Revista Virtual REDESMA*, vol. 3, N° 1. La Paz: Red de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
- ORTEGA VÁQUEZ, Nancy (2014). *El derecho de propiedad comunal indígenas en la Amazonía y su regulación en la legislación peruana*. Tesis para optar el grado magister en Derecho Civil. Lima: PUCP.
- PRIETO SANCHÍS, Luis (1996). (coord.). *Tolerancia y minorías*. Madrid: Colección Humanidades.
- QUIJANO, Aníbal (2008). "El movimiento indígena, la democracia y las cuestiones pendientes en América Latina". En: *POLIS, Revista Latinoamericana*. Santiago de Chile.
- _____. (2007). *América Latina: de la resistencia a la alternativa*. Informe del Foro Social Américas. Lima.
- RACIMOS DE UNGURAHUI (2009). *Solicitud bajo el procedimiento de acción urgente a fin de evitar daño inminente e irreparable a los pueblos Awajum y Wampis que habitan en el distrito fronterizo del Cenepa, provincia de Condorcanqui*. Documento presentado al comité para la eliminación de la discriminación racial de la ONU. Ginebra.
- RACIMOS DE UNGURAHUI y FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DE RÍO CORRIENTES (2008). *Solicitud formal de acción urgente bajo el procedimiento de seguimiento y alerta temprana a fin de enfrentar daño inmediato e irreparable al pueblo indígena achuar que habita en la cuenca de río Corrientes*. Presentado al Comité de Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU. FECONACO.
- RAMOS NUÑEZ, Carlos (2000). *Historia del derecho civil peruano*. Volumen IV. Lima: Fondo Editorial PUCP.

- REGAN, James (2010). "Los awajun y wampis contra el Estado: una reflexión sobre la antropología política". En: *Investigaciones Sociales*, vol. 14.
- RENGIFO, Grimaldo (2002). "Ayllu y cosmovisión andino amazónico". En: *PRATEC*. Lima.
- ROSS, Catherine (2008). "El caso del proyecto Camisea: logros y limitaciones de una coalición ciudadana naciente". En: SCURRAH, Martin (ed.), *Defendiendo derechos y promoviendo cambios: el Estado, las empresas extractivas y las comunidades locales en el Perú*. Lima: Oxfam, Instituto del Bien Común, Instituto de Estudios Peruanos.
- RUIZ, Manuel (2002). *Protección sui generis de los conocimientos indígenas de la Amazonía*. Cooperación Andina de Fomento, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y Parlamento Amazónico. Lima- Perú.
- SALAZAR, Milagros (2009). "La orden era matarnos: entrevista a un dirigente del pueblo awajun presente el 5 de junio en Bagua". En: *Kuumu*, 9-11. Iquitos: FORMABIAP.
- SALMÓN, E., BREGALIO, R., OLIVERA, J., & OCAMPO, D. (2012). *La consulta previa, libre e informada en el Perú*. Lima: Biblioteca Nacional del Perú.
- SANTOS, Fernando y Barclay, Federica (1995). *Órdenes y desórdenes en la selva central: historia y economía de un espacio regional*. Lima: IEP.
- SERVINDI (2015). "El Estado peruano debe de reconocer el gobierno territorial wampis" [30 de noviembre]. Lima.
- _____ (2008). "Perú: indígenas y campesinos se van al paro nacional en rechazo de las medidas del gobierno" [24 de mayo]. Lima.
- _____ (2003). "El proyecto gas de Camisea y la construcción de gasoducto producirán contaminación" [15 de diciembre]. Lima.
- SHINAI SERJALI (2003). *El territorio nahua*. Informe sobre el uso de recursos y territorio del pueblo indígena nahua. Lima..
- SMITHONIAN Institution (2001). *Urubamba: The Biodiversity of a Peruvian Rainforest*. Monitoring and Assessment of Biodiversity Program. SI/MAB.
- CHASE SMITH, Richard (1982). *Las comunidades nativas y el mito del gran vacío amazónico*. Lima. AIDSEP, Cultural Survival, INC.

- SPELUCIN, Juan; GIRALDO, Víctor Hugo (2007). *Minería y salud ambiental en Camisea*. Lima: CIES, Observatorio del Derecho a la Salud, Centro Bartolomé de las Casas.
- SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL (1990). "Análisis histórico de la política legislativa peruana en selva". Documento para Ronco Consulting Corporation. Lima: SPDA.
- SORIA, Carlos (2009). *La explotación de hidrocarburos y minería en el contexto político y legal actual, 1990-2009. Dos décadas de desarrollo petrolero en la Amazonía*. Documento para ser publicado en IBC. Atlas de la Amazonía Nor Este. Lima.
- ____ (2004). *Camisea: "¿Por qué cuesta tanto el gas barato?"*. En: *Íconos* 21. Quito.
- STAVENHAGEN, Rodolfo (2007). *Los pueblos Indígenas y sus derechos*. México D.F.: UNESCO.
- ____ (2005). "La emergencia de los pueblos indígenas como nuevos actores políticos y sociales en América Latina". En: Fabiola Escárzaga y Raquel Gutiérrez (Coord.). *Movimiento indígena América Latina: resistencia y proyecto alternativo*. México: UNAM, UNAP.
- ____ (2001). *Conflictos étnicos y estado nacional: conclusiones de un análisis comparativo*. En: *Estudios Sociológicos*, vol. XIX, Nº 1. México D.F.: COLMEX.
- ____ (1989). "Comunidades en Estados modernos". En *América Indígena* 49/11. México D.F.
- ____ (1988). *Derecho indígena y derechos humanos en América Latina*. México D.F.: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- SURALLÉS, Alexandre (2009). "Entre derecho y realidad: antropología y territorios indígenas amazónicos en un futuro próximo". En: *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, 38 (1).
- SURALLÉS, Alexandre y GARCÍA HIERRO, Pedro (2004). *Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno*. Copenhague: IWGIA.
- TAIPE SÁNCHEZ, Carlos (2005). *Coexistencia conflictiva entre el derecho oficial y los pueblos indígenas en el Perú: comunidad indígena Kechua de*

Talwis-Huancavelica. Tesis para obtener el grado de licenciado en Derecho. Lima: UNMSM.

TIPULA TIPULA, Pedro (2013). *Dilemas territoriales: comunidad nativa, estado y empresas extractivas*. Tesis para optar por el grado de magíster con mención en Geografía. Lima: UNMSM.

TOLEDO LLANCAQUEO, Víctor (2005). "Políticas indígenas y derechos territoriales en América Latina: 1990-2004 ¿Las fronteras indígenas de la globalización?". En: DÁVALOS, Pablo (comp.). *Pueblos indígenas, Estado y democracia*. Buenos Aires: CLACSO.

VEGA DIAZ, Ismael y ZÚNIGA LOSSIO, Mario (2012). *Conflictos y Amazonía. Diagnostico para la mitigación de conflictos sociales y de desarrollo de la Amazonía*. Lima: Catholic Relief Services, CAAP, USAID.

VICARIATO APÓSTOLICO DE PUERTO MALDONADO (2003). *Diagnóstico integral social del Bajo Urubamba*. Lima: Plus Petrol, Perú Corporation S.A.

ZARZAR, Alonso (1987). *Radiografía de un contacto: los Nahua y la sociedad nacional*. En: *Amazonía Peruana* 30, 8 (14). Lima: CAAAP.

WALLERSTEIN, Immanuel (1996) (coord.). *Abrir las ciencias sociales. Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales*. México D.F. Siglo XXI Editores.

RECURSOS VIRTUALES

- ABANTO, Alicia (2011).“La institucionalidad indígena en el Perú”. En *Argumentos. Revista de Análisis y Crítica*. Lima: IEP. Tomado de:<http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/la-institucionalidad-indigena-en-el-peru/>.Revisado el 10 de junio del 2016.
- ARDITO VEGA, Wilfredo (2009).*Situación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el Perú*. Tomado de:
<http://cebem.org/cmsfiles/archivos/derechos-peru.pdf>.Revisado el 12 de diciembre del 2016.
- CAFFREY, Patricia (2002).*Estudio ambiental y social independiente del proyecto de gas Camisea*. Estudio por encargo de Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP). Lima. Tomado de:www.amazonwatch.org. Revisado el 15 de junio del 2016.
- CAMPANARIO BAQUÉ, Yaizay GARCÍA HIERRO, Pedro (2013).*Empresas domiciliadas en países ratificantes del convenio 169-OIT operando en territorios de pueblos indígenas en Perú. El caso de la empresa española Repsol*. Lima: Equidad, CODPI. Tomado de:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>.Revisado el 28 de junio del 2015.
- FERNÁNDEZ BUEY, Francisco (1992).*La controversia entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas*. Barcelona: Universidad de Barcelona.Tomado de:
<http://www.raco.cat/index.php/boletinamericanista/article/viewFile/98598/14619>. Revisado el 20 de mayo del 2016.
- FINER, Matt y otros.*Los proyectos petroleros y gasíferos en la Amazonía occidental: amenazas a la vida silvestre, biodiversidad y pueblos indígenas*. Washington: Save America's Forests. Tomado de:
<http://www.saveamericasforests.org/WesternAmazon/WAmz-PLoSONE-ESPANOL.pdf>
- GRIFFITHS, Tom (2007).*Exigiendo responsabilidad al BID y la CFI en Camisea II.Una revisión de estándares internacionales aplicables, y diligencia y conformidad debidas*. Tomado de: www.amazonwatch.org. Revisado el 5 de noviembre del 2010.
- HUAMÁN RODRIGUEZ, Gloria (2013).*Pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la Amazonía peruana. El derecho inherente al territorio ancestral y la explotación de hidrocarburos*. Lima: CIDH, OEA, IWGIA.Tomado de:
<http://huespedes.cica.es/gimadus/24/04.html>.Revisado el 16 de mayo del 2016.

- LEMA TUCKER, Linda (2010). "Perú: arrasamiento de recursos naturales y exterminio de los pueblos indígenas amazónicos". En: *América Latina en Movimiento*. - ALAI. Quito: Tomado de:
<http://alainet.org/active/39766&lang=es>
- _____(2009). "¿Qué reclaman las etnias amazónicas?". En: *Resonancias*. Paris. Tomado de:
<http://www.resonancias.org/content/read/964/que-reclaman-las-etnias-de-la-amazonia-peruana-por-linda-lema-tucker/>
- MACDONALD, Theodore (2005). *Un enfoque de los derechos indígenas a comienzos del siglo XXI: Normas internacionales, movimientos sociales y reclamos de ciudadanía*. Tomado de:
http://scholar.harvard.edu/tmacdon/files/Macdonald_HumanRights21stCentury_Spanish.pdf.
- PUERTA, Sául (2009). *Hidrocarburos y pueblos indígenas en el Perú*. Asociación Interétnica de la Selva Peruana. Tomado de:
www.aidesep.org.pe.
- RAMOS PRUDENCIA, Gloria (2009). Conflictos socioambientales en el Perú. Lima: Congreso de la República. Tomado de:
[http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/GrupParlamentarios/indigena.nsf/vf08web/213EA5AB1FFC887405257674007F3E28/\\$FILE/Art.PIACongr.GloriaRamos.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/GrupParlamentarios/indigena.nsf/vf08web/213EA5AB1FFC887405257674007F3E28/$FILE/Art.PIACongr.GloriaRamos.pdf). Revisado el 10 de junio del 2016.
- SORIA, Carlos (2002). "Los pueblos indígenas amazónicos peruanos. En busca del desarrollo sostenido". Artículo elaborado en base a la ponencia presentada en el *Coloquio Internacional de Derecho Ambiental* (11 al 13 de septiembre), organizado por la Universidad de Guadalajara. Lima. Foro Ecológico. Tomado de: www.elaw.org/node/2545.
- TORRES MANRIQUE, Jorge Isaac (2013). "El pluralismo jurídico en el Estado peruano". Tomado de:
<http://www.articuloz.com/leyesarticulos/el-pluralismo-juridico-en-el-estado-peruano-395871.html>

ANEXOS

A. Cuadros

Cuadro 1: Población del Bajo Urubamba

Comunidad	Población total	Año	Fuente de Información
Tipakay	139	2003	Puesto de salud Timpía
Timpía	628	2003	Puesto de salud y padrón comunal
Chokoriani	345	2003	Puesto de salud y padrón comunal
Camisea	340	2002	Censos anteriores
Sehakiato	318	2002	Padrón comunal
Kashiari	187	2003	Padrón comunal
Kirigueti	832	2003	Padrón comunal
Puerto Huallana	348	2003	Padrón comunal
Kochiri	172	2003	Padrón comunal
Tangoshiari	258	2003	Padrón comunal
Nueva Luz	654	2002	Puesto de salud
Miaria	668	2002	Puesto de salud y padrón comunal
Sepahua	3 071	2002	Puesto de salud
Puija – Pajuya	552	2002	Puesto de salud
Shebuja	71	2003	Puesto comunal
Bufeo Pozo	532	2002	Puesto de salud y padrón comunal
Santo Domingo	152	2002	Padrón comunal
Mandonadillo	545	2003	Puesto de salud
TOTAL	9 494	2002 – 2003	

Fuente: Diagnóstico Integral Bajo Urubamba(Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, 2003).

Cuadro 2: Glosario de conceptos

Concepto	Contenido
Actividades de hidrocarburos	Las actividades de hidrocarburos son básicamente tres: exploración, explotación y cierre. Las dos primeras se realizan bajo las formas contractuales siguientes: a) Contrato de licencia: celebrado por PERUPETRO S.A. con el contratista y por el cual este obtiene la autorización de explorar y/o explotar hidrocarburos en el área de contrato, en virtud del cual PERUPETRO S.A. traslada el derecho de propiedad de los hidrocarburos extraídos al contratista, quien debe pagar una regalía al Estado; y b) Contrato de servicios: celebrado por PERUPETRO S.A. con el contratista para que este ejerce el derecho de llevar a cabo actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos en el área de contrato, recibiendo el contratista una retribución en función a la producción fiscalizada de hidrocarburos.
Conflictos socioambientales	Se identifican a las controversias referidas a cuestiones relacionadas con las actividades económica extractivas y que afectan la calidad de vida de la población indígena y local que están en el ámbito del proyecto. Estos conflictos involucran a las autoridades encargadas de otorgarlas autorizaciones para la realización de proyectos, además de los pueblos indígenas, organizaciones locales y los dueños de los proyectos (empresas).
Convenio 169 de la OIT	El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes es un instrumento internacional que establece los derechos de los pueblos indígenas y obliga a los Estados firmantes a su cumplimiento, como es el caso del Perú. El Convenio 169 tiene rango constitucional y el Estado peruano está obligado a cumplir todo tratado internacional sin argumentar excusa alguna por su legislación interna, tal como lo establece la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El Estado peruano ratificó el Convenio mediante Resolución Legislativa N° 26253 del 2 de diciembre de 1993 y el depósito legal se realizó en Ginebra (Suiza) el 2 de febrero de 1994.
La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	Fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre del 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ella precisa los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a sus tierras, bienes, territorios y recursos; a su cultura, identidad y lengua; al empleo, la salud y la educación; y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. Enfatiza en el derecho de los pueblos indígenas mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones. Además, prohíbe la discriminación contra los indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener su diversidad y a propender por su propia visión económica y social.

Pueblo originario	Con este término se les conoce a los pueblos indígenas en muchas legislaciones latinoamericanas. Expresa una característica particular de estos grupos sociales como los primeros pueblos en habitar un lugar y tener conciencia o autodeterminación de un pasado y un destino especial.
Pueblo indígena o grupo étnico	Es un grupo etnolingüístico cuyos diversos integrantes comparten una misma identidad. El idioma es un factor principal y dominante para identificar a un grupo étnico, pero existen otros factores que se relacionan con una identidad étnica o la determinan.
Comunidades nativas y campesinas	Así son conocidos los pueblos indígenas en el Perú que mantienen una relación jurídica con el Estado peruano. Este es el régimen legal en el Perú que reconoce la organización social, jurídica y económica de un grupo social que pueda o no reconocerse como pueblos “indígenas” andinos o amazónicos en personas jurídicas <i>sui generis</i> compuesta por pueblos indígenas originarios de los Andes o de la Amazonía peruana.
Pueblos indígenas en aislamiento voluntario	Hoy pueblos aún no contactados, en situación de extrema vulnerabilidad, que requieren de una normatividad específica que determine y cautele sus derechos y mecanismos de representatividad. En la Amazonía muchos de estos pueblos habitan las llamadas tierras de libre disponibilidad o han pasado a la categoría de reservas territoriales –como el territorio donde viven los Kugapakori y los Nahua–, lo que no ha inhibido al Estado para entregar concesiones sobre parte de ellas como en el caso del proyecto Camisea.
Derechos indígenas	El Convenio 169 de la OIT establece un conjunto de derechos indígenas que garantizan la identidad, autonomía y desarrollo de los pueblos indígenas. Entre estos están los siguientes derechos: a) Autoidentificación como pueblo indígena (art. 1, inc. 2); b) goce de derechos humanos de acuerdo a su identidad, sin discriminación ni coerción (arts. 2-4); c) integridad de los valores, prácticas e instituciones de los pueblos (art. 5); d) consulta previa a medidas legislativas y administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas (art. 6); e) participación política a todo nivel, derecho a definir prioridades de su desarrollo y participación en los planes regionales y nacionales (art. 7); f) derecho al control de sus propias instituciones, a su propio derecho (consuetudinario), instituciones, sistema de justicia y métodos de persecución de delitos, respetando derechos humanos (art. 8 y 9); g) derechos ante la justicia ordinaria y procedimientos legales: consideración de la cultura, aplicación de sanciones alternativas al encarcelamiento, defensa legal y protección contra violaciones de derechos y uso de idiomas indígenas mediante intérpretes u otros medios (justicia bilingüe) (art. 10 y 12); h) propiedad y posesión de tierras, territorio y hábitat (arts. 13-19); i) empleo justo y digno, goce de derechos laborales y protección especial (art. 19); formación profesional (20-23); seguridad social y salud (24-25); j) educación para el desarrollo de su identidad cultural propia, educación bilingüe, uso y desarrollo de idiomas propios, y acceso a medios de comunicación (arts. 26-31); k) contactos y cooperación a través de las fronteras (art. 32);
Daño socioambiental	Se puede definir como toda aquella pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al ambiente como tal o en cualquiera de sus componentes (agua, suelo, aire, paisaje, flora, fauna, etc.), así como daños a la

	población, comunidades o individuos que terminan afectando su calidad de vida, salud, plan de vida, usos ancestrales, derechos reales o en sus costumbres y cultura.
Estudio de impacto ambiental	Los estudios de impacto ambiental son una herramienta técnica para precisar el tipo de proyecto a desarrollar y el impacto ambiental que el mismo puede causar. Representa un documento mediante el cual se precisan y acuerdan los compromisos formales que asumen las empresas interesadas en explorar, explotar, transportar y comercializar hidrocarburos con respecto a la protección ambiental, compensaciones y cumplimiento de normas ambientales.
Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA):	Creada por Decreto Supremo 111-2001-PCM, la cual nombraba a representantesde organizaciones indígenas nacionales andinas y amazónicas, delegados de instituciones del Estado y algunos académicos, pero no contaba con competencia de ejecución –al no tener un presupuesto propio–, por lo que su trabajo estaba basado en la colaboración voluntaria. La Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas (SETAI) fue disuelta para crearse la CONAPA.
Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA).	Creado a través de la Ley N° 28495, promulgada el 16 de diciembre del 2005. Adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), es un organismo público descentralizado (OPD), multisectorial, con rangoministerial, personería jurídica de derecho público, autonomía funcional, técnica, económica, financiera, administrativa y presupuestal.
Ley General del Ambiente	Creada por Ley N° 28611 del año 2005, nombra explícitamente a los pueblos indígenas y prevé en su artículo 70 la consideración de derechos indígenas en el proceso de reordenamiento territorial, según criterios ambientales, para mostrar que se cumple con las exigencias del Convenio 169 y que solicitan también algunos organismos financieros multilaterales.
Principio de alta vulnerabilidad	Según el cual todo “contacto” significa, para los Indígenas en aislamiento voluntario, un riesgo muy alto de enfermar y morir debido a que no han desarrollado una respuesta inmunológica adecuada para gérmenes comunes, por lo que de suceder el contacto, este constituye una “emergencia” y debemos estar preparados para afrontarla y mitigar sus efectos negativos en la vida y la salud de estos pueblos indígenas. Este principio fue aprobado formalmente por el Estado, pero incumplido materialmente por el mismo, como se observa en el caso de las actividades de hidrocarburos.
Titulares del derecho del Convenio 169 de la OIT	El Convenio 169 se aplica a pueblos indígenas que descienden de poblaciones que existendesde antesde la época de la Conquista o la colonización, y de la demarcación de las fronteras nacionales actuales (criterio objetivo); asimismo, son aquellos pueblos que se autoidentifican como indígenas (criterio subjetivo), al margen de la denominación o estatuto jurídico que dichos colectivos tengan dentro del Estado. En el caso peruano, considerando el Convenio 169 de la OIT y las normas nacionales, cabe aplicar los derechos que contiene el convenio a los siguientes colectivos: pueblos indígenas, así autoidentificados, pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, comunidades

	campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, pueblo afroperuano y otros colectivos, sin importar qué denominación o estatuto legal tengan, solo que se autoidentifiquen como indígenas o tribales
Reserva territorial indígena	Son espacios destinados por el Estado a pueblos indígenas en aislamiento voluntario para efectos de asegurar la intangibilidad de sus territorios y garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Paquete de normas emitidas como parte de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso para implementar el TLC	El paquete de normas se dio para la implementación del TLC con los Estados Unidos. Consta de 102 decretos y un buen número de enmiendas. En marzo del 2008 se dieron los primeros 5 decretos legislativos, comenzando por el 994, para promover la inversión privada en proyectos de irrigación agrícola. En mayo se publicaron 17 decretos (del 1000 al 1016) y en junio un total de 22 (del 1017 al 1038).

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3: Compañías de petróleo y gas que operan en el Perú

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aguaytía ▪ Anden Oil and Gas ▪ BPZ ▪ Burlington ▪ CEPSA ▪ Compañía Consultora de Petróleo ▪ Daewoo International Corporation ▪ East Cameron Partners del Perú ▪ Ecopetrol ▪ Endeveco Eureka del Perú ▪ Emerald Energy ▪ Faulkner Exploration ▪ GMP ▪ Golden Oil Corporation ▪ Gran Tierra Energy ▪ Gold Oil ▪ Grupo Petróleo sudamericano ▪ Harken 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hess Perú ▪ Hunt Oil ▪ Interoil ▪ Kedcom Co., Ltd. ▪ Korea National Oil Corporation ▪ Loon Peru Limited ▪ Maple ▪ Maurel Et Prom ▪ Olympic ▪ Pacific Stratus ▪ Pand Andean ▪ Pererco ▪ Petrobras ▪ Petrolera Monterrico ▪ Petrolífera Petroleum ▪ Petrominerales Perú ▪ Petroperú ▪ Petrovietnam ▪ Plectrum Petroleum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulspectro ▪ PVEP Perú ▪ Ramshorn International ▪ Reliance ▪ Repsol ▪ Savia Perú ▪ Siboil ▪ Sapet ▪ Shona Energy International ▪ Sk Energy ▪ Sonatrach Peru Corporation ▪ Tálisman ▪ Tecpetrol ▪ Unipetro ▪ Upland Oil&Gas ▪ Veraz Petroleum ▪ Vetra Perú ▪ Vietnam American Exploration
---	---	---

Fuente: Perupetro.

Cuadro 4: Poblaciones indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial en la zona del proyecto Camisea

Río	Pueblo	Situación
Serjali: Confluencia Serjali con Mishagua	Nahua o Yora	Población agrupada en la comunidad de Santa Rosa de Serjali. Están en contacto inicial debido a encuentros forzados que tuvieron hace 30 años con la empresa extractora de gas que trajo como consecuencia la muerte del 50% de su población.
Serjali: Alto Serjali	Matsiguenga	Existe presencia frecuente de pequeños grupos familiares en aislamiento.
Timpía: Alto Timpía	Nanti Kugapakori Kirineri	Cuatro asentamientos pequeños con contacto esporádico con los Nanti del Camisea. No quieren contacto inicial con foráneos.
Timpía: Bajo Timpía	Nanti	Cinco asentamientos en situación de aislamiento.
Camisea: Alto Camisea	Nanti	Población en contacto inicial agrupada en las comunidades nativas Montetoni y Marankiato (Malanksiári). Tienen contacto limitado con las comunidades nativas Matsiguengas y Yine del río Urubamba.
Camisea: Medio Camisea	Matsiguenga	Pequeños grupos familiares, tienen contacto esporádico con miembros de la comunidad nativa Segakiato.
Paquiria: Alto Paquiria	Matsiguenga	Tres asentamientos que solo tienen esporádicos contacto con extractores ilegales.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 5: Informe Caffrey. Resultados deseados para prevenir y mitigar los negativos impactos sociales y ambientales del proyecto Camisea

<p>Reporte: “Estudio ambiental y social independiente del proyecto de gas de Camisea”, realizado por encargo de las organizaciones indígenas del Perú: Consejo Machiguenga del río Urubamba (COMARU) y la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDSEP)</p>
<p>Patricia B. Caffrey, responsable del estudio, 1 de abril del 2002</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El proyecto tendrá impactos irreversibles sociales y ambientales, a pesar de usar medidas estrictas. Preocupación, aunque el consorcio planifique medidas estrictas, las compañías Pluspetrol y TGP no se adherirán ni cumplirán con los planes y objetivos. No existen incentivos financieros o imposiciones que asegurasen cumplir con ellos, durante la duración del proyecto. La capacidad del gobierno peruano de imponer el cumplimiento es débil. Ninguna de las compañías involucradas en el consorcio tiene una historia de prácticas sociales y ambientales óptimas. ▪ Ninguno de los componentes del proyecto cumple con estándares del Banco Mundial, Las actividades de exploración, extracción y transportación destruirán el ecosistema natural espantando a la fauna, especialmente durante la exploración sísmica que llevarán a la degradación y conversión de hábitats naturales críticos. Un análisis especial sobre impactos que afectan a grupos indígenas – particularmente grupos indígenas que viven en aislamiento voluntario– es deficiente. No hay planes para prevenir y mitigar impactos negativos sobre estos grupos. Las dos compañías violan el Convenio 169 de la OIT. Las empresas no entregaron a los afectados locales la información adecuada ni el tiempo necesario para estudiar y responder al estudio de impactos ambientales. Las prácticas de negociaciones actuales sobre compensaciones económicas por el uso de tierras indígenas no permiten una decisión libre e informada de parte de los grupos indígenas. Ellos no han sido involucrados en la toma de decisiones sobre asuntos que les afectaran. ▪ En los dos EIAs faltan los análisis de impactos inducidos indirectos y medidas de manejo ambiental correspondientes para mitigar dichos impactos. El EIA del componente de producción sí analiza impactos inducidos indirectos, sin embargo, al plan de manejo ambiental le falta analizar las medidas para prevenir o mitigar impactos inducidos. El EIA del componente de transportación no reconoce los impactos inducidos indirectos, por lo tanto, no son tratados por el plan de manejo ambiental. Los dos componentes fueron estudiados separadamente, de modo que no se reconocen los impactos de los dos componentes en conjunto. Las comunidades locales, grupos en defensa de derechos humanos y conservación están preocupados por problemas que serán causados por impactos indirectos, como el mejoramiento de acceso que aumentará la colonización, la disminución de la cobertura forestal, la degradación ambiental, riesgos de salud, la pérdida de integridad cultural y conflicto social. ▪ Los pueblos Nanti, Nahua, Kirineri serán afectados en diferentes grados y formas. El proyecto viola repetidamente los derechos individuales y colectivos reconocidos

internacionalmente a favor de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. Los límites de la reserva del Estado a favor de las poblaciones indígenas Kugapakori y Nahua no han sido respetados en el lote 88. Tres de las cuatro plataformas y la mayoría de la actividad sísmica tendrá lugar en la reserva. Para respetar los límites de la reserva y los derechos de los pueblos en aislamiento, se necesitaría la prohibición del desarrollo de tres de las plataformas (Cashiri 1 y 3, San Martín 3) y reducir la exploración sísmica de tal modo que no se desarrolle dentro de la reserva.

- Las comunidades Machiguenga están preocupadas de que su mayor recurso de subsistencia –los ríos– será interrumpido durante la construcción del gaseoducto. Durante la estación seca muchas de las comunidades indígenas se reubican temporalmente en las playas y riberas. El EIA de TGP declara que de cinco a siete ríos, entre Las Malvinas y el río Apurímac, serán afectados por la construcción del gaseoducto temporalmente. El gaseoducto será construido con recursos tradicionales. Los ríos estarán bloqueados temporalmente por represas para que el gaseoducto sea enterrado debajo del río. El pueblo Machiguenga pide que los ríos no se bloqueen, ni temporalmente, ya que causará dificultades serias en sus comunidades, particularmente en la estación seca. Las compañías deberán considerar colocar el gaseoducto en estos cinco ríos usando las mismas técnicas de perforación horizontal como las que usarán en los ríos Urubamba y Apurímac.

Fuente: Elaboración propia en base al reporte: “Estudio Ambiental y Social Independiente del Proyecto de Gas de Camisea” (2002). <http://www.amazonwatch.org/>

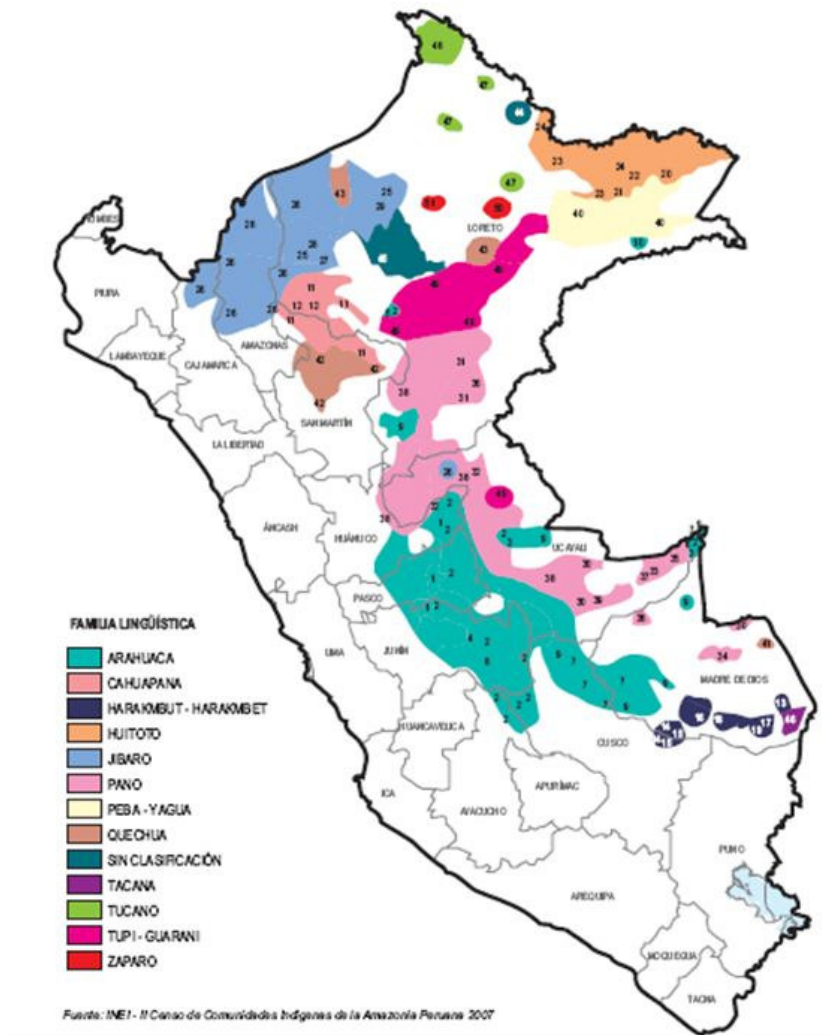
**Cuadro 6: Historia de los derrames del ducto de
Transportadora de Gas Perú - TGP (2004 - 2007)**

Fecha	Incidente	Localización	Consecuencia
22/12/04	Rotura del ducto. Derrame de líquido de gas. Causante: LGN	Progresiva 8+800, margen derecha del río Urubamba. Asentamiento rural Túpac Amaru-Quebrada Kemariato	- El volumen de hidrocarburo derramado fue 115 m ³ - El volumen estimado de tierra contaminada con hidrocarburos fue 300 m ³ .
29/08/05	Rotura del ducto y fuga de líquido de gas. Causante: LGN	Altura del KP 220+500, estación de bombeo ubicada en Pancobamba, departamento de Apurímac	Presencia de cuatro manchas de LGN a dos metros del Derecho de Vía, lo que provocó la suspensión del bombeo de líquidos de gas natural
16/09/05	Rotura del ducto de LGN- Derrame. Causante: LGN	Kp 200+700, localidad de Toccate - distrito de Anco, departamento de Ayacucho	Volumen de hidrocarburos líquidos es aproximadamente 4 000 barriles, 37% se evaporó y del saldo remanente una parte es retenido por el suelo estimándose que llegó al río Alfarpampa y/o Chunchubamba, aproximadamente 1 000 barriles de líquidos livianos
24/11/05	Rotura del ducto. Causante: LGN	Entre las progresivas 50 y 52 del Derecho de Vía, en la zona denominada cordillera de Vilcabamba, cuenca del río Parotori y Picha	Según los estimados de Osinerg se dio entre 4 500 y 6 000 barriles. Es decir, casi igual que el mayor derrame de la historia
4/03/06	Rotura del ducto. Causante: LGN	En el PK-125.95, en la zona Manaturishiato Kepashiato	Según los estimados, fueron 4 700 barriles de líquidos de gas natural
6/02/07	Rotura LGN Fuga de gas	En zona progresiva Kp 125.487 Kepashiato - Cusco	La Comisión de la Región Técnica del Cusco verificó que a la altura del kilómetro 125 se produjo un nuevo derrame de líquidos de gas hace unas semanas

Fuente: Resumen ejecutivo de la intervención de la DIGESA. Proyecto Camisea (Lima, 19-03-06). Actualizado sobre la base de los informes de OSINERG y COMARU (2004-2007).

B. Mapas

Mapa 1. Familia lingüística en la Amazonía del Perú



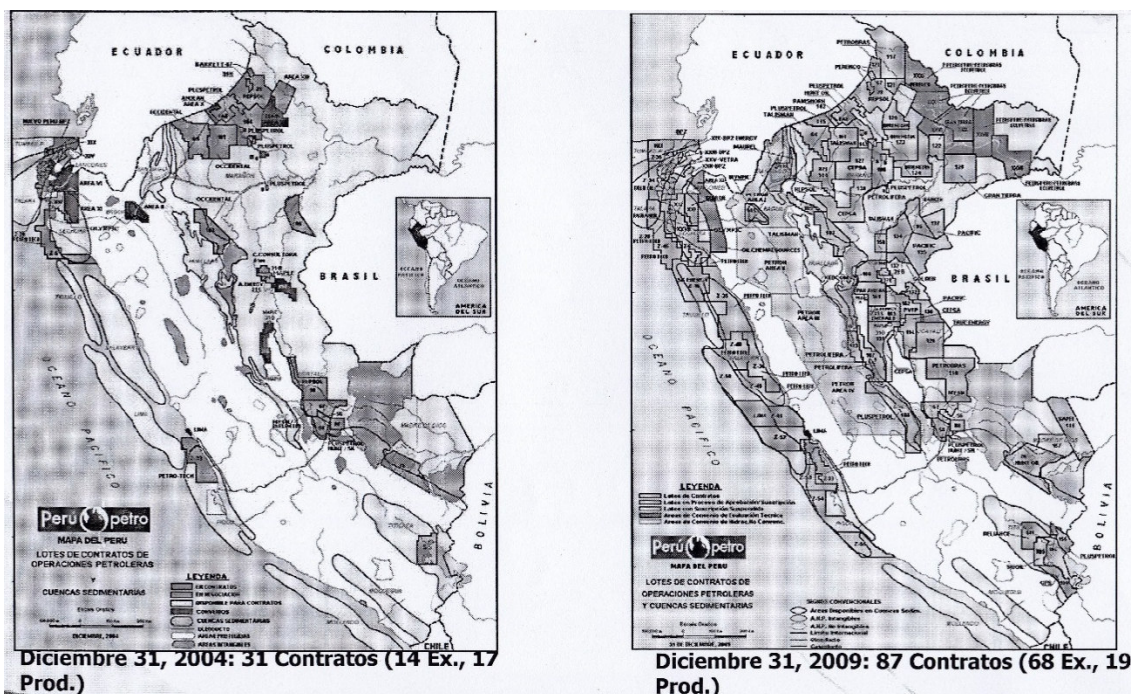
Fuente: INEI (2009).

Mapa 2: Concesión de lotes petroleros en la Amazonía peruana



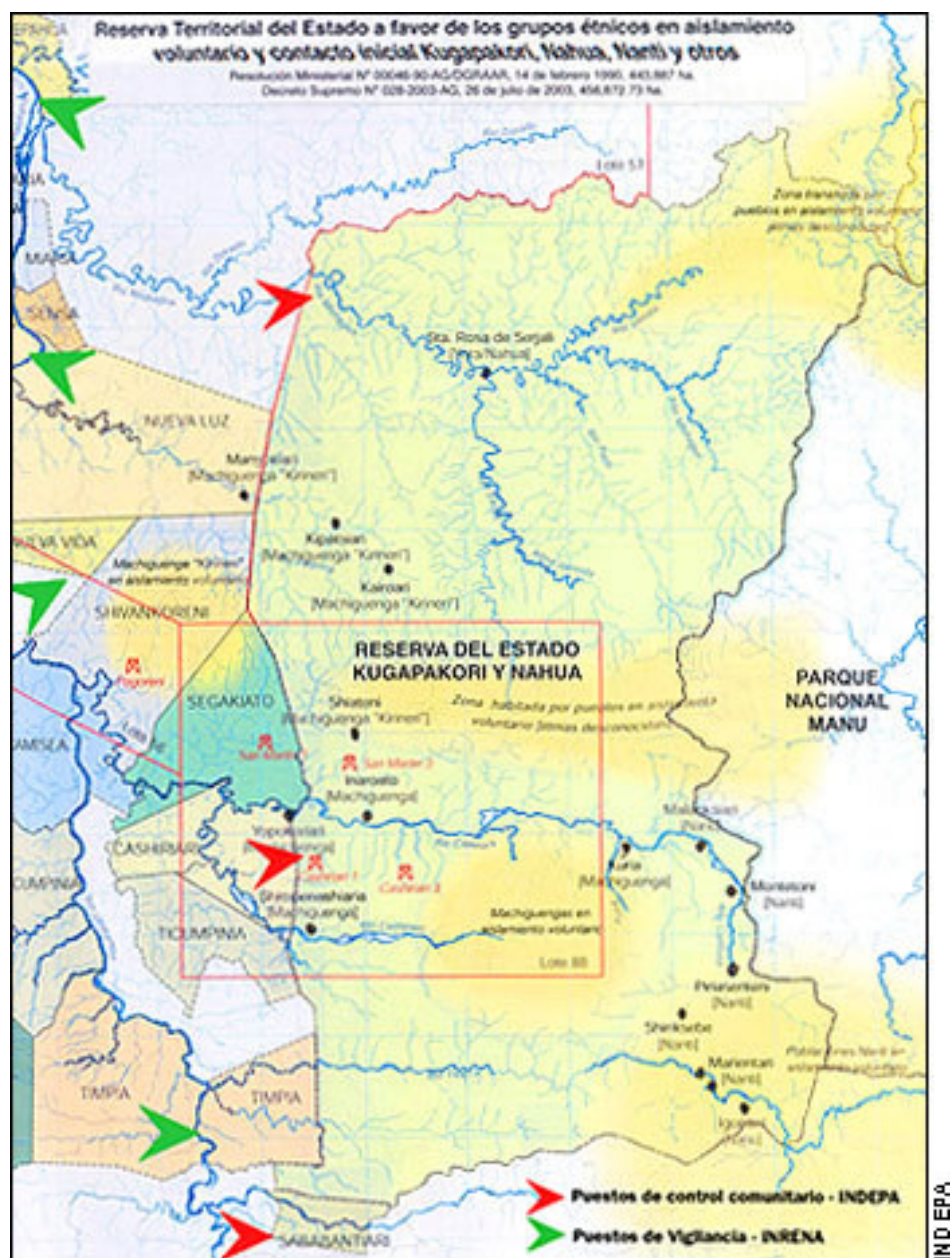
Fuente: Perúpetro.

Mapa 3. Mapas comparativos de aumento de lotes de hidrocarburos en la Amazonía peruana, 2004 - 2009



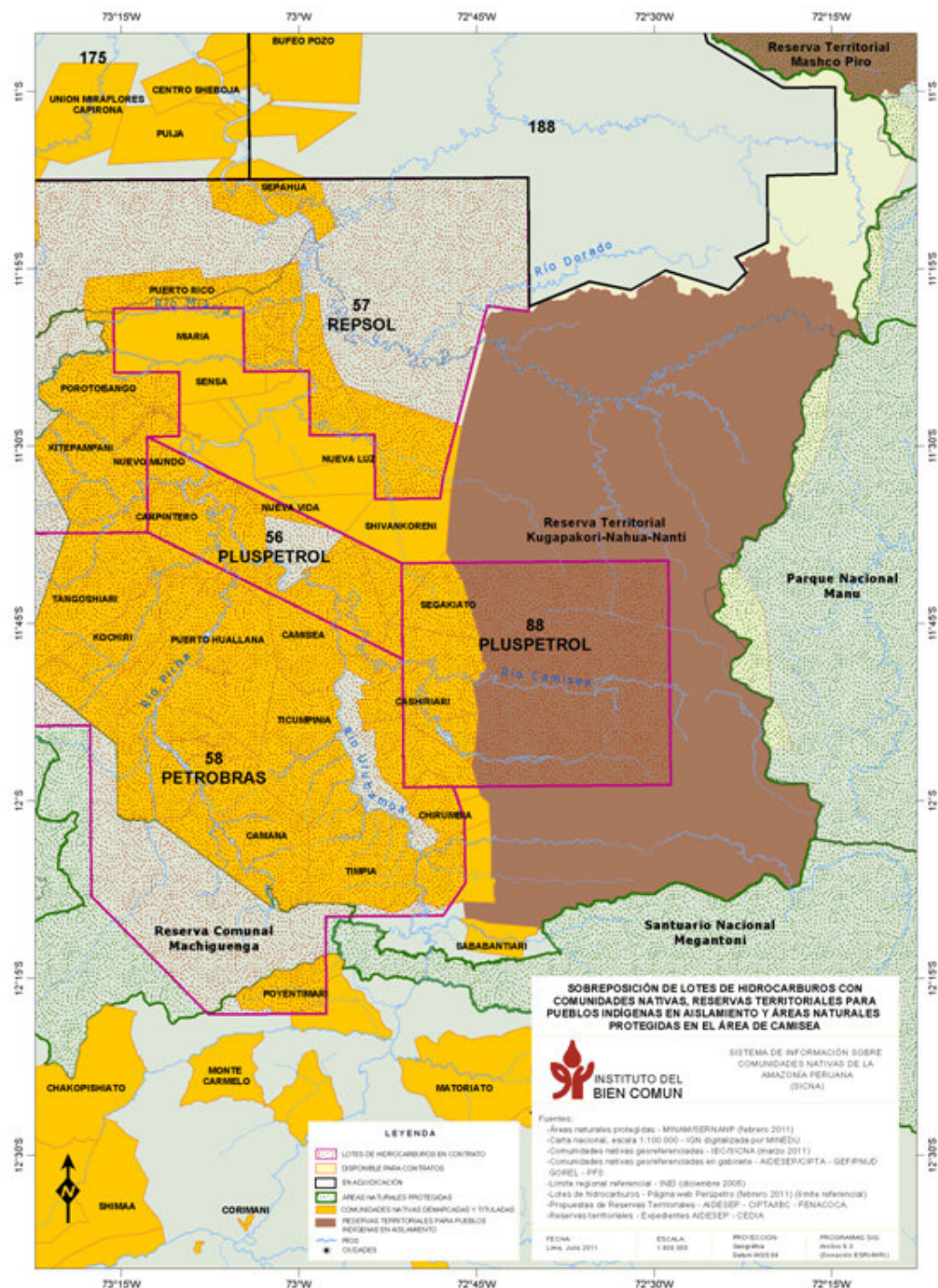
Fuente: Perupetro.

Mapa 4: Reserva del Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori, Nahua, Nanti y otros



Fuente: Shinai Serjali.

Mapa 5: Proyecto Camisea y superposición de lotes de hidrocarburos en reservas territoriales para pueblos en aislamiento voluntario, comunidades nativas y áreas naturales protegidas



Fuente: Instituto del Bien Común (IBC).